

Causa Rol N° 114.011.-
Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre.

Temuco, veinticinco de mayo de dos mil veinticuatro. -

VISTOS:

ÍNDICE

Relación de la Sentencia.....2-5

Resumen ejecutivo..... 6

Actuarios de tramitación y dato técnico..... 6-7

En cuanto a las tachas.....7-9

En cuanto a la Acción Penal:

Declaraciones (21).....9-54

Documentos (28).....54-63

Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....63-69

Calificación jurídica de los hechos.....69-76

Concepto de Lesa Humanidad.....77-79

Declaraciones indagatorias:

Declaración indagatoria y su respectivo análisis.....80-114

En cuanto a las Defensas.....114-117

Consideraciones previas al análisis de la defensa:

Resumen ejecutivo del auto acusatorio.....117-119

Estado de Derecho.....119-125

Obligación de Investigar..... 125-147

Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.....147-159

Convenio de Ginebra.....159-160

Análisis de la defensa específica.....160-178

Acusaciones particulares y análisis.....178-180

Reflexiones de lesa humanidad.....180-188

Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:

Atenuante de responsabilidad penal.....188

Institución de Media prescripción o prescripción gradual.....188-192

Agravantes de Responsabilidad Penal.....192-194

Determinación de la Pena.....194-195

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....195-205.

En cuanto a la Acción Civil:

Demanda civil.....205-211

Contestación de la demanda civil211-219

Análisis de la contestación de la demanda civil..... 219-232

Acreditación probatoria del daño moral..... 232-235

Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas..... 235

Aspectos Resolutivos..... 236-241

RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 114.011** del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, para investigar el delito de homicidio calificado de Victoriano Segundo Fernández Coloma y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, R.U.N. 3.085.228-1, chileno, natural de Victoria, casado, 89 años de edad, Abogado ex Fiscal Militar, domiciliado en camino a Villarrica Km 19, comuna de Pucón, extracto filiación y antecedentes de fs. 1734 a fs. 1737 (Tomo V) y de fs. 1820 a fs. 1824 (Tomo V).

Se inició la causa por auto cabeza de proceso que consta a fs. **1 a fs. 2(Tomo I)**, con fecha 26 de octubre de 2011.-

A fs. 123 a fs. 133 vuelta (Tomo I), con fecha 30 de diciembre de 2011, interpuso **querella criminal** Rodrigo Ubilla Mackenney, subsecretario del interior, en contra de todos aquellos que resulten responsables, ya sea en calidad autores, cómplices y encubridores por los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado consumado, cometido en la persona de Victoriano Segundo Fernández Coloma, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 1251 a fs. 1255 (Tomo IV), interpuso **querella criminal Sebastián Saavedra Cea**, en representación de María Eugenia Castillo Cares, Julián Hernán Fernández Castillo, Segundo Antonio Fernández Castillo, Mireya Carmen Fernández Castillo y Mario Iván Fernández Castillo en contra de todos aquellos que resulten responsables, ya sea en calidad autores, cómplices y encubridores del delito de homicidio calificado consumado, cometido en la persona de Victoriano Segundo Fernández Coloma, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 1602 a fs. 1640 (Tomo V), con fecha 09 de diciembre de 2022, se **sometió a proceso a OSCAR ALFONSO PODLECH MICHAUD**, como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte en la persona de Victoriano Segundo Fernández Coloma, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de diciembre de 1973. Otorgándole la medida cautelar personal de arresto domiciliario total.

A fs. 1.721 (Tomo V), con fecha 17 de febrero de 2023, la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco confirma el auto de procesamiento.

A fs. 1.769 (Tomo V), con fecha 30 de marzo de 2023, **se declaró cerrado el sumario.**

A fs. 1.771 a fs. 1809 (Tomo V), con fecha 29 de abril de 2023, se dictó **auto acusatorio en** contra de **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH**

MICHAUD, como autor del delito de Apremios ilegítimos con resultado de muerte, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Victoriano Segundo Fernández Coloma, perpetrado en la comuna de Temuco, en el mes de diciembre de 1973.

A **fs. 1.827 a fs. 1850 (Tomo VI)**, el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de María Eugenia Castillo Cares, Juan Hernán Fernández Castillo, Segundo Antonio Fernández Castillo, Mireya Carmen Fernández Castillo y Mario Iván Fernández Castillo, en lo principal formula acusación particular. Al primer otrosí de su presentación demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Álvaro Sáez Willer, abogado procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Temuco, solicitando se condene al demandado a la suma de \$1.000.000.000 (mil millones de pesos), lo que se desglosa en \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, o la suma que el Tribunal determine en justicia, con reajustes de acuerdo al IPC desde la fecha de notificación de ésta demanda, más interés legales y las costas del juicio.

A **fs. 1.881 a fs. 1890 (Tomo VI)** la abogada Carolina Contreras Rivera, abogada en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formula acusación particular en contra de Oscar Alfonso Podlech Michaud, como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte en contra de Victoriano Fernández Coloma, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal de la época, condenándolo en definitiva e imponiendo la pena de **5 años de presidio menor en su grado máximo**, más las sanciones accesorias legales, con costas.

A **fs. 1916 a fs. 1949 (Tomo VI)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil** deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea, solicitando tener por contestada la demanda y, en definitiva, acoger las excepciones o

defensas opuestas (Improcedencia de reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados por los demandantes en conformidad a las leyes de reparación; Excepción de Prescripción Extintiva); negando lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable de que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización, de perjuicios, además de acoger la excepción que mira los reajustes e intereses y su cómputo, e improcedencia de condena en costas.

A fs. 2125 a fs. 2149(Tomo VI), el abogado Alfonso Podlech Delarze en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud en lo principal de su escrito opone excepciones de previo y especial pronunciamiento; al primer otrosí: se tenga presente en cuanto a los documentos justificativos de los hechos a que se refieren las excepciones opuestas; en el segundo otrosí: en subsidio de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, contesta la acusación fiscal y particular en los términos que señala y plantea excepciones de fondo; en el tercer otrosí: tacha de testigos, fundándolas y acreditándolas; en el cuarto otrosí: medios de prueba; en el quinto otrosí: lista de testigos y minuta; en el sexto otrosí: en subsidio, beneficios de la ley 18.216.-

A fs. 2186 (Tomo VI), con fecha 21 de agosto de 2023, se recibió la causa a prueba.

A fs. 2.213 (Tomo VI), con fecha 04 de octubre de 2023, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. 2.214 (Tomo VI), con fecha 04 de octubre de 2023, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A fs.2.218 (Tomo VII), fs. 2.215 (Tomo VI), fs. 2.219 (Tomo VII), fs. 2.235 (Tomo VII), fs. 2.236 (Tomo VII), fs. 2.237(Tomo VII), fs. 2.243(Tomo VII) y de fs. 2.248 (Tomo VII), se dictaron medidas para mejor resolver.-

A fs. 2.258 (Tomo VII), con fecha 25 de mayo de 2024, se trajeron los autos para fallo.

RESUMEN EJECUTIVO:

- **TACHAS 1° al 4°**
- **ACCIÓN PENAL 1° al 17°: 5°) y 6°)** En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: *Declaraciones y Documentos; 7°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 8°) y 9°) Calificación jurídica de los hechos; 10°) y 11°) Concepto de Lesa Humanidad; 12°) Declaración Indagatoria de Oscar Podlech Michaud; 13°) y 14°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 15°) Defensa del Abogado Alfonso Podlech Delarze en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud; 16°) Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: A. Resumen ejecutivo del auto acusatorio; B. Obligación de investigar. C. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. D. Estado de Derecho; 17°) Análisis de Defensa Específica del Acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud; 18°), 19°) y 20°) Acusaciones particulares y análisis del Tribunal; 21°) Reflexiones sobre lesa humanidad; Circunstancias Modificadorias; de Responsabilidad Penal: 22°) y 23°) Atenuante de responsabilidad penal; 24°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; 25°) y 26°) Agravantes de responsabilidad penal; 27°), 28°) y 29°) Determinación de la pena; 30°), 31°), 32°), 33°) y 34°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores;*
EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 35° a 40°: 35°) Demanda Civil interpuestas por el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de María Eugenia Castillo Cares, Juan Hernán Fernández Castillo, Segundo Antonio Fernández Castillo, Mireya Carmen Fernández Castillo y Mario Iván Fernández Castillo; 36°) Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado; 37°) Análisis de la contestación de la demanda civil efectuada por el Fisco de Chile; 38°) Acreditación probatoria del daño moral; 39°) Montos; 40°) reajustes e intereses de las sumas demandadas.

ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- a. Fecha de inicio de la causa: 26 de octubre de 2011
- b. Actuario de Tramitación Sumario: Ignacia Pérez García y Francisca Rabié Figueroa.
- c. Actuario de Tramitación Plenario: Yessica Sobarzo y Francisca Rabié Figueroa.
- d. Tomos 7:

Tomo I de fs.1 a fs. 350

Tomo II de fs. 351 a fs. 729;

Tomo III de fs. 730 a fs. 1.110;

Tomo IV de fs. 1.111 a fs. 1.457;

Tomo V de fs. 1.458 a fs. 1.826

Tomo VI de fs.1.827 a fs. 2217.

Tomo VII de fs. 2.218 en adelante.

e. Fojas: 241

f. Considerandos: 40

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS.

1º) De **fs. 2125 a fs. 2149 (Tomo VI)** el abogado Alfonso Podlech Delarze en representación de Oscar Podlech Michaud, en el tercer otrosí de su presentación tacha a los testigos, a saber **José Heriberto Mansilla Gática** en dichos de fs. 1642 a fs. 1464 (Tomo V), **Aquiles Poblete Müller** declaración de fs. 763 a fs. 765 (Tomo III) y **Juan Labraña Luvecce** en declaración de fs. 832 a fs. 833 a fs. 765 (Tomo III), por la causal del artículo 460 N° 13 del Código de Procedimiento Penal, esto es, a los que: “declaren de ciencia propia sobre hechos que no pueden apreciar, sea por la carencia de facultades o aptitudes, sea por la imposibilidad material que resulte comprobada.” Fundamenta que ninguno tiene la calidad de testigo hábil. Define el concepto de hábil conforme al Diccionario de la Real Academia.

2º) Que a **fs. 2161 a fs. 2166 (Tomo VI)**, el Tribunal confiere traslado.-

3º) Que de **fs. 2167 a fs. 2169 (Tomo VI)**, la abogada Carolina Contreras Rivera evacua traslado. Espeta que el abogado Alfonso Podlech Delarze en el tercer otrosí de su presentación tacha a ciertos testigos, los cuales los indica de manera errónea y sin dar cuenta de cuáles serían los medios probatorios de los que se hará valer para acreditar la tacha. Cita el artículo 493 del Código de Procedimiento Penal. Atina que respecto al testigo Heriberto Mansilla Gática las

fojas citadas no corresponden a sus declaraciones. Que respecto a Aquiles Poblete Müller, que de sus dichos se descarta que no tenga conocimiento de los hechos que se investigan. Y en relación a Juan Labraña Luvecce la declaración de fs. 765 está mal individualizada y de la declaración de fs. 832 depone respecto a la víctima de autos y su permanencia en el regimiento Tucapel de Temuco.-

4°) Que del estudio de los alegatos de las partes, mérito del proceso y su relación con las normas del artículo 460 y siguientes y 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, en relación a la tacha de los testigos, el tribunal argumenta lo siguiente:

A. Que del estudio del escrito de tacha se aprecia que este no cumple con el estándar que establece el artículo 493 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, porque en ningún caso se ha indicado circunstanciadamente la inhabilidad que afecta a los testigos, ni menos se han aportados antecedentes suficientes para avalar dicha inhabilidad.

B. Que en cuanto a la tacha deducida en contra de Aquiles Poblete Müller por la defensa del encausado Oscar Podlech Michaud, contemplada en el numeral 13 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, en ningún caso se ha indicado circunstanciadamente la inhabilidad que afecta a los testigos, ni menos ha aportado antecedentes suficientes para avalar dicha inhabilidad. Por otro lado, cabe consignar que en conformidad al mérito del proceso, el testigo Poblete Müller, fue parte de un grupo de detectives (jefe de este grupo), que fue asignado al Regimiento Tucapel. Quienes tomaron durante el tiempo de estadía múltiples declaraciones, estuvo en las torturas y conocía tanto al Capitán Nelson Ubilla Toledo como al acusado Podlech Michaud, y por supuesto toda la dinámica desde que un detenido por razones políticas ingresaba al Regimiento Tucapel, ya sea a un sector de apreios o torturas como a la fiscalía y su posterior ubicación en algún espacio del regimiento, gimnasio chico, cuadra, etc. Luego no es posible porque no existe ningún elemento para acreditar la tacha, acoger lo pedido por la

defensa. En consecuencia esta tacha **se rechaza** disponiéndose así en lo resolutivo.

C. En cuanto a los testigos Juan Heriberto Mansilla Gatica y Juan Bautista Labraña Luvecce. De inicio no entiende el Tribunal cual es el fundamento en virtud del cual estos testigos son inhábiles. Cabe hacer presente que fueron parte integrante del Regimiento Tucapel y dan cuenta de los hechos que les tocó presenciar y vivir. A mayor abundamiento, la cita que realiza el Abogado defensor respecto de estos testigos no corresponde al proceso, toda vez que cita las fs. 1642 a fs. 1464 (Tomo V) y de fs. 765 que corresponde a constancias de correos electrónicos enviados en la causa, el escrito de un abogado interviniente, y parte de la declaración de otro testigo, las verdaderas declaraciones de estos testigos rolan de fs. 1462 a fs. 1464 (Tomo V) y de fs. 832 a 833 (Tomo III), respectivamente. En consecuencia también esta tacha **se rechaza** y así se dispondrá en lo resolutivo.

D. Finalmente cabe hacer presente a la defensa lo que describe además el artículo 464 del Código de Procedimiento Penal, que prescribe: “Los jueces apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de testigos que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 459. Tales declaraciones pueden constituir presunciones judiciales. Igualmente las de testigos de oídas, sea que declaren haber oído al procesado, o a otra persona.”

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL.

5°) Que a **fs. 1771 a fs. 1809 (Tomo V)**, con fecha 29 de abril de 2023, se dictó auto acusatorio en contra de **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, como autor del delito de Apremios ilegítimos con resultado de muerte, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Victoriano Segundo Fernández Coloma, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de diciembre de 1973.

6°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia de los señalados ilícitos penales, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se

encuentran en el auto acusatorio de fs. 1771 a fs. 1809 (que corren de fs. 1 a 1.770), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES (21):

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. María Eugenia Castillo | 11. Carlos Luco Astroza |
| 2. Marcos Rivas Matamala | 12. Hernán Raúl Quiroz Barra |
| 3. Pedro Juan Fernández Coloma | 13. Raúl Binaldo Schonherr Frías |
| 4. José Vasquez Montecinos | 14. José Raúl Inzunza Reyes |
| 5. Edith Del Carmen Caro León | 15. Aquiles Alfonso Poblete Müller |
| 6. José Avelino Vásquez Montecinos | 16. Daniel Arnoldo Aguirre Mora |
| 7. Héctor Ulises González Castro | 17. Juan Bautista Labraña Luvecce |
| 8. Francisco Segundo Maraboli Sobarzo | 18. Juvenal Lagos Osses |
| 9. Erasmo Ricardo Villanueva Simón | 19. Carlos Roberto Urquiza Iglesias |
| 10. Orlando Moreno Vasquez | 20. Francisco Jerónimo Matta Iturra |
| | 21. José Heriberto Mansilla Gática |

A.1 María Eugenia Castillo Cares (23 a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 24 a fs. 26 (Tomo I), fs. 33 a fs. 34 (Tomo I), fs. 56 (Tomo I), fs. 148 (Tomo I), fs. 222 (Tomo I) y de fs. 258 (Tomo I).-

En declaración extrajudicial del 22 de noviembre de 2011, **de fs. 24 a fs. 26 (Tomo I)**, funda que contrajo matrimonio con Victoriano Segundo, en diciembre de 1965, con quien tuvo cuatro hijos, a saber Mario Iván, Juan Hernán, Mireya Carmen y Segundo Antonio, todos menores de edad para 1973. Aproxima que junto a su marido e hijos en 1973 vivían en el Fundo Loncovaca, ubicado a una distancia de 06 kilómetros de Villarrica por camino a Freire. Ese fundo era propiedad de Oscar Schleyer, era tractorista y hasta en los meses previos del golpe, ese fundo fue tomado por los trabajadores y se le denominó asentamiento por la razón o la fuerza. Destaca que su marido era el presidente del asentamiento. Dentro de lo que recuerda, una vez ocurrido el golpe, continuaron viviendo en el asentamiento, en una oportunidad fue allanado por efectivos militares del regimiento Tucapel de Temuco, fecha en la cual no recuerda, pero los

militares no se llevaron personas detenidas. Dice que el 11 de diciembre de 1973 dos carabineros de la comisaria de Villarrica, llegaron hasta su domicilio en el asentamiento para notificar a su marido, que se presentara a las 08:00 horas del 12 de diciembre, en el cuartel de investigaciones de Villarrica. Junto a él fueron notificados Avelino Vásquez, Edith Caro, Vicente Barrera y Marcos Rivas. Continúa, el 12 de diciembre del año en comento, su marido concurrió junto a dichas personas al cuartel de investigaciones de Villarrica, donde debía presentarse. Anexa que debido a su preocupación por ignorar el motivo de la citación, a eso de las 9:00 horas le solicitó a su hermano Bartolomé que fuera hasta el cuartel de investigaciones a interiorizarse de lo que pasaba con Victoriano, pero este regresó al poco tiempo, comentándole que vio a un vehículo llevarse a su marido junto a las otras personas en dirección a Temuco. El 13 de diciembre concurrió al cuartel de Investigaciones de Villarrica a objeto que algún funcionario le dieran una explicación respecto al paradero de su marido. Cuenta que lo atendió un funcionario, cuyo nombre ignora, y le manifestó que a Victoriano lo entregaron a la fiscalía militar del regimiento de infantería N°8 Tucapel de Temuco. Atestigua que dos días después fue hasta el Regimiento Tucapel de Temuco en ese lugar consultó por su marido, pero un militar de quien no recuerda su identidad, le dijo que Victoriano no se encontraba detenido en el lugar. Regresó a Villarrica y nuevamente se acercó al cuartel de investigaciones a relatar lo sucedido, pero esta vez la atendió un funcionario policial quien no da mayores antecedentes, lo único que le dijo fue reiterar que Victoriano lo había entregado a los militares del Regimiento Tucapel. Refiere que un día su cuñado Pedro Fernández Coloma, la contactó y le dijo que había conversado la situación de su marido a su patrón, quien al parecer era pariente de un Mayor de Ejército y dijo que debía concurrir nuevamente a Temuco. Es así, que de forma casi inmediata viajaron a Temuco hasta la oficina de su patrón la cual se ubicaba en el centro de la ciudad. En esa dependencia, los atendió este señor cuya identidad no recuerda y les comunicó que pudo averiguar que su marido estaba muerto y su cuerpo sin

vida se encontraba en la morgue del Hospital Regional de Temuco. Ante tal situación, junto a Pedro se dirigieron hasta el Hospital Regional, pero al llegar a ese lugar se les informó que el cuerpo de su marido había sido sepultado en el Cementerio General de Temuco. Verificando lo precedente. Posteriormente, ya de regreso en Villarrica se dio cuenta que las personas que habían sido detenidas junto a Victoriano habían quedado en libertad, recordando que conversó en una oportunidad con Vicente Barrera, del cual supo que junto a su marido fueron llevados hasta el Regimiento Tucapel de Temuco, haciendo mención que la última vez que lo vio con vida, fue en una oportunidad que los militares sacaron a Victoriano de la habitación en que se encontraba con la vista vendada y con sus manos amarradas, según Vicente esto fue el mismo día en que llegaron al Regimiento, es decir el 12 de diciembre de 1973. Soflana que su marido vestía una chomba roja, pantalón y zapatos negros, no recuerda muy bien si su camisa era blanca o celeste. Es posible que puedan aportar otros antecedentes personas como Avelino Vasquez y Edith Caro, ya que de las personas que fueron detenidas junto a su marido son las únicas que aún permanecen con vida.

En **declaración jurada** del 1 de abril de 1991 de **fs. 33 a fs. 35 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 148, depone que es esposa legítima de Victoriano Segundo Fernández Coloma, tractorista, nacido el 23 de septiembre de 1945, inscrito bajo el N°671 de 1945 en la circunscripción del registro civil de Villarrica. El 11 de diciembre de 1973 su esposo, antes individualizado recibió una citación a la que se le comunicaba que se debía presentar el 12 de diciembre a la prefectura de investigaciones de Villarrica. Ese día su esposo salió a las 08:00 aproximadamente con destino a la unidad policial no regresando al hogar, por lo que se dirigió al día siguiente, o sea el 13, averiguar su situación. Allá se le manifestó por parte de un inspector que su esposo fue entregado a la justicia militar. Invoca que fue a la fiscalía militar de Temuco para indagar sobre su paradero o destino, en forma desesperada, ahí buscaron en los libros de detenidos y él no aparecía registrado. Según sus indagaciones pudo constatar que

su esposo fue citado conjuntamente con otras 4 personas, entre las cuales el recuerda el nombre de tres, Marcos Rivas, Abelino Vasquez, Edith Caro, domiciliados en Potue Bajo, Pichilarquen y en Santiago, respectivamente. Al entrevistarse con ellos musita que le comentaron tener prohibición de dar información al respecto. Ante su insistencia y desesperanza, el señor Vásquez le manifestó que lo habían sacado del recinto con los vendados e ignoraba su paradero. El 22 de diciembre de 1973 fue nuevamente a la fiscalía militar en Temuco, acompañada de su cuñado Pedro, quien trabajaba para el señor Fiscal Militar, allí se les informó fehacientemente que su marido estaba muerto, en palabras textuales “ese tipo murió”, y que fue entregado al hospital regional. De inmediato fue al hospital y en informaciones le confirmaron la información y que estaba sepultado en el cementerio de Temuco. A la fecha de la detención de su esposo y posterior fallecimiento tenían cuatro hijos, Mario Iván, Juan Hernán, Mireya Carmen y Segundo Antonio, todos Fernández Castillo, de 7, 5, 3 años y el menor de 6 meses de edad.

En **declaración judicial** del 12 de septiembre de 1991 de **fs. 56 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 222, ratifica en forma integral la querella, anexa que ignora el domicilio de su cuñado Pedro Fernández, persona a través de la cual sabe que su esposo había fallecido, ya que trabajaba para un hermano del Fiscal Militar en Temuco, solo supo que vive en la población Juan Pablo Segundo. Supo que falleció y fueron al cementerio, donde efectivamente había una sepultura con una cruz y el nombre de su esposo.

En **declaración judicial** del 28 de febrero de 2012 de **fs. 258 (Tomo I)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 24 a fs. 26. Además de sus dichos de fs. 33 a fs. 34, fs. 45 a fs. 47, fs. 56 a fs. 57 y fs. 222 a fs. 223. Explica que cuando consultó por su marido en la Fiscalía Militar de Temuco, la persona que lo atendió negó la detención de su esposo y dijo: “esos perros se queman y se botan”. A ese lugar fue en varias oportunidades hasta que el jefe de su cuñado, cuyo nombre ignora, se ofreció para averiguar lo ocurrido. Su esposo actualmente está

sepultado en el cementerio municipal de Temuco, pero no tiene certeza que su cuerpo este allí. Arguye que en estos año junto a sus hijos han sufrido buscando justicia.

A.2 Marcos Rivas Matamala (48 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 67 a fs. 69 (Tomo I) copia fs. 181 a fs. 183 (Tomo I), fs. 263 a fs. 264 (Tomo I), fs. 267 (Tomo I) y de fs. 280 a fs. 281 (Tomo I).-

En **declaración judicial** del 25 de septiembre de 1991 de **fs. 67 a fs. 69 (Tomo I)**, copia de fs. 181 a fs. 183 (Tomo I), soslaya que trabajaba en el fundo Loncovaca de propiedad de Oscar Schleyer junto a Victoriano Fernández, Abelito Vásquez, Edith Caro y su marido de apellido Ruiz y varios más, es el caso en que un día en que había venido varias personas del fundo en un tractor a esa ciudad a comprar sus cosas y al regresar para allá, una de las señoras que fueron a comprar junto a su marido, a estas alturas no recuerda quien era, se iba a sentar sobre una caja grande de cartón donde guardaron mercadería, 10 juegos de herradura, dos cajas de clavo, remedios para vacunar animales, fierro de tractor que se llaman pistón, es decir todos las cosas que eran para el fundo las colocaban en la misma caja. Ese pistón don Mínimo Vasquez lo mandó arreglar a Temuco, y justo ese día llegó así que lo dejaron en la caja. Aclara que los que iban en el tractor no trabajaban para don Oscar, ya que cuando ocurrió esto del fundo se quedó trabajando un tiempo más con don Oscar. Al deponente lo tuvieron que despedir porque tenían muchos trabajadores y el campo era poco, entonces lo inscribieron para las parcelas. Cuando iban de regreso con las cosas y la señora esta se iba a sentar sobre las cajas, Victoriano Fernández le dice no sé siente ahí porque hay metralletas, esto la señora lo creyó y más tarde dio cuenta a investigaciones. La Policía de investigaciones eran unos cinco más menos los que fueron trasladados a la Fiscalía Militar de Temuco. Al llegar a este lugar, el primero que llamaron a declarar fue Victoriano Fernández , no volviéndolo a ver nunca más, más después que llamaron al deponente, le vendaron la vista y lo hicieron pasar a otra sala donde le aplicaron corriente y le hicieron preguntas, acerca de si

era del MAPU o a qué partido político pertenecía, les contestaba que a ninguno, que era independiente, sin embargo continuaban aplicando corriente hasta que cayó desmayado y oía a uno que decía que hicieran lo posible por salvarlo, porque ya se les fue uno cortado, para que se iban a ir con otro, enseguida sintió que le sobaban los brazos y lo llevaron del suelo para llevarlo a otra sala, ahí sacaron la venda y se recuperó un poco, después llegó Rodolfo Ruiz, esposo de doña Edith. Más tarde los trasladaron a la cárcel por 24 horas y soltaron, como era tarde, fueron a alojarse donde un conocido de Ruiz y al día siguiente se fueron, no volviendo a ver a los otros. En un momento la señora de Victoriano, les preguntó por él, pero indicaron que no lo habían visto. Ignora los nombres de los funcionarios policiales que los trasladaron a Temuco.

En **declaración extrajudicial** del 27 de febrero de 2012 de **fs. 263 a fs. 264 (Tomo I)**, copia de fs. 280 a fs. 281, aquilata que en 1973 trabajaba como campero en el Fundó "Loncovaca" de propiedad de don Óscar Schleyer Spremuller, actualmente fallecido, ubicado camino a Freiré y Pedregoso, fundo al cual llegó a laborar a contar del año 1962, lugar donde conoce a Victoriano Fernández Coloma, quien se desempeñaba como obrero y tractorista. Espeta que en fecha posterior al golpe militar ocurrido el día 11 de septiembre de 1973, llegaron al Fundo tres Detectives en una camioneta, así que fui a preguntarles que necesitaban, siendo detenido inmediatamente después de haberles dicho su nombre. Posteriormente, no recuerda si fue en sus casas al interior del fundo que fueron detenidos Victoriano Fernández Coloma, José Vasquez Montecinos, Rodolfo Ruiz y su esposa Edith Caro León, siendo todos subidos a la camioneta y llevados hasta el Cuartel de Investigaciones de Villarrica, lugar donde permanecen alrededor de diez a quince minutos, para luego los mismos Detectives y en la misma camioneta, ser llevados al Regimiento "Tucapel" de Temuco. En el Regimiento los vendaron y trasladaron a una dependencia donde permanecieron los cinco. Ese mismo día comenzaron los militares a sacar a uno por uno para ser interrogados, recordando que el primero que salió de la pieza fue Vasquez

Montecinos, y posteriormente los demás. En su caso durante el interrogatorio es sometido a torturas y preguntaban por las armas, y que debía cooperar ya que uno de ellos ya había muerto. Después de su interrogatorio, es conducido a una celda, juntándose nuevamente con José Vasquez Montecinos, Rodolfo Ruiz y su esposa Edith Caro León, pero Victoriano Fernández Coloma no se encontraba, presumiendo que él era la persona muerta a la que se referían los militares durante el interrogatorio, no volviéndolo a ver más. Al día siguiente, fueron llevados en micro y sin vendas a la Cárcel Pública, lugar donde permanecieron por una noche, siendo dejado en libertad al otro día junto a Rodolfo Ruiz, para luego regresar al Fundo a las actividades normales. Hace presente que al momento de su detención con José Vasquez Montecinos, Victoriano Fernández Coloma, Rodolfo Ruiz y su esposa Edith Caro León, se produjo producto de una broma que Fernández le habría hecho a las esposas de Vasquez de nombre Alicia Muñoz y a la señora de Ruiz, en circunstancias que días antes de la detención, mientras Fernández transportaba en un coloso cajas de clavos y remedios para los animales, les señaló que no se sentaran sobre las cajas, ya que en el interior habían metralletas, por lo que presume que una de ellas denunció lo ocurrido a Investigaciones de Villarrica.-

En **declaración judicial** de 29 de febrero de 2012 de **fs. 267 a fs. 268 (Tomo I)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 263 a 264, 67 a 69 y de fs. 181 a 183. Cuando le estaban aplicando corriente observo que le pusieron unas mariposas en los brazos. Mientras lo torturaban le preguntaban por su militancia política. Uno de ellos, cuando dijo su edad, señaló que hartó había vivido así que ahora se iba a ir cortado. No rememora las mujeres que iban en el coloso el día en que Fernández Coloma hizo la broma, pero eran las esposas de quienes iban allí, excepto la esposa de Fernández Coloma y la del deponente, quienes se quedaron en sus casas. En la pieza donde los dejaron en el Regimiento Tucapel, sólo estaban los cinco. Desconoce las identidades y los grados de los militares que participaron en su tortura, porque estaba vendado. Atina que los detectives de

Villarrica sólo se limitaron a citarlos y llevarlos al regimiento Tucapel de Temuco. Para esto, los trasladaron en una camioneta cerrada. En el regimiento fueron dejados en una habitación y posteriormente dos militares les vendaron la vista para llevarlo a la sala de torturas. Por el temor que ese hecho le generó, jamás hizo algún reclamo ante la autoridad ni ha prestado más declaraciones. Los detectives no exhibieron ninguna orden judicial al momento de detenerlos.-

A.3 Pedro Juan Fernández Coloma (33 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 84 (Tomo I) copia a fs.197 (Tomo I) y de fs. 245 a fs. 246 (Tomo I).-

En declaración judicial del 15 de octubre de 1991 de **fs. 84 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 197, cuenta que se enteró por intermedio de su padre, que su hermano Victoriano fue arrestado. En ese entonces su padre llegó a su domicilio en el lugar Millaray y le señaló que su esposa no tenía más información del paradero de Victoriano y que por favor intentará algo, así es que habló con la señora que en ese entonces era su patrona y se contactó con el abogado Claudio González de Temuco, fue hasta su oficina y él llamó para todos lados, hasta que le informaron desde una Comisaria de Carabineros, al parecer, que su hermano estaba muerto a consecuencia de un ataque cardiaco mientras se encontraba en la Fiscalía y enviado al Hospital Regional de Temuco donde permaneció cinco días sin que ni un familiar lo reclamará, motivo por el cual la municipalidad se hizo cargo y dio sepultura. Informó de lo precedente a su cuñada y ella tramitó una pensión de viudez con el abogado. Además ignora que reclama, si tiene pensión de viudez y convive con otro hombre. Desconoce la razón de la detención de su hermano y el nombre del fiscal militar de la época.-

En declaración extrajudicial del 19 de enero de 2012 de **fs. 245 a fs. 246 (Tomo I)**, suma que es hermano de la víctima de los hechos denunciados. Para el año 1973, residía en el Camping Millaray, el cual se encuentra camino a Pucón, de propiedad de don Carlos González, quien para ese entonces era Abogado de la Corte de Apelaciones de Temuco. Respectó a los hechos que rodearon la

detención y muerte de mi hermano, no recuerda exactamente, pero parece fue diciembre de 1973, en circunstancias que un grupo de militares lo detuvo mientras se encontraba en su domicilio junto a su familia en el fundo Loricoyaca, que era propiedad de un señor de nombre Óscar Schleyer, fallecido. Revela que Segundo, su hermano, era dirigente de este asentamiento agrícola, teniendo como cargo él de presidente. Más antecedentes puede aportar su cuñada María Castillo Cares, quien se encontraba con él, al momento de su detención. Urde que se enteró de la detención de su hermano a los días después de ocurrida la situación por su padre, quienes le pidieron que hablara con el su patrón para poder ubicarlo en Temuco. Es así, que le conversó su problema con don Carlos González, quien tras efectuar algunas indagaciones en Temuco, logró averiguar que su hermano se encontraba fallecido y que su cuerpo sin vida estaba en la morgue del Hospital Regional de Temuco. Fue junto a su cuñada hasta el mencionado hospital, pero ahí les dijeron que debido a que nadie había reclamado su cuerpo, éste fue sepultado en el Cementerio Municipal de Temuco, logrando ubicar después su tumba con la ayuda de un panteonero. Narra que después supo que a su hermano lo llevaron detenido al Regimiento de Infantería N° 08 "Tucapel" de Temuco, lugar donde habría estado junto a don Minino Vasquez y Benito Salamanca, ambos residentes del Fundo Loncovaca. Su hermano habría fallecido producto de un culatazo que le había dado con un fusil un Oficial del regimiento, situación que le habría ocasionado la muerte a Segundo.

A.4 José Abelino Vasquez Montecinos (40 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración judicial** del 25 de septiembre de 1991 de **fs. 69 a fs. 70 (Tomo I)**, copia de fs. 184, expresa que fue citado por Investigaciones, junto a varios parceleros del fundo Loncovaca. El motivo de la detención era para interrogarlos y saber si tenía armas. El fundo había sido tomado por los trabajadores y por ello se pensaba que tenían armas. En cuanto a doña Edith Caro lo último que supo de ella fue a Santiago, ignora su domicilio. Una vez en Temuco, en el Regimiento los llevaron a declarar a la Fiscalía, cuando le tocó, le vendaron

la vista y trasladaron a otra pieza, allá le aplicaron corriente y comenzaron hacer preguntas de armas, donde las tenían y la dejaron en el suelo por muerto, pero desmayada, así que le sacaron la venda. Al día siguiente lo soltaron en la tarde, como no andaba con un cinco, un policía del regimiento lo trajo hasta el bus para que no le cobraran el pasaje. No volvió a ver a Victoriano Fernández, aclara que estuvieron en el asentamiento donde trabajaba en comunidad, después fue dividido en parcelas, cuando la señora Fernández les pregunto por él, le dijeron lo mismo.-

A.5 Edith Del Carmen Caro León (24 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 90 (Tomo I), fs. 204 (Tomo I), fs. 332 a fs. 334 (Tomo I) y de fs. 650 (Tomo II).-

En declaración judicial del 30 de octubre de 1991 de fs. 90 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 204, en lo pertinente no aporta antecedentes.-

En declaración extrajudicial del 22 de mayo de 2012 de fs. 332 a fs. 334 (Tomo I), apunta que para el año 1973 tenía 29 años de edad, casada con Rodolfo Ruiz y tenían 5 hijos menores de edad, vivían en el fundo Loncovaca, del cual su marido era trabajador. El fundo paso a ser un asentamiento llamado por la razón o la fuerza, del cual era presidente Victoriano Fernández Coloma. Con su marido no tenían militancia política e ignora cuál habría sido la de Fernández Coloma. Previo a la detención fueron citados al Cuartel de La Policía de Investigaciones de Villarrica junto a su marido, Victoriano Fernández Coloma, Abelino Vasquez, Marcos Rivas y la deponente, no recordando quienes los fueron a citar, pero debían presentarse en el cuartel policial a eso de las 15:00 o 16:00 horas de ese mismo día. Al llegar a la unidad policial, fueron recibidos por un Detective relativamente joven, cuya identidad ignora, quien les comunicó que serían trasladados a la Fiscalía Militar de Temuco, no dándoles a conocer el motivo. Es así, que posteriormente los hicieron abordar una camioneta y los trasladaron hasta el Regimiento Tucapel de Temuco, donde son entregados en la guardia de esta unidad militar, quedando al interior de una sala o calabozo donde

había otros detenidos. Soslaya que el militar que los custodiaba no les dio explicación, hasta que al cabo de una hora se apersonó otro militar en el calabozo y se llevó a Victoriano Fernández, posteriormente después de una hora a Abelino Vasquez, Marcos Rivas y finalmente a Rodolfo, su marido. Destaca que no la llevaron, a excepción de Fernández, el resto llegó al calabozo en muy malas condiciones físicas ya que fueron interrogados bajo la aplicación de torturas, recordando que su marido venía muy mal, su piel estaba amoratada incluyendo sus labios a su parecer le aplicaron corriente. Desconoce por qué la detuvieron y no la interrogaron como lo hicieron con su marido y el resto, solo sabe que en el regimiento estuvimos un par de horas y posteriormente a los interrogatorios a los que fueron sometidos los demás, los subieron a un bus militar dejándola en el hogar "El Buen Pastor" y el resto de los detenidos en la Cárcel Publica de Temuco. En el "Buen Pastor", estuve ocho días después de los cuales quedó en libertad, por lo que regresó inmediatamente al asentamiento donde estaban los hijos, por su parte, su marido quedó en libertad a los cinco días de mi llegada al fundo, no siendo detenidos nunca más. Sobre Victoriano Fernández Coloma, la última vez que lo vio fue en los calabozos de Regimiento Tucapel, enterándose al tiempo después que este había fallecido al interior de la unidad militar, esto lo supo por el comentario de los mismos trabajadores del fundo, recordando que no hubo funeral porque su cuerpo no apareció. Sobre su consulta, ni su marido ni Abelino Vásquez ni Marcos Rivas, nunca le comentaron si vieron a Victoriano en la sala de torturas del Regimiento Tucapel.

En **declaración judicial** del 18 de agosto de 2015 de **fs. 650 (Tomo II)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 332 a fs. 334. A su pregunta, Victoriano Fernández Coloma estaba casado con doña Eugenia Castillo con quien tuvo dos hijos al parecer, pero ignora sus nombres y dónde se encontrarían en la actualidad. A los pocos días de haber regresado al asentamiento se enteraron de que Victoriano Fernández había falleció en el

Regimiento. Él fue el único que no regresó. Nunca entregaron su cuerpo, según supo.

A.6 José Avelino Vásquez Montecinos (40 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 250 a fs. 251 (Tomo I) y de fs. 260 a fs. 262 (Tomo I).-

En declaración extrajudicial del 19 de enero de 2012, **de fs. 250 a fs. 251 (Tomo I)**, depone que para el año 1973, tenía la edad de 40 años, vivía junto a su familia en el asentamiento agrícola "Loncovacá", donde se desempeñaba como tractorista. El fundo era propiedad de don Oscar Schleyer. De Segundo Fernández Coloma, lo recuerda como presidente de este asentamiento agrícola y también como su amigo, ya que los criaron juntos. La detención se produce a partir de una citación que recibió en el fundo "Loncovacá", la cual ordenaba que junto a él debieran presentarse en el Cuartel de Investigaciones de Villarrica, Edith Caro León, Rodolfo Ruiz, Marcos Rivas Matamala y deponente. Concurrieron hasta ese cuartel policial, la mañana del día 12 de diciembre de 1973, quedando todos detenidos en esa unidad, debido a que se creía que tenían armas en el fundo, siendo posteriormente trasladados a Temuco en un vehículo particular, cuyo dueño era un hombre que tenía una zapatería en Villarrica. En dicho vehículo los llevaron hasta el Cuartel de Investigaciones de Temuco, donde los derivaron al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. En dicho recinto militar, ingresaron en primera instancia a un calabozo, donde permanecieron un par de horas. Posteriormente los trasladaron hasta otra dependencia con la vista vendada y torturados en base a aplicación de corriente eléctrica. Aclara que del calabozo los sacaron de uno y condujeron a la sala de tortura. En dicho lugar fue la última vez que vieron a Segundo Fernández Coloma, a quien lo sacaron para torturarlo y no regresó. Las demás personas con las que llegó al regimiento, es decir sus compañeros del asentamiento, fueron trasladados hasta la Cárcel Pública de Temuco, quedando solo en el regimiento, siendo liberado al día siguiente. Después de quedar en libertad, se fue inmediatamente hasta Villarrica, llegando

en horas de la tarde hasta el fundo "Loncovaca". A los días después, quedaron en libertad las demás personas que fueron detenidas y ninguno de ellos supo que pasó con Segundo.

En **declaración judicial** del 28 de febrero de 2012, de **fs. 260 a fs. 262 (Tomo I)**, ratifica sus declaraciones extrajudiciales de fs. 247 a fs. 248 y sus dichos de fs. 69 a 70 y de fs. 169 a 170. A su pregunta, el motivo por el cual fue detenido Victoriano Fernández Coloma fue días antes le gastó una broma a doña Edith Caro León. En la oportunidad fue buscar una bomba hidráulica para un tractor del asentamiento a la ciudad de Temuco. Cuando regresó se subió a un coloso junto con Fernández Coloma, la señora Caro y otras personas del asentamiento. El deponente llevaba la bomba en un alambre. Además, sobre el coloso iba un saco con clavos herrar y herraduras. En los momentos en que la señora Edith Caro se iba a sentar sobre la bolsa antes señalada, Fernández Coloma le dijo que no se sentara allí porque había una bomba. La señora no se sentó y quiso levantar la bolsa, encontrándola muy pesada. Seguramente esta señora le contó a alguien que trasladaban una bomba y pasados algunos días funcionarios de Investigaciones de Villarrica los fueron a citar, incluida la señora Edith Caro. Se presentaron en Investigaciones de esta ciudad y desde ese lugar son trasladados en un vehículo particular hasta el cuartel de Investigaciones de Temuco. Ese mismo día los trasladaron al Regimiento Tucapel, donde los dejaron en un calabozo ubicado en la entrada esa unidad militar. En ese lugar estaba la señora Edith Caro y su esposo de nombre Rodolfo Ruiz, Victoriano Fernández Coloma, Marcos Rivas Matamala y deponente. Desde ese lugar los fueron sacando de a uno. Yo fui el último en ser sacado de esa habitación sin que hasta ese momento hubiese regresado alguno de los detenidos. Un militar lo condujo hacia el interior del regimiento y en el trayecto se juntó con otro uniformado, quien sacó unas vendas que estaban ocultas en unos matorrales. Le vendaron la vista y condujeron hacia una habitación donde lo sentaron en una silla, amarraron las manos y pies. Posteriormente, comenzaron a aplicar corriente en los brazos y

espalda a la vez que preguntaban por la ubicación de las armas que supuestamente mantenían ocultas en el asentamiento. Especula se desmayó dos o tres veces mientras lo torturaban. Lo reanimaron en todas las oportunidades para continuar con la sesión. Escuchó varias voces por lo que presume había un grupo de personas presentes en la sesión de torturas. A su pregunta, el método para aplicar corriente era poner en los brazos y espalda un objeto duro y al parecer redondo. También, cada vez que comenzaban a aplicar la corriente zumbaba una máquina que recordaba el ruido que hace una soldadora. A su pregunta, parece que pasó media a una hora sufriendo torturas. Después de esto, lo sacaron de esa sala y llevaron de regreso al calabozo donde estaba cuando llegó al regimiento. Allí pasó la noche y al día siguiente lo llevaron a una dependencia interior donde una persona le comunicó que iba a quedar en libertad. Esta misma persona, lo llevó a tomar el bus de regreso a Villarrica y le pidió al chofer que no le cobrara, pues no tenía dinero. A su pregunta, a Victoriano Fernández Coloma no lo volvió a ver con vida. Esta persona no regresó al calabozo después que lo sacaron para ser interrogada. Las otras personas fueron derivadas a la cárcel y dejadas en libertad días más tarde. Ignora qué le había ocurrido a Victoriano Fernández Coloma, quien tenía 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos.-

A.7 Héctor Ulises González Castro (36 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial del 27 de noviembre de 2012 de fs. 296 a fs. 297 (Tomo I)**, para el 11 de septiembre de 1973, servía en la Policía de Investigaciones de Villarrica, en ese lugar era jefe de unidad. Eran ocho funcionarios a su cargo, recuerda a Álvarez, quien era chofer y hombre de confianza, entre otros. Todos los funcionarios de investigaciones tenían un apodo, al deponente lo conocían como "caballo loco". No recuerda el apodo de los otros funcionarios. Una vez producido el golpe militar, tenía 32 años. Recuerda que ese día, se reunieron con el personal y les dije que toda diligencia debía ser comunicada. Atestigua era el jefe y debía resolver los conflictos que se generaran. En Villarrica se movilizaban en un jeep. No tuvieron contacto con otras

instituciones, como Carabineros o Ejército, después del 11 de septiembre de 1973. No participó de reuniones con las fuerzas de orden o militares. Ese día llegó un camión del ejército a preguntarles con quien estaban, así que les dijo que iban a obedecer las órdenes superiores. El Regimiento, en septiembre de 1973, pedía que se les llevaran detenidos a dirigentes sociales de la ciudad de Villarrica. Los solicitaba telefónicamente y sin órdenes escritas. Al ver esta situación, llamó al Fiscal Militar, Alfonso Podlech Michaud y coordinaron una reunión para analizar la situación en la que regularizaron la forma en que se solicitaban a los detenidos. Desde esa fecha el Fiscal Militar, Podlech, ordenó que todo se hiciera por escrito. Como detenidos políticos nombra a toda la directiva del campamento "Che Guevara". Ellos se presentaron voluntariamente en la Comisaría. Ellos manifestaron que estaban a disposición de Investigaciones. Fueron enviados detenidos a la Fiscalía Militar de Temuco. Todos regresaron sin problemas e incluso lo pasaron a ver. Respecto al caso de José Victoriano Fernández Coloma, es primera vez que escucha ese caso y desconoce las circunstancias de su muerte. Los nombres Edith Caro, Rodolfo Ruiz, Victoriano Fernández Coloma, Marcos Rivas Matamala y José Abelino Vásquez Montecinos, no le son conocidos. Es primera vez que escucha de sus detenciones. Conoció mucho el sector de Villarrica, ya que llegó en el año 1970. Recuerda que en el desempeño de su cargo, siempre fue un hombre Justo.

A.8 Francisco Segundo Maraboli Sobarzo (31 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 312 a fs. 314 (Tomo I) y de fs. 353 (Tomo II).-

En declaración judicial del 27 de noviembre de 2012 de fs. 312 a 314 (Tomo I), hace una breve reseña de su carrera funcionaria. En lo pertinente aquilata que en el año 1971, es destinado a la Comisaría Judicial Villarrica en la cual se desempeñó hasta el día 20 de septiembre de 1973, porque fue separado de sus funciones quedando arrestado en la Prefectura de Temuco de manera arbitraria, ya que su jefe directo el Inspector Héctor Ulises González lo acusó de

tener ideas contrarias al gobierno militar. Posteriormente, es expulsado de la Institución. Para el mes de septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo funciones en la Comisaría Judicial de Villarrica, para esa época ostentaba el grado de Detective 1ro. Ignora todo antecedentes de Victoriano Segundo Fernández Coloma, por haber sido expulsado para la fecha de la institución. Que la unidad policial contaba solamente con un Jeep marca Land Rover el cual casi siempre estaba fuera de servicio. Dos o tres días posteriores al golpe de estado es detenido por Inspector Héctor Ulises González, el Regidor de Villarrica, quien pertenecía al Partido Socialista, según su recuerdo González le ordenó que lo acompañara a efectuar según él una diligencia no dando mayores detalles. En el trayecto, le comentó que había recibido un dato respecto a la ubicación de un regidor de Villarrica quien había sido mencionado en un Bando Militar. Recuerdo, que llegamos a una cabaña ubicada en las afueras de la ciudad, donde vimos a este señor quien se alegró de ver a González, ya que eran amigos, pero el mencionado Oficial Policial desconoció ese hecho y de manera prepotente y violenta obligó a este señor subir al vehículo en que se movilizaban, recuerda muy bien esta situación ya que el regidor se arrodilló ante el Detective y abrazándole las piernas le rogó que no lo llevara detenido ya que probablemente lo matarían. Revela que se generó una fuerte discusión con Ulises González por el trato que le estaba dando a esta persona, incluso sabía que eran amigos y en un momento le dije "para que te lo vas a llevar si sabes que lo van a matar". Posteriormente, González lo puso a disposición del Regimiento "Tucapel". Espeta que no trasladó a este señor a Temuco, sabe que fue González y otra persona. Desde esa fecha, comenzó a tener problemas con González, hasta el día en que le ordenó presentarse en la Prefectura de Temuco, lugar donde quedó detenido. Se refiere a otras víctimas. Finalmente, los Detectives Poblete, Quiroz y Luco eran colaboradores directos de los militares, incluso los demás colegas les temían ya que creían que ellos tenían amplias facultades. También estos detectives

interrogaban en la unidad de investigaciones de Temuco. Esto lo supo, cuando estuve detenido en Temuco.

En **declaración judicial** del 5 de septiembre de 2014 de **fs. 353 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 312 a fs. 314. No conoció a Victoriano Fernández Coloma ni supo lo que ocurrió con él.

A.9 Erasmo Ricardo Villanueva Simón (21 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **Declaración judicial** del 18 de junio de 2012 de **fs. 783 a fs. 786 (Tomo III)**, soflama que en el año 1973 se desempeñaba en una oficina de contabilidad de don Sergio Riquelme Inostroza. No tenía militancia política, alguna. Un día del mes de noviembre del año 1973, no recuerda fecha exacta, fue al Seguro Social a efectuar un trámite. En ese lugar una señora cuyo nombre es María Antonieta Meza Moncada le preguntó por la dirección de la familia de Alejandro Flores Rivera, pues quería ir a darle el pésame por la muerte de éste. Al parecer esta señora estaba siendo vigilada pues a los pocos días fue detenida y llevada al regimiento Tucapel donde fue brutalmente torturada. Días más tarde llegó hasta su casa una patrulla de militares de regimiento Tucapel, quienes allanaron su domicilio. Esto ocurrió en horas de la tarde, alrededor de las 15:00 horas, se encontraba en la oficina. Entonces recibió un llamado telefónico desde su casa en el que le dijeron que sucedía. Se dirigió hasta allá y pudo ver que un grupo de soldados conscriptos fuertemente armados estaban en las afueras. Un Suboficial, cuyo grado, características y nombre no recuerda, dice que por orden de Capitán Nelson Ubilla Toledo quedaba detenido. Se la llevaron a la guardia de regimiento Tucapel y ahí fue ingresado a una dependencia contigua donde había varios detenidos más con quienes no conversó. Estuvo dos días en ese lugar sin que dijeran nada. Durante ese período algunos conscriptos no 5 llevaban alimentos y también los sacaban al baño. Durante ese lapso iban sacando a los detenidos hacia otro sector, quienes regresaban tiempo más tarde con visibles signos de haber sido torturados. En ese lugar existía un banco similar a los que están en las plazas, lugar que era utilizado para dejar los prisioneros que

quedaban en muy malas condiciones. Al tercer día fue sacado de la guardia y llevado hacia una dependencia ubicada en una de las cuadras donde se alojaban los conscriptos. Esta cuadra era la tercera construcción dispuesta hacia el poniente de la entrada al regimiento. En esa sala cuando entró pudo ver una mesa larga a la que estaban sentadas cinco personas entre las que puede recordar un oficial vestido con uniforme de la Fach y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado Alfonso Podlech Michaud, persona a quien ubicaba de vista con anterioridad. También vio una banca similar a las de las plazas. No recuerdo quién le preguntó el nombre, pero luego de que yo revelara mi identidad el abogado Alfonso Podlech buscó en un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel. Luego de mirarlo dio una orden señalando que yo me quedaba detenido y que al día siguiente pasaba a interrogatorio. Entonces, lo llevaron de regreso a la sala junto a la guardia. Al día siguiente apareció su actual cuñado, Óscar Inostroza Segura, junto a dos conscriptos más. Este dijo que por órdenes superiores debía llevarlo a interrogatorios. Lo sacó de la guardia y tras caminar alguno 5 pasos y ponerse detrás de la sala de guardia procedió a vendarle la vista. Sin embargo, por la orientación en la que quedó antes de ser vendado y la dirección que siguieron al caminar, intuyó que se dirigían hacia la sala donde el día anterior había sido interrogado por Podlech. Continua, ahí lo desvistieron y sentaron en la banca que había visto el día anterior. Le aplicaron electricidad con un magneto. Esto lo dedujo porque a su costado izquierdo sentía que una persona hacía girar una manivela tras lo cual comenzaban las descargas. Le aplicaron corriente en el pene y en diferentes partes del cuerpo, como la sien, la boca, en los pies, detrás de las orejas, etc. Además lo agredían en los pies con algo duro que aparentemente era de goma. A su pregunta, los torturadores le preguntaban por los nombres de las personas que se reunían en la casa de Alejandro Flores, por la ubicación de armas, y por las supuestas trincheras que había armado en ese lugar. En total eran cinco a seis personas y deberían haber sido las mismas personas que vio el día anterior. Por el lenguaje utilizado por las personas presentes en la sesión de

tortura, era gente con instrucción cultura superior a la de un soldado clase. Al día siguiente nuevamente lo llevaron a sesión de tortura, pero esta vez por otros conscriptos. En esta oportunidad es nuevamente torturado al igual que el día anterior. Recuerda que uno de los torturadores le dijo que ellos habían matado a Alejandro Flores y a las personas que murieron en el supuesto asalto al polvorín. De estas últimas conoció a un señor do apellido Molina, a quien le faltaba un brazo. Tras la segunda sesión de torturas, al día siguiente llegó un militar de apellido Morales, a quien había conocido años antes en el regimiento Miraflores como el Cabo 1o Morales, cuando hizo el servicio militar en ese lugar. Esta persona vestía de civil, sacó de la sala de guardia al deponente y lo trasladó hacia un lugar apartado detrás de esta. Allí habló de buena manera tratando de que le diera información sobre nombres de comunistas o miristas. Sin embargo nada le dijo pues no conocía a nadie. Posteriormente, alrededor del octavo día de reclusión en di Tucapel es llevado a la cárcel en un camión abierto junto a cuatro o cinco personas más. En ese lugar estuvo recluido hasta el 22 de diciembre de 1973 Una semana antes fue llevado al regimiento Tucapel y allí lo ingresaron a una dependencia ubicada hacia el fondo de la unidad militar, donde es entrevistado con el abogado Alfonso Podlech. En ese lugar esta persona dijo que por decisión del tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara. Nadie dio ninguna explicación por lo sucedido y ante el temor que esto generó, decidió irse a Argentina, donde estuvo 20 años.

A.10. Orlando Moreno Vasquez (32 años a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados). **Declaración judicial** del 28 de octubre de 2014, de **fs. 372 a fs. 374 (Tomo II)**, desde septiembre de 1973 se desempeñaba en la Segunda Comandancia que estaba a cargo del Mayor Luis Jofré Soto. Con posterioridad al 11 de septiembre se formó la Sección Segunda de Seguridad a la cual es asignado para efectuar trabajos de oficina y eventualmente para efectuar patrullajes de control de toque de queda. El Tribunal le pregunta si el Regimiento Tucapel fue

centro de detención. Depone que sí, dada la gran cantidad de detenidos que llegaron al regimiento estos fueron dejados en el gimnasio donde algunos permanecieron por varios días, luego de lo cual eran dejados en libertad o trasladados a la cárcel pública por orden de la Fiscalía Militar. No le correspondió interrogar a los detenidos o presenciar interrogatorios. Dice que la identidad de las personas que interrogaban a los detenidos, por parte del Ejército era el Capitán Ubilla que era quien coordinaba todas estas actividades. Además participaban en interrogatorios el Capitán Vargas y los Tenientes Vásquez y Raimundo García Covarrubias. Entre los Suboficiales recuerda como interrogadores solo a Gajardo. También había un Capitán de Carabineros de apellido Quiroz que llegó con su equipo entre ellos los Carabineros Burgos Dejean y Navarrete. También había personal de la Policía de Investigaciones a saber, Luco, Quiroz, Morales y San Juan. Por último, existía un grupo de la Fach a cargo del Teniente Videla. Este grupo de interrogadores operaba en un gimnasio que estaba ubicado a un costado del rancho de la unidad. Sus funciones en este período de convulsión se limitaron sólo a trasladar detenidos desde el Regimiento Tucapel hacia la cárcel de Temuco y viceversa. Estos detenidos eran dejados en la guardia del regimiento una vez que pasaban por Fiscalía Militar y en virtud de una orden emanada de ése tribunal hacía los traslados. Descarga que una sola vez interrogó un detenido en la Fiscalía Militar. Esta persona era el abogado Renato Maturana Burgos, quien había sido citado para declarar algo sobre el Partido Comunista. Como todos estaban ocupados, el Fiscal le pidió que le tomara la comparecencia y para tales efectos pasó una pauta de preguntas. Ni antes ni después volvió a interrogar personas. Los detenidos eran mantenidos en un gimnasio distinto al que ha mencionado precedentemente. Respecto de los hechos materia de esta investigación el nombre de Victoriano Segundo Fernández Coloma no le resulta familiar y no lo recuerda como detenido o ejecutado. El Tribunal le da a conocer la declaración extrajudicial prestada por Raimundo Quezada Chandia, rolante de fs. 361 a fs. 363. El deponente señala: primero que todo debo indicar que no conoce al señor

Quezada Chandia ni lo recuerda como conscripto. Ahora, respecto de lo que esta persona ha dicho, efectivamente había un gimnasio chico en donde hubo personas detenidas, pero no tenía acceso a ese lugar. Allí trabajaban los detectives que fueron asignados al regimiento Tucapel, cuyas funciones coordinaba el Capitán Nelson Ubilla Toledo. Anexa que no le consta que allí se haya torturado a alguna persona. Si el señor Quezada Chandia dice que participaba en esas actividades está mintiendo o él también estaba presente, puesto que para verlo en esas actividades debería haberlas presenciado.

A.11. Carlos Luco Astroza (35 años a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados). **Declaración judicial** del 29 de octubre de 2014, de **fs. 383 a fs. 385(Tomo II)**, cuenta que el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como conductor en la Policía de Investigaciones de Temuco. Su jefe directo era el Prefecto Carlos Aranda, a quien le conducía su automóvil. Posterior al golpe militar su casa fue allanada por el Prefecto Aranda y el Inspector Matus, porque habían recibido una información en la que se le acusaba de tener armas ocultas en su domicilio. A raíz de esto tuvo un altercado con el Prefecto tras lo cual es destinado al Regimiento Tucapel. Allí estuvo bajo las órdenes del Comisario Ortiz, además en ese lugar estaban los detectives Quiroz, Poblete, San Juan y Morales. Adopta que los detectives quedaron bajo las órdenes del Capitán Nelson Ubilla Toledo, empero sujetos a lo que la Fiscalía Militar dispusiera. Revela que en el regimiento Tucapel efectuó citaciones siempre con funcionarios de su institución. En un principio tuvo a cargo una camioneta marca Chevrolet, modelo C -10, de color celeste; posteriormente llegó una citroneta, modelo AK- 6, color crema. Basa que acompañó a patrullas militares hacia el sector de Cunco y Currarehue, en una citroneta acompañando algún detective. En Cunco fueron a buscar un supuesto entierro de bombas. Fueron a Quechereguas, llegaron a una cancha de fútbol donde hacían hoyos, pero no encontraron nada. Explica que en Cunco se alojaron en la casa de los curas, cerca de la iglesia. Si bien pasó por la Tenencia de Cunco no vio personas detenidas en el lugar. Comunica que en la misión a

Currarehue, iban saliendo de Pucón por el camino hacia Caburgua, había un civil cuyo nombre no recuerda, que entregaba datos a los militares respecto de la existencia de armas en determinados lugares. Fueron a un sector donde encontraron dos cajones de tiros de dinamita. Reitera que los militares andaban bajo las órdenes del Capitán Rubio y en Currarehue, con el Teniente Espinoza. Se refiere a que una vez voló en helicóptero hacia el lago Cólico, allí aterrizaron en el fundo las gaviotas, regresando en breve tiempo al regimiento, no trajeron ni llevaron a nadie. A su pregunta, en el Regimiento Tucapel dependían directamente del Capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. El Mayor Jofré no se metía en nada, por lo que parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar. Esta persona andaba de uniforme en el regimiento. Atina que no escuchó que personas resultaran muertas al intentar fugarse o quitarles el arma a las centinelas. Ignora si alguna persona falleció al interior del regimiento producto de descargas eléctricas. Los nombres de Santiago Ornar Faundez Bustos y Victoriano Segundo Fernández Coloma no le resultan conocidos ni participó en sus detenciones. Respecto de su consulta, no recuerda a una persona que haya sido traída desde Los Ángeles por orden de la Fiscalía Militar. Ni algún joven que fuera del GAP. Los nombres de Pedro Ríos Castillo, Ambrosio Badilla Vasey, Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez, José María Ortigosa Ansoleaga y Guido Troncoso Pérez no le resultan conocidos ni los recuerda como detenidos en el regimiento Tucapel. Blasona que el nombre de Ambrosio Badilla Vasey no le resulta conocido ni lo recuerda como detenido en el Regimiento Tucapel de Temuco. Respecto de los dichos de Raimundo Quezada Chandia, cuya declaración se le ha leído, no tiene conocimiento de que los detectives hayan participado en interrogatorios ni torturas al interior del regimiento. Por lo menos nunca vio eso. Su función era solo conducir el vehículo a cargo y jamás ingresó hacia el interior de la unidad militar. En aquel tiempo no tenía poder de decisión sobre ningún aspecto de los operativos, ya que sólo era conductor.

A.12. Hernán Raúl Quiroz Barra (29 años a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados). Depone de fs. 386 a fs. 389 (Tomo II) y de fs. 1297 a fs. 1300 (Tomo IV).-

En **declaración judicial** del 29 de octubre de 2014 de **fs. 386 a fs. 389 (Tomo II)**, refiere que estuvo prestando funciones en el Regimiento Tucapel desde el 11 de septiembre de 1973 hasta diciembre 1974. El jefe de Inteligencia era el Capitán Nelson Ubilla Toledo, pero desconoce qué otros militares componían ese departamento. Lo supo por las publicaciones que salieron en el periódico hace poco tiempo, enterándose por ese medio que él era el Jefe de Inteligencia en el Regimiento Tucapel. Anexa que el grupo de detectives que fue comisionado para trabajar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar estaba a cargo del Comisario Aquiles Poblete Müller, además del Subcomisario Rigoberto Ortiz Lara, actualmente fallecido; los detectives, a saber Luis Morales Toledo, fallecido; Daniel San Juan Clavería y el deponente. Además, fue destinado como conductor don Carlos Luco Astroza. Su función era cumplir órdenes emanadas de la Fiscalía Militar. Estas eran entregadas a nuestro jefe por el Fiscal Militar, don Luis Jofré Soto. Las órdenes consistían en citar personas, aprehender a otras y llevar a cabo investigaciones. Destaca que no participó en la detención de Víctor Maturana Burgos. Sin embargo, esta persona que ha mencionado lo ha hostilizado a través del tiempo al punto de haberlo agredido en la calle, además de haberlo amenazado en otras oportunidades. Producto de eso tuvo que interponer denuncias ante carabineros. Barbulla que había más de 800 detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos 5 días allí, debiendo tomarles declaraciones y anotar sus datos. Esta tarea la realizaron escribiendo a mano, puesto que no tenían otros medios. Especula que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no lo recuerda exactamente. Sin embargo, siempre permanecieron tomando declaraciones en el patio. En esta tarea fueron ayudados por el Suboficial Schonherr de Ejército. Si participó en interrogatorios de detenidos en el

Regimiento Tucapel, pero siempre en la oficina que tenían asignada en el recinto de la Comandancia. Nunca participó en torturas de detenidos en el Regimiento Tucapel. El Tribunal le pregunta si supo que algunos detenidos hayan sido apremiados físicamente en el Regimiento Tucapel. El deponente señala que no lo supo. Basa que al mes y medio o dos después de haber llegado a trabajar en el regimiento, el Comisario Aquiles Poblete Müller y el Subcomisario Ortiz regresaron al Cuartel de Investigaciones y a fines de diciembre se fue el resto, salvo Luco y el deponente, quienes se quedaron por petición expresa del Fiscal Jofré. Quedó como enlace entre el regimiento e Investigaciones. No tuvo que salir con personal distinto a los de su institución, es decir, no salía con militares. De los detenidos difíciles que eran entregados al teniente Espinoza, esto era una orden expresa que el mayor Jofré dio al comisario Poblete. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de Carabineros, Militares o de la Fach que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaron en la oficina. Estas personas eran derivadas al Teniente Espinoza por orden del Mayor Jofré. Para esto, llamaban a la guardia para que un soldado fuera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún conscripto más tarde para ser llevado a la presencia del Tenientes Espinoza. Sin embargo, desconoce hacia dónde era llevado ni quienes lo interrogaban. Respecto de las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarle el arma a los centinelas, refiere que ese tipo de noticias las recibían al llegar en la mañana a trabajar al regimiento. Sin embargo nunca tuvieron mayores antecedentes sobre cómo ocurrieron los hechos ni tampoco podían preguntar. Estos hechos ocurrían durante la noche cuando ya no estaban en la unidad. Delibera que no supo que alguna persona falleciera al interior del regimiento producto de haber recibido descargas eléctricas. Los nombres de Santiago Omar Fáundez Bustos y Victoriano Segundo Fernández Coloma no le resultan conocidos ni participó en sus detenciones. No rememora que una persona haya sido traída desde Los Ángeles por orden de la Fiscalía Militar. NI a

algún joven que fuera del GAP. Los nombres de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez no le son conocidos ni los recuerda como detenidos en el regimiento Tucapel. El nombre de Ambrosio Badilla Vasey, Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga no lo recuerdo como detenido en el Regimiento Tucapel de Temuco. Respecto de los dichos de Raimundo Quezada Candía, musita que poco después de su llegada al regimiento el Comisario Poblete los separó en dos grupos. Uno estaba conformado por Morales, San Juan y deponente, quienes se quedaron trabajando en la Comandancia. El otro grupo, integrado por Ortiz y Poblete, se fue a trabajar hacia el interior del regimiento bajo las órdenes del Capitán Ubilla, pero desconoce dónde ni qué funciones cumplieron allí. El señor Poblete regresaba en las tardes y pedía cuenta de las órdenes que habían recibido durante el día.

A.13. Raúl Binaldo Schonherr Frías (27 años a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados). Depone de fs. 408 a fs. 409 (Tomo II) y de fs. 621 a fs. 623 (Tomo II).-

En **declaración extrajudicial** del 21 de enero de 2015 de **fs. 408 a fs. 409 (Tomo II)**, hace una breve reseña de su carrera funcionaria. En lo pertinente aquilata que en septiembre del año 1973, ostentaba el grado de Cabo 1º, en el mes de octubre ascendió a Sargento 2º y se desempeñaba en la Segunda Comandancia del Regimiento Tucapel de Temuco. Rememora al Mayor Luis Jofré Soto, como el segundo Comandante de dicha jefatura y también al Sargento 2º Orlando Moreno Vasquez, como compañero de labores en dicha sección. Espeta que sus funciones solamente se remitían a trabajos administrativos, principalmente en la confección y mejoramiento de planes de contingencia, emergencias y de reacción del regimiento, dejando en claro que no le correspondía redactar los Bandos Militares que emitía por la Comandancia del Regimiento. Atina que la oficina de archivo, después del 11 de septiembre de 1973, operaba en el mismo edificio donde se encontraba la oficina, fue destinada para que ahí funcionara la Fiscalía Militar del regimiento la que también estaba bajo el mando del Mayor Luis Jofré Soto, quien dirigía a tres actuarios, recordando entre ellos a don

Héctor Toloza. Respecto a la sección segunda del regimiento, esta se conformó en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, quedando a cargo de esta el Capitán Nelson Ubilla Toledo y siendo integrados también el Sargento Orlando Moreno Vasquez y el deponente. En la sección segunda, asumió funciones relacionadas con la planificación de seguridad del cuartel, y estar a cargo del sistema de claves es decir descifraba aquellos documentos que llegaban en clave al regimiento desde el mando superior. Atina que al regimiento llegaban personas detenidas desde distintos lugares de la IX región, a través de Carabineros, Investigaciones y la Fuerza Aérea, quienes hacían entrega de estos a la Fiscalía y posteriormente eran llevados a la Cárcel Pública de Temuco, algunos de ellos eran trasladados desde la cárcel a declarar al regimiento, en algunos casos sus traslados eran efectuados en vehículos de Gendarmería o del Ejército. También, en ocasiones acompañó a los Actuarios a obtener declaraciones de los detenidos a la misma cárcel. No supo el caso específico de detenidos que provinieran desde la ciudad de Villarrica, pero no descartó dicha situación tampoco. Blasona que ignora antecedentes de Victoriano Fernández Coloma. En relación, al fallecimiento de algún detenido al interior de la unidad militar en alguna sesión de interrogatorios bajo la aplicación de torturas por parte del grupo que se dedicaba a esa labor, explica que en una oportunidad los Actuarios de la Fiscalía comentaron que hubo un fallecido dentro del cuartel y se relacionaba al Teniente Espinoza con la muerte del detenido. Aclara que no participó en los interrogatorios que supuestamente se les aplicaba a los detenidos que llegaban al regimiento, como tampoco participó en ninguna detención, esa labor no le competía ya que siempre se desempeñaba en la comandancia de la unidad militar.

En **declaración judicial** del 14 de julio de 2015 de **fs. 621 a fs. 623 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 408 a fs. 409. Anexa que según recuerda el Sargento Osvaldo Brito Brito pasó a la Segunda Comandancia después que Orlando Moreno Vásquez integró la Sección Segunda. Soflama que no recuerda haber visto detenido a Victoriano Segundo Fernández Coloma, persona a quien no conoció. Jamás interrogó a ningún detenido político, tarea que

era exclusiva del personal que trabajaba en la Fiscalía Militar. Detalla que trabajaba en la Segunda Comandancia del regimiento que estaba bajo las órdenes del Mayor Jofré, quien también ejercía el cargo de Fiscal Militar. El personal de la Policía de Investigaciones que estaba agregado al regimiento siempre trató más con el Capitán Ubilla que con el Mayor Jofré, por lo que presume dependían más de la Sección Segunda que de la Fiscalía. De hecho el detective de apellido Quiroz iba buscar y dejar detenidos a la cárcel de Temuco. Estas órdenes le eran dadas tanto por Jofré como por el Capitán Ubilla. Este grupo, además, practicó detenciones ordenadas por ambos oficiales. Dice que el abogado Alfonso Podlech Michaud apareció en el regimiento inmediatamente después de ocurrido el golpe militar. Este abogado estuvo concurriendo al regimiento todos los días en la mañana y en la tarde. Ahora, no desconoce si era llamado por el Comandante o el Segundo Comandante, puesto que no tenía contrato con el ejército. Empero vestía de uniforme, quizás autorizado por el Comandante del regimiento, puesto que antes había estado en la Escuela Militar. A su pregunta, cumplía Podlech de asesoramiento al Fiscal en el regimiento, él se hizo cargo de la Fiscalía Militar de hecho, puesto que las labores de la Segunda Comandancia eran tantas que el Mayor Jofré difícilmente podría haber ejercido los dos cargos al mismo tiempo, aunque éste último firmaba todos los documentos. El deponente trabajaba en la Segunda Comandancia todo el tiempo junto con el Mayor Jofré. Apunta que el Carabineros de apellido Quiroz, quien iba al regimiento de vez en cuando, al igual a que a un oficial de la Fach de apellido Videla. Ellos al parecer se coordinaban con el Capitán Ubilla para ver el tema de seguridad e inteligencia. Desconoce qué temas trataban puesto que ellos se reunían en la oficina que Ubilla tenía en la Compañía de Plana Mayor. Nombra a los actuarios de la Fiscalía a Adrián González Maldonado, Héctor Toloza Fierro y a Dorian Novoa. Hace presente al Tribunal que yo llegué a trabajar a la Sección Segunda a fines del año 1973, por lo que no tenía Mayor afinidad con el Capitán Ubilla, quien tenía más confianza con el Sargento Moreno. Respecto del comentario que escuchó y que dice relación

con la muerte de una persona al interior del regimiento, se lo escuchó decir a los actuarios de la Fiscalía en un momento determinado en que la puerta de esa oficina estaba abierta. Algo dijeron sobre esto aunque no puede escuchar el nombre de la víctima, pero aparentemente el Teniente Espinoza habría tenido incidencia en ese hecho. Una vez que se dieron cuenta de que la puerta estaba abierta, la cerraron sin que pudiera saber más sobre eso.-

A.14 José Raúl Inzunza Reyes (27 años a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados). Depone de fs. 629 a fs. 631 (Tomo II), fs. 632 a fs. 635 (Tomo II), fs. 648 a fs. 649 (Tomo II) y de fs. 958 a fs. 959 (Tomo III).-

En **declaración extrajudicial** del 03 de septiembre de 2012 de **fs. 629 a fs. 631 (Tomo II)**, en lo pertinente aquilata que el 15 de enero de 1973 efectuaba el servicio militar del regimiento montaña N°8 Tucapel de Temuco, encasillado en la 1° compañía de infantería, la que estaba al mando del Capitán Vargas. Posteriormente, cumplió labores en la 1° sección de la compañía plana mayor, recordando que al mando de esta se encontraba el subteniente Romilio Lavín Muñoz, mientras que al mando de la compañía se encontraba el capitán Nelson Ubilla Toledo. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar, ese día no hubo formación general en el regimiento y se les informo de lo que estaba sucediendo en el país, por lo que impartieron nuevas instrucciones, correspondiente en su caso efectuar la custodia del domicilio del Teniente Coronel Pablo Iturriaga Marchesse. El servicio lo hacía con soldados de la compañía de plana mayor, de quienes en ese momento no recordaba los nombres. Pasado un mes, es designado por el capitán Ubilla a cumplir labores administrativas en la propia compañía de plana mayor. En primera instancia, recibía a las personas que llegaba a denunciar hechos o personas de izquierda, para lo que cual debía tomar declaraciones en una oficina de la compañía, ubicada en la misma dependencia donde trabajaba el capitán Ubilla. Del mismo modo, llevaban personas detenidas para tomarles declaración, para luego ser regresadas a la guardia o sencillamente pasaban a los interrogatorios. A medida que efectuaba su labor de manera

eficiente, fue ganando la confianza del capitán Ubilla, quien posteriormente se incorporó de forma directa en los interrogatorios, vale decir que participaba de estos, los cuales se llevaban en una dependencia destinada al descanso, ubicado al lado de los baños. En esa dependencia el detenido era acostado sobre un mesan o camilla donde se golpeaba brutalmente, y aplicaban corriente eléctrica con una máquina, que desconoce su nombre, funcionaba girando una manilla. Depone presenciaba los interrogatorios donde debía tomar apuntes sobre lo que señalará el detenido, anexa en más de una oportunidad fue ordenado por los más antiguos, aplicar corriente a los detenidos. Otra dependencia ocupada para interrogar detenidos era el gimnasio, al interior de este existía otro mesón o camilla, ubicada cercana a las fuentes de agua, donde los detenidos eran golpeados y sometidos a la corriente eléctrica. El oficial a cargo del grupo de interrogadores era el Capitán Ubilla, seguido por el sargento Arias y Silva, dos detectives, a saber Quiroz y otro que lo describe de 1,80 aproximadamente de estatura y contextura gruesa; los soldados conscriptos Libardo Schwartenski Rubio, Juvenal Lagos Osses, José Chávez Etchepare y el deponente, además de Juan Campos Valdebenito, realizaba labores administrativas. Ese era el único grupo encargado de los interrogatorios de los detenidos, no existiendo otro que recuerde, los detectives eran quienes dirigían el interrogatorio. Aproxima que los detenidos que interrogó y tomo declaración, no recuerda sus nombres, empero en dos oportunidades retiró personas fallecidas desde el interior de las salas de interrogatorio, las cuales habían muerto producto de las torturas. Esos cuerpos fueron subidos a un vehículo y llevados a destinos que desconoce. Detalla el procedimiento en el cual participó, y en que se detuvo a dos personas. Se le pregunta por Ramón Carrero Chenqueo. Finaliza que en 1974 le correspondió irse a Santiago al curso de infantería, siendo dado de baja en agosto de ese año, por problemas disciplinarios.-

En **declaración judicial** del 27 de noviembre de 2012 de **fs. 632 a fs. 635 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial. Revela que el Capitán Nelson

Ubilla Toledo lo llamó para trabajar junto al detective Quiroz a efectuar diligencias. Ese detective era de contextura delgada y más bajo que el deponente. Fue en dos oportunidades a buscar detenidos a la cárcel, de los cuales no recuerda el nombre, pero eran jóvenes. Esas personas permanecieron en la guardia. Se refiere a otros hechos. En lo pertinente blasona que tomó declaraciones a los detenidos en una oficina ubicada en la compañía de plana mayor, al lado de la oficina del capitán Ubilla. Suma que en esta oficina estaba el Sargento Silva y en una dependencia contigua el suboficial Quilodran. Ese lugar se les tomaba los datos a los detenidos. Hacia el mando de la cuadra de la compañía de plana mayor, junto a los baños, se ubicaba otra sala mucho más grande, donde se interrogaba a los detenidos. En ese lugar se sometían a torturas a los detenidos mediante la aplicación de electricidad y golpes de puño. Reitera que había una camilla o un somier de fierro, donde se acostaban a los detenidos, los que venían con su vista vendada. En esos interrogatorios participaba el capitán Ubilla, el detective Quiroz junto a otros cuyo nombre no recuerda, pero era alto, el sargento Arias, los conscriptos Chaves Etchepare, Juvenal Lagos Osses, Schwartenski Rubio, Campos Valdebenito y el deponente. Campos era regalón de Ubilla. Dice que estuvo presente en cuatro interrogatorios, dos de los cuales le ordenaron dar vuelta la manivela de la máquina de electricidad. En las otras oportunidades lo hizo el detective Rubio y el Sargento Arias, aunque ellos se turnaban. Se refiere a las torturas recibidas por una mujer joven. Continúa que si bien nunca vio a los otros oficiales del regimiento participar en las sesiones de tortura e interrogatorios era común ver al teniente Vásquez Chahuan y Espinoza conversar con el Capitán Ubilla. Se refiere a los hermanos García Covarrubias. Atestigua que en dos oportunidades, haciendo turno de clase de servicios en su compañía, sacó dos cadáveres desde la sala de torturas, puesto que al personal se le había pasado la mano con la electricidad. Tuvo que despejar el área alejando a los soldados conscriptos del lugar y llamar a un vehículo para que se llevara a estas personas, supone al hospital. Reconoce que hubo muchos detenidos en el regimiento

Tucapel. Algunos eran mantenidos en la guardia y otros en el gimnasio del regimiento. En este último lugar eran interrogados los detenidos por el mismo grupo antes indicado y otros oficiales, suboficiales, conscriptos y detectives, cuyas identidades desconoce. Fue en dos o tres oportunidades acompañando al detective Quiroz, pero solo observó, fueron duramente torturados. Los nombres de Ambrosio Badilla Vasey, Guido Troncoso Pérez, Pedro Ríos Castillo y Santiago Faundez no le resultan conocidos ni los recuerda como detenidos en el regimiento Tucapel. Se refiere al asalto al polvorín del Regimiento Tucapel. No recuerda al abogado Alfonso Podlech porque no iba a la comandancia a interrogar ni dejar o buscar detenidos.

En **declaración judicial** del 17 de agosto de 2015 de **fs. 648 a fs. 649 (Tomo II)**, ratifica sus declaraciones extrajudiciales prestadas en la causa rol 113.089 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, rolante de fs. 1.103 a fs. 1.105; y la judicial de fs. 2.107 a fs. 2.110. Quiere rectificar y aclarar sus dichos en el sentido de indicar que no le correspondió retirar los cadáveres de las dos personas a que hizo referencia. Lo que sucedió en realidad es que en esas dos oportunidades estaba cumpliendo el rol de clase de servicios en la Compañía de Plana Mayor. En esa condición pudo ver que en dos oportunidades retiraron los cuerpos de personas desde la sala de interrogatorios, envueltos en una frazada. No pudo identificar la identidad de estas personas. A su pregunta, quienes estaban siempre al interior de la sala de interrogatorios eran el Capitán Ubilla, los detectives Quiroz y Morales y el Sargento Arias. Ellos deben saber lo que sucedió con las personas antes indicadas. Respecto de su consulta, ignora la identidad de la mujer a la cual desnudaron en la sala de interrogatorios. Tampoco tuvo conocimiento de que esta haya sido abusada sexualmente. Esa es la única mujer que vio detenida en el regimiento. Aparte del Capitán Ubilla vio entrar a varios oficiales a esa sala de interrogatorios mientras se efectuaban estos. Sin embargo, no podría identificar a algunos de ellos. Lo que sí tiene claro es que constantemente entraban y salían de esa sala oficiales del regimiento, no solo de

su compañía por lo que no tiene dudas en que todos sabían los que sucedía al interior de esa dependencia. Respecto de la víctima Victoriano Fernández Coloma, invoca que no le resulta conocido ni lo asocia a alguna de las dos personas que resultaron fallecidas en la sala de torturas. A su pregunta, existía otro lugar donde se torturaba a los detenidos y que era el gimnasio chico ubicado a un costado de los comedores de los conscriptos. En ese lugar estuvo y pudo ver en dos oportunidades cómo se torturaban personas. Siempre era el mismo grupo de interrogadores. A su pregunta, solo tomó los datos y declaración a algunas personas detenidos en la oficina del Capitán Ubilla escribiendo a mano, pues que no sabía mecanografiar. Dice que Libardo Schwartenski era más cercano al Capitán Ubilla y tenía más acceso a la oficina de este oficial. Espeta que él junto a otros conscriptos se fue a Santiago a recibir el curso de inteligencia. Esto debe haber ocurrido en diciembre de 1973 o enero de 1974. No lo recuerda muy bien. Tiene un recuerdo vago de su presencia en la Navidad de 1973 cuando el Suboficial Mayor Quilodrán lo castigó físicamente por haberlo increpado debido a que se negó a darle la llave de la sala donde veían televisión. En ese lugar había un televisor que los conscriptos habían comprado. Al parecer Schwartenski estaba en Temuco en esos momentos. O quizás se fue en noviembre a Santiago. La verdad es que no lo tiene muy claro. A su consulta, aparte de las dos personas fallecidas en los interrogatorios no tiene conocimiento de algún otro hecho similar ocurrido en el regimiento o fuera de este.

En **declaración extrajudicial** del 25 de julio de 2017, de **fs. 958 a fs. 959 (Tomo III)**, anexa a sus dichos precedentes y en lo pertinente que, ratifica lo declarado anteriormente en el sentido que funcionarios interrogaban a detenidos bajo aplicación de tortura, consistente en golpes y corrientes al interior de una sala ubicada en la compañía de plana mayor y servicios. En relación a las personas fallecidas debían sacar de la sala de torturas de compañía de plana mayor y servicios, situación que dio a conocer al tribunal y personal de la policía de investigaciones años atrás, en ambos casos fue de manera separada, cree que

con una semana o poco más de diferencia. Aclara que ese día estaba de servicio y recibió la orden de un funcionario que no recuerda, que debía despejar el pasillo de la cuadra de su compañía y había que sacar el cadáver de la sala, envueltos en frazadas y subirlos a un camión que se aculató en las dependencias de la compañía, para posteriormente ser llevados en ambas ocasiones al hospital regional de Temuco. No supo mayores detalles al respecto, no pudo ver el rostro de las víctimas, ya que estaban envueltos en frazadas. No recuerda los funcionarios o soldados que estuvieron presentes en ambas ocasiones, presume la probabilidad que en estos casos hayan estado en conocimiento del personal que se desempeñaban en los interrogatorios, los cuales eran mencionados en párrafos anteriores.

A.15 Aquiles Alfonso Poblete Müller (43 años a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados). Depone de fs. 763 a fs. 765 (Tomo III) y de fs. 766 a fs. 767 (Tomo III).-

En declaración judicial del 29 de diciembre de 2008 de **fs. 763 a fs. 765 (Tomo III)**, funda que en septiembre de 1973 se desempeñaba como Jefe Territorial de Investigaciones de Ferrocarriles, que comprendía la jurisdicción de Cajón a Puerto Montt, especula tenía el grado de Inspector. Es destinado al regimiento Tucapel de Temuco, desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. Junto con el deponente fueron asignados Rigoberto Ortiz, Luis Morales y Hernán Quiroz. Respecto del chofer Carlos Luco, parece que estuvo en el regimiento, pero no estaba a su cargo. Nadie más fue asignado al regimiento, dos menos que recuerda. En el regimiento fueron recibidos por el Comandante de la unidad quien los presentó al Capitán Ubilla, informándoles que a partir de ese momento trabajaríamos bajo sus órdenes. En el regimiento cumplían diversas funciones, como citaciones y cosas por el estilo. Efectivamente interrogaron detenidos políticos, eran seis médicos provenientes de Puerto Saavedra, aunque ignora sus nombres. No recuerda haber trabajado junto con los suboficiales Moreno, Schonherr ni Rubilar. Los

interrogatorios los efectuaban en una oficina grande, que era como una cuadra, y posteriormente en un gimnasio. El deponente practicaba los interrogatorios en presencia de Quiroz, Ortiz y Morales. Los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que obtenían la información e informaban los avances de los interrogatorios al Capitán Ubilla, quien muchas veces presenciaba estas entrevistas. Desconoce la filiación política de los médicos. Espeta que el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. Fundamenta que no presenció ni participó de las torturas en el Regimiento Tucapel. A su pregunta, las personas que interrogaban en el gimnasio del regimiento Tucapel estaban allí en calidad de detenidos y se veían muy cansados. Por lo general, se les preguntaba acerca de la existencia de armas y por filiación política. En total debo haber interrogado a diez personas en total, pudiendo recordar a un joven que dijo ser GAP, pero que tras el interrogatorio descubrieron que no era tal. Posteriormente, un oficial, al parecer Ubilla, dijo que a este joven "se lo había llevado el señor". Otra persona que a quien tomó declaración fue a un corredor de autos de apellido Ortigosa. Toda la información se le entregaba Ubilla y éste, a su vez, le entregaba los antecedentes a la Fiscalía Militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que, según supo, era el Fiscal, Los nombres de Hermán Carrasco Paúl, Florentino Molina Ruiz, Juan Chávez Rivas, Víctor Valenzuela Velásquez, Juan Ruiz Mansilla, Amador Montero Mosquera, Pedro Mardones Jofré y Raúl Buholzer no le son conocidos ni recuerda haberlos interrogados. Tampoco recuerda haber interrogado a algún minusválido. No tiene memoria de haber conocido al conscripto Juan Carrillo. Enrique Keller era agricultor de Lican Ray, pero no lo vio en el regimiento. Se refiere a otros hechos. Basa que se retiró del regimiento en enero de 1974, pero se quedó trabajando en ese lugar Hernán Quiroz quien no quiso retirarse. Dice que su equipo junto al oficial Ubilla estaban presentes en los interrogatorios. A su pregunta, nunca vio presenciar interrogatorios Alfonso

Podlech ni estuvo presente cuando éste decidía el destino de los detenidos, pero se comentaba mucho este hecho. Cuenta que un médico del regimiento utilizaba pentotal en los interrogatorios.

En **declaración judicial** del 30 de julio de 2012, de **fs. 766 a fs. 767 (Tomo III)**, ratifica su declaración rolante de fs. 224 a 226 y de fs. 3206 a 3207. Reconoce que sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esa persona quien determinaba sus destinos. Dice haber interrogado a un joven perteneciente al GAP. Esta persona cuando la entregaron estaba muy frisqueada, es decir los militares de inteligencia lo habían torturado bastante. Él se refirió con lujos de detalles a la estructura del palacio de moneda, por lo que no hubo necesidad de apremiarlo. Ese joven era delgado, audaz y fue ejecutado por los militares. Un soldado cuya identidad ignora dijo que al joven se lo había llevado el señor. Se le pregunta por Guido Troncoso Pérez. Decanta que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, que era el teniente Rubio, sin embargo no cabe duda que todos los oficiales sabían de eso. De José Ortigosa Ansoleaga, lo recuerdo totalmente frisqueado, estaba botado en el piso y el deponente le colocó el pie sobre el pecho. Él le dijo que estaba comprando un campo en la zona Pucón- Villarrica y por esta razón lo detuvieron. A él los militares lo asesinaron. Desconoce el nombre de los militares que trabajaban con ellos, pero siempre fue el mismo grupo de conscriptos y clases. No recuerda que un joven haya muerto durante los interrogatorios producto de las torturas. Se refiere a Hernán Henríquez Aravena. Arguye que interrogó detenidos en una sala ubicada a una cuadra del regimiento, donde aplicaban electricidad a los detenidos. Tanto Quiroz como Ortiz participaban dándole vuelta al dínamo, pero al que más utilizó fue a Quiroz, puesto que Ortiz participaba más de los interrogatorios, en tanto Morales era torpe y servía para trasladar detenidos y propinarle golpes. Las terminales eléctricas se la ponían en cualquier parte del cuerpo. Desarrolla que el detective Quiroz no quería regresar a investigaciones junto con ellos, prefería

quedarse trabajando con el grupo de inteligencia de los militares. Ese hombre se transformó en una persona cruel en el trato de los detenidos. El clima dentro del regimiento se hizo insostenible y por eso decidió retirarse del lugar.

A.16 Daniel Arnoldo Aguirre Mora (41 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **Declaración judicial** del 01 de agosto de 2012 de **fs. 787 a fs. 790 (Tomo III)**, ratifica su declaración rolante de fs. 3043 a fs. 3045 (declaración aportada en otra causa), con excepción de aquella parte en que indica que el detective Apablaza habría sostenido una conversación con el deponente después de haber sido liberado, cosa que jamás ocurrió. El detective Nambrad conversó con su esposa y le señaló las torturas en el regimiento Tucapel. Los funcionarios asignados al regimiento pasaron a depender de la inteligencia militar bajo las órdenes del capitán Nelson Ubilla Toledo. Adopta que el grupo de detectives del Tucapel estaba bajo las órdenes de Aquiles Poblete Müller, luego de un mes y medio ese oficial y Ortiz se retiraron del regimiento para volver a sus funciones normales. Dos meses más tarde lo hicieron el resto de los detectives, menos Quiroz, quedo como enlace y Luco regresó en abril de 1974. Esos funcionarios fueron desleales con la institución y con el resto de sus compañeros. Los culpa a ellos de las torturas que sufrieron los detectives que fueron detenidos. El funcionario Luco tuvo problemas en el regimiento por tomar atribuciones que no le correspondía. De Alfonso Podlech, refiere que un año antes que ocurriera el golpe militar, el abogado iba al cuartel de investigaciones a requerir información de tipo político. Cuenta que se entrevistaba con el Prefecto Leonel Hormazábal y detective Quiroz. Supo que le entregaba esa información a alguien en el regimiento Tucapel, pero desconoce quién. Esa información la obtenía desde los archivos que la inteligencia de investigaciones tenía. Esa información la usaba el grupo de patria y libertad, según comentaban los funcionarios. Posterior al 11 de septiembre de 1973, Podlech siempre mantuvo muy cercano y activo dentro del regimiento Tucapel. Inclusive en una oportunidad en que el Prefecto se presentó ante la junta chica de Temuco, él estaba con ellos. Anexa que en noviembre de

1973 quedo de prefecto subrogante y se produjo una fuga de personas detenidas en el regimiento Tucapel, los que fueron dados de baja. Entonces fue al regimiento para pedir antecedentes para tenérselos al prefecto cuando regresará. Al llegar a dicho lugar se entrevistó con el comandante Iturriaga Marchesse y Alfonso Podlech. Entonces el comandante le dijo que solo le comunicara al prefecto que los detenidos habían intentado fugarse. Entre los detenidos estaba una persona a la que le faltaba un brazo. De los funcionarios de investigaciones detenidos, fue en octubre de 1973, cuando estaba de jefe subrogante de la prefectura, llegaron dos oficiales Fach, entre los que recuerda a uno de apellidos Cáceres, quien le exhibió una orden refrendada por el director general de investigaciones, don Ernesto Baeza Michelsen para que investigaciones prestara todo tipo de colaboración en las actividades que ellos iban a realizar, esto era investigar a los funcionarios Ramón Apablaza, Víctor Pérez y Fernando Nambrad. Más aún, iban a detenerlos. En ese momento, solo se encontraba con Apablaza, a quien estas personas allanaron e intentaron ponerle las esposas, a lo que el deponente se opuso disponiendo que personal de investigaciones lo acompañará al vehículo en que iba a ser trasladado. Al día siguiente, el Capitán de Ejército, Nelson Ubilla Toledo le comunico que debía trasladar hasta el regimiento Tucapel a Fernando Nambrad. Personal de la institución trasladaron al funcionario a la presencia de Ubilla. Dos días más tarde llamó al regimiento para saber el destinando, comunicándole que lo habían trasladado a la Fach. Algunos meses más tarde, Nambrad fue hasta su casa y le señaló a su mujer que había sido flagelado en dependencias de la base aérea Maquehue. Se refiere a otras víctimas. Delibera que el detective Ortiz solicitaba volver a la unidad, porque no le gustaba trabajar en el regimiento Tucapel. Esa persona fue obligada por su superior Aquiles Poblete Müller a ir a trabajar a la unidad militar. Ortiz le revelo que en algunas oportunidades detenidos murieron en las sesiones de interrogatorios y torturas. Además que los militares no sabían interrogar porque maltrataban demasiado a los detenidos al punto de dejarlos inconscientes. Ignora que oficiales de ejercito

practicaban interrogatorios en el Tucapel, pero si recuerda que el capitán Nelson Ubilla Toledo o el teniente Manuel Vásquez Chahuan concurren en dos oportunidades a buscar detenidos políticos para llevárselos al regimiento. Eran casi todos miristas. Se refiere a otras víctimas.-

A.17 Juan Bautista Labraña Luvecce (27 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **Declaración extrajudicial** del 13 de diciembre de 2016, de **fs. 832 a fs. 833 (Tomo III)**, pertenecía a la 2da. Compañía de Cazadores, la cual estaba al mando del Capitán Manuel Vasquez Chahuan, siendo secundado por el Teniente Manuel Espinoza Ponce. El deponente era de la 4ta. Sección, donde efectuaba instrucción a treinta conscriptos, recordando entre otros a los soldados Vallejos y Villablanca ya que eran clases de reserva. Hace presente, que el Teniente Manuel Espinoza Ponce era el Oficial a cargo de esa sección, siendo el único clase que trabajaba junto al deponente. En relación a los detenidos del regimiento, los que quedaban por infracción a toque de queda eran dispuestos en la guardia de la unidad y otros eran llevados al gimnasio tras ser interrogados por la sección segunda. Sobre a los patrullajes que efectuaba el Teniente Manuel Espinoza Ponce nunca lo acompañó en tales labores, en lo personal salía con otros superiores ya que solo ostentaba el grado de Cabo 1°. Destaca que no participaba en allanamientos ni detenciones de personas opositoras al régimen militar. En relación a la víctima ignora todo antecedente. En lo pertinente, soflama que la Fiscalía Militar estaba a cargo de Alfonso Podlech, quien era Abogado, con quien no tuvo ningún tipo de contacto, por no cumplir labores en la comandancia.-

A.18. Juvenal Alberto Lagos Osses (19 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **Declaración extrajudicial** del 10 de agosto de 2016 de **fs. 968 a fs. 969 (Tomo III)**, funda que hizo su servicio militar obligatorio en el regimiento de infantería N° 8 Tucapel de Temuco, duración de un año once meses, finalizando en 1974. Su periodo de instrucción lo realizó en la 1° compañía de cazadores, donde estuvo tres meses. Posteriormente, cree en abril o mayo es designado a la compañía de plana mayor y servicios, donde realizó su instrucción militar. La

compañía de plana mayor y servicios estuvo a cargo del teniente Rubio, quien lo seleccionó después de su instrucción, recordando al capitán Nelson Ubilla Toledo, como el oficial que se hizo a cargo de la compañía, no puede precisar qué mes de 1973. Anexa que durante su instrucción militar se le dio grado de 2° cabo de reserva, por su buen desempeño, posteriormente ingresó a la sección montada a cargo del teniente Rubio, no recordando los nombres de los integrantes, entre los que habían conscriptos y personal de planta, lo que no superaban los quince o veinte personas. La sección montada salió de patrullajes en distintos sectores rurales aledaños a Temuco, recordando al sector Boroa, donde había un internado de monjas, no rememora si en algún momento fue a Cholchol. De las funciones que debía realizar, estaba la comandante de guardia, por el grado de cabo de reserva que ostentaba, cargo en el cual debía preocuparse de distribuir a los conscriptitos en diferentes puros del regimiento, como realizar relevos. Cuando cumplía ese turno, su lugar de trabajo estaba en la guardia principal del regimiento, donde estaba a cargo del turno un suboficial de guardia y un cabo de guardia más un oficial de servicio. Nombra personal de planta. Dice que había una sala en la compañía utilizada para interrogar gente, ahí trabajaban los jefes, personal de planta, algunos oficiales, funcionarios del cuadro permanente y personal civil que presume eran de la Policía de Investigaciones de Chile. Se rumoreaba que se aplicaba corriente a la gente, incluso en una oportunidad vio a una mujer. De Victoriano Fernández Coloma no mantiene antecedentes. De personas fallecidas en sala de tortura no lo recuerda, empero un día que estaba de guardia, vio salir un camión tres cuarto, cuya carrocería iba tapada con un lona, recordando que el chofer hizo comentarios que debía ir a Hospital de Temuco, además de haber escuchado al interior de la compañía que una persona habría fallecido al interior del regimiento.

A.19. Carlos Roberto Urquiza Iglesias (19 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración judicial** del 07 de marzo de 2019 de **fs. 1112 a fs. 1113 (Tomo IV)**, revela que tras el 11 de septiembre de 1973 se encontraba

realizando su servicio militar al interior de la compañía Andina, tercera escuadra del Regimiento Tucapel de Temuco al mando del capitán Mario Alvarado Verdugo y lo seguían el teniente Oviedo. Como compañeros de trabajo, encuadrados igualmente en la compañía Andina para la fecha de los hechos investigados, al sargento Cárcamo, suboficial Ulloa, sargento Igor, suboficial Pino, Carlos Figueroa Claus, Teniente Grandón. No recuerda el nombre que en este acto se le da a conocer, Luis Antonio Troncoso Ortiz. El tribunal le lee lo pertinente de la declaración de don Luis Antonio Troncoso Ortiz, de fs. 333 a 335 y de fs. 340, a lo que el deponente señala que para la fecha de los hechos investigados me encontraba en Santiago cumpliendo servicios de vigilancia en Santiago. Espeta que el nombre de Víctor Manuel Villagrán Opazo no lo recuerda como parte integrante de la compañía Andina del Regimiento Tucapel de Temuco para la fecha de los hechos investigados. El tribunal le lee lo pertinente la declaración de don Víctor Manuel Villagrán Opazo de fs. 650 a fs. 653 y de fs. 912 a fs. 915 depone que jamás participó en ejecuciones. Desconoce por qué el señor Víctor menciona su nombre como una de las personas que se vieron involucradas en ejecuciones. Reitera que jamás participó en un hecho de esa naturaleza. Descarga que se escuchaban rumores de que había personas detenidas por motivos políticos que se encontraban detenidas en el gimnasio del Regimiento Tucapel. Vio muchas de aquellas personas en malas condiciones físicas y decaídas. Sabía que existía una sala de torturas pero nunca ingresó a ella, los oficiales principalmente ingresaban como el capitán Alvarado. Lo anterior lo supo, porque aquello era de público conocimiento al interior del Regimiento. El nombre de Santiago Faundez Bustos, Ambrosio Badilla y Victoriano Fernández los desconoce. Si puede indicar que algunas personas fallecieron al interior del Regimiento producto de lo mismo (aplicación de corriente eléctrica).

A.20. Francisco Jerónimo Matta Iturra (29 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **Declaración judicial** del 31 de julio de 2012, **fs. 1266 a fs. 1267 (Tomo IV)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola de fs. 626 a 627

(declaración prestada a causa diversa). Esta seguro que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien interrogó a su padre y a Héctor Aguayo Olavarría porque su padre se lo dijo. Además, a mediados de octubre de 1973 concurrió a conversar con Alfonso Podlech Michaud en compañía del ex diputado Hardy Momberg, quien en aquel tiempo era miembro del Partido Nacional. Se entrevistaron con él en una oficina ubicada al interior del regimiento. En esa reunión Podlech se hizo acompañar de los capitanes Nelson Ubilla y Mario Alvarado. Hardy Momberg le dijo que si expulsaba del país a su padre él también se iría. Entonces Podlech le dijo que lo iba a echar del país de todas formas porque su padre era financista de la guerrilla del MIR y del Partido Socialista. Esta conversación duró no más de tres minutos. En fecha posterior, el abogado Sergio Zapata Camus fue a conversar con Podlech en representación de su padre. Esta seguro que él era el verdadero Fiscal Militar en Temuco y utilizaba al Mayor Jofré como pantalla, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y pudo comprobar su autor dad cuando conversé con él. Respecto de Héctor Aguayo Olavarría lo conoció puesto que su padre, Francisco Aguayo, fue candidato a Regidor en 1967 junto con el deponente. Su padre le contó que Podlech junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a Aguayo y a otra persona quedarse en la Fiscalía para ser interrogados. Utiliza que Podlech ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros como Alberto Malvaldí, dueño de la Radio La Temuco; don Máximo Eitel Presidente del Banco Sur, ubicado en calle Bello con Prat. Acompaña copia de un cheque de su propiedad que acredita que en 1973 los fondos fueron congelados por orden la Junta Militar, También acompaña copia de un Salvoconducto Militar de Temuco para su padre.

A.21 José Heriberto Mansilla Gática (31 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 1462 a fs. 1464 (Tomo V), fs. 1465 (Tomo V), fs. 1466 (Tomo V) y de fs. 1467 a fs. 1470(Tomo V).

En **declaración judicial** del 31 de agosto de 2012 de **fs. 1462 a fs. 1464 (Tomo V)**, ratifica su declaración de fs. 2007 a 2009 (corresponde a causa

diversa). Adopta que después del 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba en la sección de administración de fondos del regimiento Tucapel de Temuco, como dactilógrafo, con el grado de sargento 1°. A cargo de esa sección estaba el teniente Tichahuer Salcedo. En su especialidad trabajaba solo. Las dependencias de su sección se ubicaban en la comandancia del regimiento que posteriormente fueron ocupadas por el servicio de inteligencia. Recuerda a la señora María Meza, secretaria del seguro social. A septiembre de 1973, el segundo comandante del regimiento de apellido Jofré, no tomaba declaraciones. Iturriaga Marchesse solo se ocupaba de cosas generales. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto a los detenidos era de Alfonso Podlech. Se intercedía ante don Alfonso Podlech, porque él decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. El Comandante Jofré dijo personalmente, cuando estaba de guardia que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que había dos mujeres, debía tomarla Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. La oficina de la plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el comandante Jofré era el Fiscal Militar, pero todas decisiones de la fiscalía militar las tomaba Podlech. Anexa que éste tenía el poder de decidir lo que pasaba con los detenidos, por esa razón se intercedía ante él por ellos. Utiliza que fue futbolista, seleccionado de Temuco, integró el primer deportes Temuco, a don Alfonso Podlech le gustaba el fútbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante él por Rolando Núñez, quien vivía en su mismo sector y en una oportunidad se tomó junto a otras personas, uno de los fundos de Alfonso Podlech. Cuando esta persona se presentó en la Fiscalía, don Alfonso dijo que lo agradecía por haber intercedido por él, porque si no lo hubiese hecho, hace rato lo hubiera tenido apuntado. Lo dejó irse y cito personalmente a la fiscalía. Gracias a que intercedió por él, Rolando se salvó. Nunca más supo de él. Respecto de los hechos conocidos como el asalto al polvorín, supo que todo era mentira. Describe que había una sala de torturas en la primera compañía de cazadores. En una

oportunidad andaba buscando a su jefe Tichahuer y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos, mientras le decían perrita tu sabes de eso. Narra que Tichahuer y los oficiales Jarcia Covarrubias tenía que ver con torturas y detenidos. El personal de inteligencia incluso los vigilaba a ellos. Dice que hay un cabo de apellido Labraña y otro grupo de conscriptos que integraban una patrulla chacal, apodados los chalados. Colige que un arquitecto que vivía en su barrio de apellido Rocha, le pidió ayuda a su hermano que estaba en el extranjero, cree que en Centroamérica y tenía que ir a Chile, pero prohibición de entrar al país, así que trato de ayudarlo para que pudiera hacerlo.

En **declaración judicial** del 12 de septiembre de 2013, de **fs. 1465 (Tomo V)**, ratifica declaración judicial de fs. 2413 (declaración corresponde a causa diversa). Asevera que trabajo por una tarde con Alfonso Podlech. Él tomaba declaraciones y él era el dactilógrafo. Esa situación solo fue un tarde y por orden del mayor Cofré. Uno de las personas que menciona en su declaración y cuyo nombre no recuerda, era un joven de población estadio y que era muy conocido por ser deportista, jugar basquetbol y futbol. Además intercedió por la profesora y la asistente social. En esa ocasión conversó con el Mayor Cofré, quien lo mandó hablar con Alfonso Podlech. La decisión tomada por éste, fue dejar en libertad a esas mujeres y citarlas para el día siguiente. El mayor Cofré lo mandó hablar con don Alfonso Podlech porque él estaba a cargo de los detenidos.

En **declaración judicial** del 12 de septiembre de 2013, de **fs. 1466 (Tomo V)**, amplía sus dichos anteriores, el nombre de la persona que era deportistas y por la cual intercedió ante don Alfonso Podlech es de apellido Núñez. Alfonso Podlech lo conocía y cuando lo vio en el Regimiento, ordenó dejarlo con arresto domiciliario y además, era su vecino y quedó a cargo de su custodia. Incluso esta persona iba almorzar a su casa. Además Núñez trabajaba en la CORA y vivía en calle Carlos Dittbon.-

En **declaración judicial** del 20 de diciembre de 2006, de **fs. 1467 a fs. 1469 (Tomo V)**, en septiembre de 1973 prestaba funciones en el regimiento Tucapel de Temuco, trabajando en administración de fondos como dactilógrafo. Jamás se desempeñó en toma de declaraciones en la fiscalía miliar. Su señora trabajaba en la tintorería el cisne de Temuco. No recuerda el nombre de María Meza Moncada, aunque conoció a dos señoras que trabajaban en el seguro social. Es posible que haya interrogado a esa persona porque estuvo al parecer una tarde cooperando a don Alfonso Podlech en toma de declaraciones. Lo anterior porque recibió órdenes de hacer eso. Sin embargo, solo tomó declaraciones a dos personas, quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió a él que lo ayudara con dos civiles que conocía y que estaban detenidas. Las declaraciones las tomó en la oficina del jefe de plana mayor. No recuerda el tenor del interrogatorio. Respecto de su consulta, no recuerda si esta persona presentaba signos de haber sido torturada. A la única persona que vio maltratada producto de las torturas, fue a Rubén Morales Quijada, apodado milico, quien era amigo suyo. Esta persona estaba detenida en el calabozo de la sala de guardia del regimiento. Él era Teniente o subteniente de reserva, en ese momento se encontraba cumpliendo funciones de suboficial de guardia y al verlo le ofreció cigarrillos. Supo que fue torturado en el rancho del regimiento. Morales estaba acusado de hacer instrucción militar en Nehuentué. Recuerda que Morales era mirista. Espeta que fue hacer una ronda y al volver ya no estaba en la guardia. Tiempo después leyó en la prensa que le habían disparado mientras era trasladado a la cárcel o a la base aérea Maquehue, porque intentó fugarse. El Milico Morales y su señora vivían en la población Dreves y era concuñado de un teniente o subteniente cuyo nombre no recuerda, era alto, usaba lentes e infante. Rememora que Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr y un cabo de apellido Abello, trabajaban en inteligencia junto al capitán Ubilla. En una oportunidad después de septiembre de 1973, alrededor de las 10:30 horas, mientras se encontraba el suboficial de guardia llegó un camión cargado de personas fueron

dejadas en el patio de la unidad y debían pasar la noche en el gimnasia, entre los detenidos estaba una profesora con su hijo, y una asistente social que trabajaba en el hospital de Loncoche, Selva Saavedra, por quienes intercedió ante don Alfonso Podlech para que quedase en libertad. Esta última fue denunciada como izquierdista por el doctor Juan Saavedra, que motivó su detención. El Capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar, desconoce si en septiembre u octubre, llegó un capitán de ejército de apellido del Rio, bastante alto. Conmemora que andaba con un contingente no muy grande de soldados, alrededor de 10 o 15 quienes se transportaban en un camión y un jeep. No recuerda como detenido al gobernador Audito Gavilán. Refiere que hubo un grupo de detenidos a cargo de los militares y otro de Carabineros. Los detenidos fueron trasladados a Temuco, sea por militares o carabineros. No recuerda a Max Arriagada ni Héctor Contreras, como choferes que transportaban detenidos. El capitán de ejército se relacionaba con el mayor Astroza quien coordinaba el personal para salir a detener personas. No le correspondió salir a detener civiles por motivos políticos. Espeta que los detenidos eran dejados en el patio de la comisaria por los militares pero no le consta que hayan sido sometidos a apremios ilegítimos, aunque los militares disponían de los detenidos a sus antojos.

B. DOCUMENTOS (28).

1. Documentos acompañados a la querella criminal de Sebastián Saavedra Cea.
2. Documentos acompañados a la querella criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney.
3. orden para practicar la autopsia al cadáver de Victoriano Fernández Coloma, del 14 de diciembre de 1973 de la Fiscalía Ejército Cautín, Temuco.
4. orden de entrega de cadáver de Victoriano Fernández Coloma del 14 de diciembre de 1973, emitida por el Juzgado del Crimen.
5. protocolo de autopsia de Victoriano Fernández Coloma N°265/73
6. orden de inscripción del 14 de diciembre de 1973 correspondiente a Victoriano Fernández Coloma.

7. Registro de inscripción de defunción del 20 de diciembre de 1973 de Victoriano Segundo Fernández Coloma

8. Certificado de extracto de filiación y antecedentes del Registro Civil e Identificación.

9. Certificado médico de defunción de Victoriano Fernández.

10. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de delitos contra los derechos humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.

11. fotografía de la víctima Victoriano Segundo Fernández Coloma.

12. Informe pericial documental del Laboratorio de Criminalística de la policía de Investigaciones de Chile N°584/2014.

13. Oficio N°1095/91 del Servicio Médico Legal del 25 de septiembre de 1991.

14 Antecedentes remitidos por el Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad.

15 Copia simple del libro Digesto de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16. Copia del fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos, caso "Barrios alto vs Perú".

17. Sentencia en causa rol 103-2011 de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua del 14 de enero de 2013.

18 Copia de la sentencia causa rol 5219-2010 de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 22 de julio de 2011

19 Informe final "Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar."

20 Copia simple del fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos, caso "Almonacid Arellano y otros versus Chile", de 26 de septiembre de 2016.

21. Copia autorizada del acta del pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, del 17 de septiembre de 1973.

22 Copia autorizada del auto acusatorio en causa rol 113.089 de ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco.

23. Sentencia en causa rol 1260-2013 de la Excelentísima Corte de Suprema.

24. Informe reservado del Ejército de Chile, Estado Mayor General N°1595/59 del 16 de marzo de 2009.

25. Copia autorizada del croquis del Regimiento Tucapel de Temuco.

26. Copia simple del documento "Junta Provincial de gobierno de Cautín", 1er suplemento documental, colección de bandos para la provincia de Cautín" emitido por el diario austral con fecha 18 de noviembre de 1973.

27. Copia del informe del Laboratorio de Criminalística N°465 del 31 de marzo de 2017, de la Policía de Investigaciones de Chile.

28. Diligencia de inspección personal del Tribunal al Regimiento Tucapel de Temuco, del 27 de noviembre de 2019.

B.1. Documentos acompañados a la querella criminal de Sebastián Saavedra Cea que se desglosan de la siguiente manera:

a. Certificado de matrimonio de Victoriano Segundo Fernández Coloma, el cual consta que contrajo matrimonio el 29 de diciembre de 1965 con doña María Eugenio Castillo Cares, rolante de **fs. 1246 (Tomo IV).**-

b. Certificado de nacimiento de Juan Hernán Fernández Castillo, en el cual consta que los padres son Victoriano Segundo Fernández Coloma y María Eugenio Castillo Cares de **fs. 1247 (Tomo IV).**

c. Certificado de nacimiento de Segundo Antonio Fernández Castillo, en el cual consta que los padres son Victoriano Segundo Fernández Coloma y María Eugenio Castillo Cares de **fs. 160 (Tomo I) y de fs. 1248 (Tomo IV).**

d. Certificado de nacimiento de Mireya Carmen Fernández Castillo, en el cual consta que los padres son Victoriano Segundo Fernández Coloma y María Eugenio Castillo Cares de **fs. 1249 (Tomo IV).**

e. Certificado de nacimiento de Mario Iván Fernández Castillo, en el cual consta que los padres son Victoriano Segundo Fernández Coloma y María Eugenio Castillo Cares de **fs. 161 (Tomo I) y de fs. 1250 (Tomo IV).**

B.2. Documentos acompañados a la querella criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney que se desglosan de la siguiente manera:

a. Certificado de nacimiento de Victoriano Fernández Coloma donde consta que sus padres son Victoriano Fernández Navarrete y Nazaria Coloma Vega de **fs. 29, 157 y de fs. 163(Tomo I).**

b. Certificado de defunción de Victoriano Fernández Coloma donde consta que falleció el 12 de diciembre de 1973, al interior de un recinto militar, de **fs. 9, fs. 30, fs. 49, fs. 76, fs. 142, fs. 158, fs. 166, fs.169 y de fs. 190(Tomo I).**

c. Certificado de matrimonio de Victoriano Fernández Coloma donde consta que contrajo matrimonio con doña María Eugenia Castillo Cares en diciembre de 1965, de **fs. 31, fs. 50, fs. 159, fs. 170 (Tomo I), y de fs. 1246 (Tomo IV).**

d. Autorización de sepultación de Victoriano Fernández Coloma de fecha 20 de diciembre de 1973, donde consta que falleció el 12 de diciembre de 1973 a causa de un shock infarto del miocardio, politraumatizado de **fs. 32 y fs. 167 (Tomo I)**.

e. Copia simple de una declaración jurada de doña María Eugenia Castillo Cares de **fs. 33 a fs. 34 (Tomo I)** del 01 de abril de 1991.

f. Informe individual para resolución del Consejo correspondiente a Victoriano Segundo Fernández Coloma de **fs. 35 a fs. 41 (Tomo I)**, que en lo pertinente señala que: "Según declaración jurada prestada por su cónyuge doña María Eugenia Castillo Cares arguye que: el día 11 de diciembre de 1973, su cónyuge recibió una citación en la que se le comunicaba que debía presentarse el 12 de diciembre de 1973 a la prefectura de investigaciones de Villarrica. Ese día salió a las 08:00 horas, aproximadamente con destino a esa unidad policial, no regresando al hogar. Al día siguiente, la señora María se dirigió a la prefectura para averiguar su situación, donde se le manifestó por parte de un inspector que don victoriano había sido puesto a disposición de la Justicia Militar. La cónyuge se dirigió a la Fiscalía Militar de Temuco, donde se efectúa una revisión de los libros de detenidos y no figuraba en sus registros. Según averiguaciones practicadas por la cónyuge, este había sido citado junto con otras 4 personas de las cuales recuerda el nombre de tres: Marcos Rivas, Abelino Vásquez y Edith Caro, quienes en su oportunidad le señalaron que tenían prohibiciones de dar información respecto de lo sucedido, pero ante su insistencia solo logro saber por medio del señor Vásquez, que lo habían sacado desde el recinto con los ojos vendados; El día 22 de diciembre de 1973 y en compañía de su cuñado Pedro Fernández, concurrió nuevamente a la Fiscalía Militar en Temuco, donde se les informó que Victoriano Fernández Coloma había muerto y que una vez fallecido había sido entregado al hospital regional: en informaciones de dicho hospital se les informó que efectivamente había fallecido y que éste se encontraba en el cementerio de Temuco. "

g. Formulario de denuncia ante Gobernación Provincial de Cautín del 13 de octubre de 1992, correspondiente a Victoriano Fernández Coloma de **fs. 42 a fs. 47 (Tomo I)**.

h. Copia simple de causa rol 29.347 de ingreso del Juzgado del Crimen de Villarrica por el delito de secuestro y homicidio, siendo la denunciante doña María Eugenia Castillo Cares, iniciado el 13 de septiembre de 1991 de **fs. 48 a fs. 109 (Tomo I)**, que en lo pertinente se declara el sobreseimiento definitivo en la causa.-

i. Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, de **fs. 111 a fs. 113 (Tomo I)**, que en lo pertinente narra: “Fernández Coloma, Victoriano Segundo: 28 años, casado, tractorista, muerto por torturas el 12 de diciembre de 1973 en Temuco. Victoriano Segundo Fernández Coloma murió ese día en un recinto militar de Temuco, por shock, infarto de miocardio, politraumatismo, según se consigna en el certificado de defunción. De acuerdo con declaraciones de familiares y testigos, Victoriano Fernández fue detenido el 12 de diciembre de 1973 en la Prefectura de Investigaciones de Villarrica, donde se presentó a raíz de una citación recibida el día anterior por una falsa denuncia de tenencia de armas. De allí fue conducido junto con otros detenidos a la Fiscalía Militar de Temuco. Según varios testigos presenciales, en este lugar se le sometió a golpes, torturas y aplicación de corriente, falleciendo durante uno de los interrogatorios. El protocolo de autopsia señala que su muerte se produjo por un shock determinado por traumatismos múltiples torácicos abdominales y de los miembros superiores y que existían signos de infartación reciente del miocardio. Según el mismo informe, las lesiones contusas debieron ser causadas por terceros. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que la muerte de Victoriano Fernández Coloma fue consecuencia directa de las torturas y apremios ilegítimos a que fue sometido por agentes del estado durante su periodo de detención. Por ese motivo, lo declaró la víctima de violación de derechos humanos. ”

B.3. De **fs. 4 (Tomo I)**, orden para practicar la autopsia al cadáver de Victoriano Fernández Coloma, del 14 de diciembre de 1973 de la Fiscalía Ejército Cautín, Temuco.

B.4. De **fs.5 (Tomo I)**, orden de entrega de cadáver de Victoriano Fernández Coloma del 14 de diciembre de 1973, emitida por el Juzgado del Crimen.

B.5. De **fs. 6 a fs. 7, fs. 59 a fs. 61, fs. 225 a fs. 228 (Tomo I) y de fs. 976 a fs. 977 (Tomo III)**, protocolo de autopsia de Victoriano Fernández Coloma N°265/73 que en lo pertinente concluye: "Que la causa necesaria de la muerte de Victoriano Segundo Fernández Coloma, fue el shock determinado por traumatismos múltiples tocaco abdominales y de los miembros superiores y con signos de infartación reciente miocárdica. El control histopatológico del miocardio reveló además signos de infiltración lipídica en algunas fibras miocárdicas y muy discreta reacción inflamatoria intersticial. Las lesiones contusas son irregulares y debieron ser causadas con algún objeto dotado de moderada fuerza impulsiva. Podría corresponder a algún arma u objeto similar de uso doméstico. En la grave repercusión orgánica de la acción traumática sufrida, pudo haber influido significativamente la circunstancia del estado de plenitud gástrica que en los instantes de su muerte presentaba el occiso."

B.6. De **fs. 8 (Tomo I)**, orden de inscripción del 14 de diciembre de 1973 correspondiente a Victoriano Fernández Coloma.

B.7. Registro de inscripción de defunción del 20 de diciembre de 1973 de Victoriano Segundo Fernández Coloma donde consta que falleció el 12 de diciembre de 1973 al interior del recinto militar a causa de un shock, infarto del miocardio, politraumatizado y será sepultado en el cementerio de Temuco de **fs. 10 y fs.77 a fs.79 (Tomo I)**.

B.8. Certificado de extracto de filiación y antecedentes del Registro Civil e Identificación de Victoriano Fernández Coloma rolantes de **fs. 11 a fs. 12 (Tomo I) y de fs.1238 (Tomo IV)**.

B.9. Certificado médico de defunción de **fs. 15 (Tomo I)** de Victoriano Fernández Coloma en 1973 en la ciudad de Temuco a las 15:30 horas en un recinto militar.

B.10. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a. A fs. 20 a fs. 26 (Tomo I), informe policial N° 5478 de 15 de diciembre de 2011, que contiene declaraciones de testigos de la época.

b. A fs. 249 a fs. 252 (Tomo I), informe policial N°502 del 27 de enero de 2012, contiene declaraciones de testigos de la época.

c. A fs. 276 a fs. 282 (Tomo I), informe policial N°1251 del 23 de marzo de 2012, contiene declaraciones de testigos de la época.

d. A fs. 303 a fs. 316 (Tomo I), informe policial N°2062 del 26 de abril de 2013, contiene declaraciones de ex funcionarios policiales.

e. A fs. 328 a fs.334 (Tomo I), informe policial N° 3358 del 10 de junio de 2014, contiene declaraciones de testigos.

f. A fs. 404 a fs. 410 (Tomo II), informe policial N°781 del 02 de febrero de 2015, contiene declaraciones de ex funcionarios policiales.

g. A fs. 671 a fs. 683 (Tomo II), informe policial N°°6501 del 06 de noviembre de 2015, contiene declaraciones de ex funcionarios policiales y testigos.

h. A fs. 810 a fs. 838 (Tomo III), informe policial N°75 del 04 de enero de 2017 que contiene declaraciones de ex funcionarios policiales.

i. A fs. 921 a fs. 969 (Tomo III), informe policial N°4913 del 28 de septiembre de 2017, contiene declaraciones de ex funcionarios policiales.

j. A fs. 1092 a fs. 1104 (Tomo III), informe policial N°00250 del 17 de enero de 2019, contiene declaraciones de testigos.

B.11. De **fs.51 y fs. 171 (Tomo I)**, contiene fotografía de la víctima Victoriano Segundo Fernández Coloma.

B.12. Informe pericial documental del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile N°584/2014, **de fs. 1354 a fs. 1382 (Tomo IV)** que en lo pertinente concluye: “Los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica fiscal en la orden de “libertat” N° S/N de la fiscalía militar Cautín Temuco, de fecha 28.SEP.073 dirigida a carabineros de Chile, subcomisaria Villarrica la cual dispone la libertad de Mario Fernando Cortes Bornard y Ubildo Antonio Jiménez Varas, es genuino de Oscar Alfonso Podlech Michaud.”

B.13. Oficio N°1095/91 del Servicio Médico Legal del 25 de septiembre de 1991 que da cuenta que se practicaron autopsias donde la causa de muerte fue por causas similares de acuerdo a protocolos, rolante de **fs. 62 a fs. 64 (Tomo I).**

B.14 Antecedentes remitidos por el Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad que corresponde a lo sucedido con Victoriano Segundo Fernández Coloma de **fs. 101 a 109 con copia de fs. 231 a fs. 239 (Tomo I).**

B.15 Copia simple del libro Digesto de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de **fs. 414 a fs. 415 (Tomo II).**

B.16. Copia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Barrios alto vs Perú”, de **fs. 419 a fs. 450(Tomo II).**

B.17. Sentencia en causa rol 103-2011 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua del 14 de enero de 2013, de **fs. 528 a fs. 544 (Tomo II).**

B.18 Copia de la sentencia causa rol 5219-2010 de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 22 de julio de 2011 de **fs. 555 a fs. 619 (Tomo II).**

B.19 Informe final “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar.” De **fs. 1482 a fs. 1601(Tomo V)**, en lo pertinente refiere que es un análisis crítico que busca, revisar el pasado reciente y la expresión de un deber genuino que nace de los preceptos de la ordenanza general que rige a partir del siglo XXI.

B.20 Copia simple del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Almonacid Arellano y otros versus Chile", de 26 de septiembre de 2016 de **fs. 451 a fs. 527 (Tomo II)**.

B.21. Copia autorizada del acta del pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, del 17 de septiembre de 1973 de **fs. 1079 a fs. 1080 (Tomo III)**, que en lo pertinente suscribe que: "El señor Presidente dio cuenta de haber recibido momentos antes en audiencia al abogado don Alfonso Podlech, quien le manifestó que habría sido designado Fiscal Militar ad-hoc y que con motivo del estado de sitio en que se encuentra el país, había a disposición de la Fiscalía Militar gran cantidad de detenidos, por lo que el número de actuarios con que contaba no era suficiente para interrogar con las exigencias del caso de esas personas. Que ante la situación presentada el señor Coronel Intendente... le habría encomendado que se entrevistara con el Presidente de la Corte, a fin de pedirle una cooperación para que se pusiera a disposición de la Fiscalía..."

B.22 Copia autorizada del auto acusatorio en causa rol 113.089 de ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco de **fs. 1209 a fs. 1233 (Tomo IV)**.-

B.23. Sentencia en causa rol 1260-2013 de la Excelentísima Corte de Suprema, de **fs. 528 a fs. 544 (Tomo II)**.

B.24. Informe reservado del Ejército de Chile, Estado Mayor General N°1595/59 del 16 de marzo de 2009, el cual consigna en lo pertinente que, en el periodo 1973/1974 hay una anotación estampada con fecha 01.ENE.974, que señala que a partir del 11 SEP 973 se encuentra Jofré Soto como Fiscal Militar de Temuco, de **fs. 723 (Tomo II)**.

B.25. Copia autorizada del croquis del Regimiento Tucapel de Temuco, de **fs. 1185 (Tomo IV)**.

B.26. Copia simple del documento "Junta Provincial de gobierno de Cautín", 1er suplemento documental, colección de bandos para la provincia de

Cautín” emitido por el diario austral con fecha 18 de noviembre de 1973, de **fs. 1046 a fs. 1065 (Tomo III)**.

B.27. Copia del informe del Laboratorio de Criminalística N°465 del 31 de marzo de 2017, de la Policía de Investigaciones de Chile, de **fs. 1473 a fs. 1479 (Tomo V)**, que en lo pertinente aquilata que: “La evaluación de los antecedentes examinados en esta oportunidad, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto, “Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal”, en la copia de autorización fechada en Temuco el 18 DIC 973, dirigida al doctor Wolfgang Reuter B. Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín- Temuco del Ejército de Chile, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud.”

B.28. Diligencia de inspección personal del Tribunal al Regimiento Tucapel de Temuco, de **fs. 1195 a fs. 1198 (Tomo IV)** del 27 de noviembre de 2019, que en lo pertinente sostiene que: “El tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo que el testigo Manuel Contreras Salazar indique el lugar donde estaba ubicada la compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco para el año 1973. El tribunal y los testigos se desplazan a ese punto. En ese sentido, tanto el sr. Contreras como el sr. Aburto, coinciden en señalar que aquella dependencia era la utilizada por la Compañía de Plana Mayor y Servicios para la fecha señalada. A continuación el sr. Ministro le solicita al señor Contreras manifestar su conocimiento respecto a lo acontecido en aquella dependencia a partir del 11 de septiembre de 1973, en este sentido el señor Contreras reitera lo señalado en sus declaraciones de fs. 2.309, 2638 indicando que observo en un fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, desde el exterior de esta sala, que allí se encontraban torturando a 3 de las víctimas de esta causa, cuya fotografía le fueron exhibidas por el tribunal en sus declaraciones de la causa.

7°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal,

permiten tener legalmente acreditado lo que se indicará a continuación. Cabe hacer presente que si bien, en el auto acusatorio rolante a **fs. 1771 a fs. 1809 (Tomo V)** en la letra F, se indica que Victoriano Fernández Coloma se presentó el 12 de septiembre de 1973, ello se debió a un error de transcripción, entre otras cosas porque las personas que, con él fueron detenidas, tanto José Avelino Vásquez Montecinos de fs. 250 a 251 (Tomo I) y de fs. 260 a 262 (Tomo I); Edith del Carmen Caro León de fs. 90 (Tomo I), 204 (Tomo I), 333 a 334 (Tomo I) y de fs. 650 (Tomo II) sus declaraciones corresponden a diciembre de 1973 y un hecho de mayor acreditación es la propia autopsia de la víctima de fecha 15 de diciembre de 1973, lo que acredita que se presentó en diciembre de 1973. Lo más valioso en todo caso, es que la imputación final de la acusación se refiere a diciembre de 1973. Del mismo modo, es en la sentencia en conformidad a la prueba ponderada donde se determinan finalmente los hechos y se califica el delito y participación del acusado.

A.- Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad de Temuco, erigiéndose como Intendente el Coronel Comandante del Regimiento “La Concepción”, de Lautaro, Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez (fallecido según consta a fs. 1456 (Tomo IV)) y como Gobernador de Temuco, el Coronel Pablo Iturriaga Marchesse (fallecido según consta a fs. 1454 (Tomo IV)), Comandante del Regimiento de Infantería N° 8 “Tucapel” de esta ciudad, quien además quedó como Jefe de la Guarnición de Temuco. Según consta a fs. 629 a fs. 631 (Tomo II), fs. 858 a fs. 865 (Tomo III), fs. 1318 a fs. 1321 (Tomo IV).-

B.- Que el mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen el abogado **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud** de Temuco, que además era Teniente de Reserva del Ejército de Chile, quien se presentó en el regimiento “Tucapel” para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del Segundo Comandante, Mayor Luis Jofré Soto (fallecido según consta a fs. 1455 (Tomo IV)).

Este oficial, sin embargo, debió asumir mayores funciones como Segundo Comandante del Regimiento Tucapel poco tiempo después (según consta de antecedentes a fs. 296 a fs. 297 (Tomo I), a fs. 621 a fs. 623 (Tomo II), fs. 717 a fs. 721 (Tomo II). A partir de ese día en adelante comenzaron a llegar personas civiles al regimiento que fueron llamadas a presentarse ante la Fiscalía Militar mediante bandos publicados en la prensa escrita y en las radios, o que fueron traídas en carácter de detenidas desde diferentes puntos de la región, por patrullas de carabineros y militares, según consta a fs. 1045 a fs. 1065 (Tomo III).-

C.- Que ante el alto número de detenidos y de personas llamadas a prestar declaración, la Fiscalía Militar fue reforzada para realizar su trabajo con funcionarios del Poder Judicial que fueron solicitados a la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco por el abogado anteriormente indicado, quien actuando como Fiscal Ad - hoc hizo una presentación al Pleno del Tribunal de Alzada, tras lo cual fueron asignados en comisión de servicios algunos actuarios de diferentes tribunales y un Relator de la Corte, situación que consta en acta suscrita por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, rolante de fs. 1079 a fs. 1080 (Tomo III) en estos autos.

D.- Que debido a la falta de conocimiento en materias procesales penales sumado al poco carácter que tenía y al trabajo como Segundo Comandante del regimiento, el Mayor Luis Jofré Soto fue delegando funciones como Fiscal Militar al abogado asesor de la Fiscalía, quien comenzó a detentar el cargo de Fiscal de hecho, al punto que los familiares le consultaban a él por el destino de los detenidos. Sin embargo, el Mayor Jofré Soto siguió firmando la mayoría de las veces el papeleo administrativo y participó en algunos interrogatorios de detenidos. (De acuerdo a fs. 383 a fs. 385 (Tomo II), fs. 621 a fs. 623 (Tomo II), fs. 1258 a fs. 1263 (Tomo IV) y demás antecedentes.

E.- Que las personas llamadas a presentarse a la Fiscalía Militar y las que fueron traídas en carácter de detenidas eran mantenidas en unas

dependencias ubicadas junto a la guardia y en el gimnasio grande. Una vez interrogadas por personal de la Fiscalía Militar, por los detectives de la Policía de Investigaciones agregados al regimiento o por los propios oficiales que participaban en estas actividades, algunas de ellas eran dejadas en libertad, otras eran enviadas a sus casas con arresto domiciliario y otras eran conducidas hasta la cárcel pública donde permanecían mientras se resolvía su situación procesal. (Según consta de fs. 312 a fs. 314 (Tomo I); fs. 361 a fs. 363 (Tomo II), fs. 372 a fs. 373 (Tomo II), fs. 763 a fs. 765 (Tomo III) y otros antecedentes)

F.- Que la víctima Victoriano Segundo Fernández Coloma, 28 años de edad, casado, obrero, el día 11 de diciembre de 1973 fue notificado en su domicilio por funcionarios policiales, que al día siguiente se presentara en la Policía de Investigaciones de Villarrica. A fin de evitar represalias concurrió el 12 de diciembre de 1973 hasta el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Villarrica, quedando de inmediato detenido, y siendo trasladado junto a otras personas al Regimiento Tucapel de Temuco. Siendo visto el día en comento al interior del Regimiento Tucapel de Temuco, siendo el primero del grupo de detenidos, llamado a declarar, sin que retornara. (Según se desprende a fs. 24 a fs. 26 (Tomo I); fs. 33 a fs. 34 (Tomo I), fs. 35 a fs. 47 (Tomo I); fs. 67 a fs. 69 (Tomo I), fs. 69 a fs. 70 (Tomo I), fs. 111 a fs. 113 (Tomo I); fs. 250 a fs. 251 (Tomo I), fs. 260 a fs. 262 (Tomo I), fs. 263 a fs. 264 (Tomo I), entre otros antecedentes).

Que su cónyuge doña María Eugenia Castillo Cares , comenzó la búsqueda el mismo día de su presentación a la Policía de Investigaciones de Villarrica, lugar donde le manifestaron que había sido entregado a la Fiscalía Militar de Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, acá desconocieron tener antecedentes de su paradero. No obstante, continuo la búsqueda en compañía de su cuñado Pedro Fernández Coloma (fallecido según consta a fs. 1.459 (Tomo V)), quien con la ayuda de su empleadora y un Abogado, supieron

que Victoriano Segundo Fernández Coloma, había fallecido en la Fiscalía Militar, siendo trasladado su cadáver a la morgue del Hospital Regional de Temuco.

G.- Que a propósito de los hechos señalados el protocolo de autopsia de Victoriano Segundo Fernández Coloma, rolante de fs.4 a fs. 7 (Tomo I), concluye en lo pertinente: “**1)** La causa precisa y necesaria de la muerte de Victoriano Segundo Fernández Coloma, fue el shock determinado por traumatismos múltiples toraxo abdominales y de los miembros superiores y con signos de infartación reciente miocárdica; **2)** El control histopatológico del miocardio reveló además signos de infiltración lipoídica en alguna fibras miocárdicas y muy discreta reacción inflamatoria intersticial. **3)** Las lesiones contusas son irregulares y debieron ser causadas con algún objeto dotado de moderada fuerza impulsiva. Podría corresponder a algún arma u objeto similar de uso doméstico. **4)** En la grave repercusión orgánica de la acción traumática sufrida, pudo haber influido significativamente la circunstancia del estado de plenitud gástrica que en los instantes de su muerte presentaba el occiso”.

H.- Que los hechos antes mencionados, debieron ser conocidos por el Teniente en Reserva, y abogado **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, ya que como se mencionó en la letra B, C y D de esta resolución, actuaba desde el 11 de septiembre de 1973 como Abogado asesor y Fiscal Militar ad-hoc del regimiento Tucapel de Temuco, interrogando a los detenidos y decidiendo el destino de las personas privadas de libertad, teniendo en esa fecha las facultades decisorias y de orden al interior de las dependencias del mencionado regimiento. Además, en su calidad de Fiscal Ad-hoc y Abogado Asesor de la Fiscalía Militar, no denunció ni informó a la superioridad militar ni a otra autoridad de los ilícitos investigados, ni consta que se haya efectuado una investigación, ni la existencia de un registro como consecuencia de la comisión de estos hechos. Eran tales las facultades que tenía este abogado que los propios dichos de Aquiles Alfonso Poblete Muller (fallecido según consta a fs.1460 (Tomo V)) de fs.763 a fs.

765(Tomo III)), manifestó que: “el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el Abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar”

Corolario de lo anteriormente expuesto son las múltiples aseveraciones que han efectuado miembros que prestaron funciones al interior del regimiento para la época de los hechos investigados, a saber: en dichos de Juan Bautista Labraña Luvecce de fs. 832 a fs. 833 (Tomo III), expreso que “A cargo de la Fiscalía Militar estaba el abogado Alfonso Podlech”. Dichos de José Heriberto Mansilla Gatica, de fs.1.462 a fs. 1.464 (Tomo V), quién sostiene “El trabajo cotidiano de la Fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto a los detenidos era de Alfonso Podlech. A su pregunta, se intercedía ante Alfonso Podlech, porque él decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones”. Asimismo y para reforzar lo manifestado ut-supra, es de suma importancia mencionar lo que concluye en el informe pericial documental rolante de fs. 1354 a fs. 1382 (Tomo IV), emitido por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, que entre otras cosas expresa lo siguiente: “los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer, que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica FISCAL, en la orden de “LIBERTAT” N° S/N, de la Fiscalía Militar Cautín Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a Carabineros de Chile, Subcomisaria Villarrica, la cual dispone la Libertad de Mario Fernando Cortes Bornard y Ubildo Antonio Jiménez Vargas, es Genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud”. Otro informe que refuerza lo anterior, esta de fs. 1.473 a fs. 1.479 (Tomo V), que en lo pertinente concluye: “la firma impugnada, suscrita sobre el texto “Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal”, en la copia de autorización fechada en Temuco el 18. DIC.973, dirigida al Doctor Wolfgang REUTER B, Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín- Temuco del Ejército de Chile, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud.”. A mayor ahondamiento, rolante de fs. 1.882 y

siguientes (Tomo V) el informe final “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”.

8°) Calificación. Que los hechos antes reseñados, en esta etapa procesal, constituyen el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Victoriano Fernández Coloma, previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

9°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excm. Corte Suprema, en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877 del ingreso criminal del ingreso del Juzgado de Letras de Pitruftuén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342 del ingreso criminal del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitruftuén, seguida por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363 del ingreso criminal del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048 del ingreso criminal el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos seguida de muerte de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

U. Causa rol 10.854 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez,

Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

V. Causa rol 45.359 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

W. Causa rol 54.035 del ingreso criminal del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, seguida por los apremios ilegítimos de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

X. Causa rol 65.535 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos de Manuel Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Y. Causa rol 45.343 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

Z. Causa rol 1-2013 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por detención ilegal de Alberto Colpihueque Navarrete, Eleuterio Colpihueque Lican y Abel Florencio Colpihueque Lican; apremios ilegítimos de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Lican; y homicidios calificados de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Licán, sentencia de 24 de mayo de 2019.

A.1 Causa rol 57.071 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el homicidio calificado de Jorge Toy Vergara, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997 del ingreso del Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el de secuestro calificado de Segundo Elías Llancaqueo Millán, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361 del ingreso criminal Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado de Víctor Hugo Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Exequiel Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996 del ingreso criminal del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado y apremios ilegítimos de Tomás Segundo Esparza Osorio; y apremios ilegítimos de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

L.12 Causa rol 45.365, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del ingreso criminal del Juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019.

P.16 Causa rol 113.991 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

Q.17 Causa rol 113.478 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.

R.18. Causa rol 114.051 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.

S.19. Causa rol 5-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por aplicación de tormentos de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

T.20. Causa rol 113.999 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

U.21. Causa rol 114.058 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de apremios ilegítimos de Manuel Antivil Huenunqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

V.22. Causa rol 6.345 del ingreso criminal del Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

W.23. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el homicidio calificado de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

X.24. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

Y.25. Causa rol 114.103 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de Alejandro Ancao Paine, sentencia de fecha 03 de septiembre de 2021.

Z.26. Causa rol 18.782 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

AA.1. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

BB.2. Causa rol 45.355 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

CC.3. Causa rol 18-2011 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

DD.4. Causa rol 63.551 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el secuestro calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia de 23 de diciembre de 2022.

EE.5. Causa rol 113.969 de ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, sentencia de 2 de enero de 2020.

FF.6. Causa rol 2-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de homicidio de Domingo Pérez San Martín, sentencia de 14 de octubre de 2020. Todos los fallos anteriores condenatorios. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

10°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. *Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad*. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa

humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

11°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de

vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michel Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

DECLARACIONES INDAGATORIAS

12°) Que prestando declaración indagatoria **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud** (37 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 717 a fs. 721 (Tomo II), fs. 1424 a fs. 1427 (Tomo IV), fs. 1428 a fs. 1429 (Tomo IV), fs. 1430 a fs. 1432 (Tomo IV) y de fs. 1433 a fs. 1451 (Tomo IV).-

En **declaración judicial** del 30 de mayo de 2016 de **fs. 717 a fs. 721 (Tomo II)**, funda que en septiembre de 1973 en calidad de ex cadete militar, lo llamó el Comandante del Regimiento Tucapel, don Pablo Iturriaga Marchesse, fallecido, porque le señaló que el país estaba viviendo un ambiente de casi guerra civil y que por lo tanto las fuerza armadas habían decidió tomar el control de este para salvar la situación. Además, pidió que le ayudara a organizar la Fiscalía Militar y el funcionamiento de los Consejos de Guerra que iban a tener lugar de ahí en adelante. Hasta antes del 11 de septiembre de 1973 funcionaba una Fiscalía Militar en tiempo de paz que estaba bajo las órdenes del Mayor Jofré, quien era asistido por tres Suboficiales de ejército cuyos apellidos eran Moreno, Schonherr y Quilodrán, quienes no tenían la preparación para afrontar los juicios que se vendrían a raíz estos problemas. Entre el 11 y 12 de septiembre hubo alrededor de 200 de detenidos a disposición de la Fiscalía Militar y con motivo de esa situación le sugiere al Fiscal Militar, don Luis Jofré y al Comandante del regimiento, que se solicitara al Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Oscar Carrasco, la designación de funcionarios judiciales en comisión de servicios en la Fiscalía Militar con el objeto de ayudar en la toma de declaraciones. Gracias a esta gestión fueron designados don Héctor Toloza Fierro, Adrián González Maldonado, el relator Gastón Mecklenburg y el Secretario del Juzgado de Indias, Dorian Novoa Godoy. Además, estuvo algunos días doña Victoria Gálvez, quien fue llamada por el señor Mecklenburg. A su pregunta, era asesor jurídico del señor Fiscal, Mayor Jofré en la parte procedimental. Él era quien tomaba las decisiones, pero las resoluciones importantes las redactaba el abogado Dorian Novoa. En lo demás, aconsejó a los actuarios, quienes tenían gran experiencia, en el sentido que actuaran igual como lo hacían en los tribunales

ordinarios. Funda que concurrió al regimiento Tucapel, al menos durante el primer mes, día por medio. En aquel entonces debía atender, además, a sus clientes por los temas de expropiación, ya que en el regimiento no percibía remuneración. Delibera que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, los que eran mantenidos en el patio de la unidad. Eran más de cien personas. Especula que estos detenidos fueron puestos en libertad o derivados a la cárcel, según fuese el caso. Desconoce si hubo alguna dependencia al interior del regimiento en la que fuesen dejadas estas personas. Respecto de los Consejos de Guerra, estos comenzaron a partir del 26 o 29 de septiembre de 1973. Su tarea consistió en asesorar al Comandante para gestionar la rápida instauración del tribunal mediante la designación de los vocales integrantes del Consejo de Guerra. Destaca que en aquel tiempo había dos fiscalías: la de Ejército y la de Carabineros. Esta última estaba a cargo del Teniente Coronel Gonzalo Arias González. También hubo un abogado del servicio jurídico de Carabineros de Cautín, de nombre Hernán Morales, quien fue designado Fiscal ad - hoc para investigar un delito de Tenencia ilegal de Armas y explosivos y otros, por parte de una escuela de guerrilleros que hubo en Nehuentué. El rol de esta causa era la 1198 - 73. Además, Juan Michelsen Delano, quien era Auditor de la IV División de Ejército, con asiento en Valdivia. Él investigó una causa por incitación a la formación de milicias o grupos de combate. También conoce una causa en contra de Víctor Molfiqueo Cayuñil y otros, por ofensas públicas a las Fuerzas Armadas. Esta última causa llevaba el rol 1076- 73. No recuerda cuánto tiempo estuvo en la región. No sé si fue con su propio equipo ni tampoco dónde se instaló en el regimiento. La Fiscalía Militar recibió la colaboración de Carabineros e Investigaciones para efectuar sus investigaciones. Esgrime que no prestó asesoría al Intendente de la época, Coronel Ramírez, quien tenía su propio asesor jurídico, al parecer era el abogado Francisco Contreras. Sólo recuerda la oportunidad en que pidió que se constituyera en la Corte de Apelaciones de Temuco para solicitar ayuda del Poder Judicial para los efectos de echar a andar la Fiscalía Militar. La

Fiscalía Militar en 1973 funcionaba en la oficina del Segundo Comandante del regimiento, ubicada en el edificio de la Comandancia. Los actuarios antiguos de la Fiscalía, es decir, Moreno, Schonherr y Quilodrán continuaron sus labores interrogando a los detenidos. Ellos interrogaron poco, porque tenían otras tareas en la Sección Segunda que estaba al mando del Capitán Ubilla. El Comandante Iturriaga le encargó al Capitán Ubilla que investigara todo lo relativo al MIR en la región. No prestó colaboración en la investigación que realizó este oficial, ignora quienes trabajaron con él. Sin embargo, tuvo conocimiento de esta causa en el año 1974, una vez en que había asumido como Fiscal Militar en propiedad. Respecto del abogado Hernán Morales, no recuerda haberlo visto en la Fiscalía del regimiento. Ignora con quién trabajo para investigar su causa. No participó en interrogatorios ni los presencié mientras estuvo colaborando con el Fiscal Jofré. El Mayor Jofré no le pidió consejo sobre qué hacer con un determinado detenido. A su pregunta, no recuerda haber efectuado alguna visita de cárcel mientras estuvo prestando colaboración para la Fiscalía Militar, aunque no lo descarta. Sin embargo, a partir de su designación como Fiscal Militar sí fue en varias oportunidades. Es designado mediante Decreto n° 59 de 14 de febrero de 1974 Mayor de Justicia Militar, desempeñando funciones como Fiscal de Ejército y de Carabineros de la Provincia de Cautín dependiente del IV Juzgado Militar con Asiento en Valdivia. A mediados de 1974 consiguió trasladar la Fiscalía Militar hasta el 4° Piso del edificio donde hoy funciona el Banco Santander Santiago en calles Prat esquina Claro Solar. En el cargo de Fiscal estuvo hasta el 16 de diciembre de 1982, fecha en la cual pide baja voluntaria luego de que su hermano Carlos Podlech Michaud, quien era en esa fecha presidente de los trigueros, fuera expulsado del país. Explica que el grupo de Investigaciones que colaboró con la Fiscalía militar estaba formado, entre otros, por Hernán Quiroz y un chofer de apellido Luco. Respecto de los hechos materia de esta investigación puedo señalar que el nombre de Victoriano Segundo Fernández Coloma no le resulta conocido ni se enteró de su muerte. El Tribunal le lee la declaración de don Héctor

Ulises González Castro, de fs. 296. El deponente señala que esos dichos no son efectivos, son falsos en todas sus partes. Primero porque no era Fiscal Militar en 1973 y en segundo, porque no conoce a Héctor González Castro y jamás sostuvo ninguna conversación personalmente o por teléfono con él. El Tribunal le lee la declaración de Carlos Luco Astroza, de fs. 383. Depone que le extraña la respuesta del señor Luco, por cuanto según tiene entendido en aquella época se desempeñaba como chofer y estaba en la guardia según me he informado en algunos procesos. Por lo tanto él nunca tuvo acceso a la fiscalía. Y rechaza tajantemente la expresión "aparentemente" en que se señala como Fiscal Militar de hecho, porque solo lo fue a partir de marzo de 1974. Si él no presenció interrogatorios mal puede afirmar lo que ha expresado. Respecto de los dichos de Raúl Binaldo Schonherr Frías, de fs. 621, puedo indicar que esta persona se equivoca al indicar que el Mayor Jofré le delegó sus responsabilidades de la Fiscalía, puesto que en las propias declaraciones efectuadas en otros procesos a por el Mayor Jofré, este señala que él asumió en pleno el cargo de Fiscal cuando fue designado el 11 de septiembre de 1973.

En **declaración judicial** del 29 de agosto de 2006, de **fs. 1424 a fs. 1427 (Tomo IV)**, aquilata que en septiembre de 1973 se desempeñaba como abogado de profesión, especialmente como asesor de los sindicatos de empleados agrícolas, quienes fueron afectados por las expropiaciones y tomas ilegales, que por centenares debieron abandonar el lugar en aquella época. El 11 de septiembre de 1973 en su calidad de ex cadete militar lo llamó el Comandante del Regimiento Tucapel, Pablo Iturriaga Marchesse, fallecido, para solicitar su colaboración con el objeto de organizar los consejos de guerra que iban a tener lugar de ahí en adelante. Entre el 11 y 12 de septiembre hubo centenares de detenidos puestos a disposición de la Fiscalía Militar y con motivo de esa situación le sugirió al fiscal Militar, Luis Jofré y al Comandante del regimiento, que solicitará al Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Oscar Carrasco, la designación de funcionarios judiciales en comisión de servicios en la fiscalía militar

con el objeto de ayudar en la toma de declaraciones. Gracias a esa gestión fueron designados don Héctor Toloza Fierro, Adrián González Maldonado, Victoria Gálvez, los relatores Gastón Meckelbur y Nibaldo Seguro Peña. El deponente no era asesor jurídico de la fiscalía militar y escasamente daba consejos jurídicos al Fiscal Jofré, porque éste tomaba sus propias declaraciones. Su labor se remitió a organizar los consejos de guerra. Jamás participó de los interrogatorios mientras estuvo colaborando con el Fiscal Jofré. Mediante Decreto N°59 de 14 de febrero de 1974 es designado Mayor de Justicia militar, desempeñando funciones como fiscal de ejército y Carabineros de la provincia de Cautín dependiente del IV Juzgado Militar con asiento en Valdivia. A mediados de 1974 traslado a la Fiscalía Militar hasta el 4° piso del edificio donde funciona el banco Santander Santiago en calle Prat esquina Claro Solar. Aproxima que la Fiscalía Militar en el regimiento funcionaba en una oficina ubicada al costado de la comandancia. Reconoce que el único funcionario que estaba en la fiscalía, previo a la llegada de los funcionarios judiciales, era de apellido Quilodran, fallecido. Espeta que Dorian Novoa Godoy renunció al Poder Judicial, integrándose a las filas de Carabineros. En el cargo de la Fiscalía estuvo hasta el 16 de diciembre de 1982, fecha en la cual pidió su baja voluntaria luego que su hermano Carlos Podlech Michaud, presidente de los trigueros, fue expulsado del país. Dice que efectuó visitas a la cárcel en calidad de Fiscal Militar, conversando con los procesados en su tribunal. Los interrogatorios se hacían en las dependencias de la fiscalía Militar. De las declaraciones extrajudiciales eran tomadas por un grupo de detectives agregados al Regimiento Tucapel. Blasona que ese grupo estaba formado por Hernán Quiroz y un chofer apellido Luco. Sostiene que Capitán Ubilla era el comandante de la unidad militar y que le encargó investigar al MIR regional. Para ello, ese oficial contaba con su propio equipo como suboficiales, Moreno y Schonherr. Desconoce donde funcionaba la oficina de Ubilla. No supo si Quiroz y Luco ayudaban a esa labor. La fiscalía funcionó en el regimiento, ambas oficinas estaban separadas. No participó ni presenció interrogatorios de miristas, salvo la oportunidad en el que el

Capitán Ubilla prestó declaración ante la fiscalía por el caso de Víctor Maturana Burgos. Afirma participar de los consejos de guerra, posterior asumir como fiscal militar. Se lee la declaración de Mario Carril, declara que son absurdos los dichos de esa persona, jamás interrogó junto al Capitán Ubilla. Se le pregunta si en la época en que colabora con el Fiscal Jofré o en que actuó como Fiscal Judicial en propiedad, aplicó apremios ilegítimos. Depone que jamás aplicó apremios ilegítimos. Por el contrario, solicito ayuda a la corte de apelaciones para precaver que ese tipo de hechos ocurrieran. Reitera que no interrogó a nadie cuando no era fiscal militar. Y cuando fue fiscal militar interrogó en dependencias de la fiscalía. La redacción de bandos desconoce la motivación de la redacción y publicación de estos. Atina que fue objeto de una funa en la universidad donde trabaja, porque se le imputa haber participado en la tortura de varias personas, además tener participación en la desaparición de otras personas. Los hechos son infundados e injuriosos, por lo que detrás esas acciones existen personas que persiguen tener beneficios económicos. Se refiere a Nelson Thielemann. Se refiere al problema de dólares de 1973, de lo cual se enteró hace poco tiempo.

En **diligencia de careo** con Bernardita del Carmen Weisser Soto del 19 de julio de 2013, de **fs. 1428 a fs. 1429 (Tomo IV)**, ratifica su declaración de fs. 2751 a fs. 2759 (declaración prestada en causa diferente). La persona sentada a su lado es Bernardita del Carmen Weisser Soto, quien fue sometida a consejo de guerra en una fecha que tendrá que precisar. En lo particular no es cierto lo que ella depone en el sentido que le haya requisado un libro, como tampoco haberla interrogado. Es posible que el consejo de guerra fuera en 1975, ya estuviera presente como fiscal militar. Acompaña declaración de Bernardita Weisser de la época. Comunica que no rememora los hechos depuestos por la persona con la que se le carea. Cree que lo está inventando. No tuvo una oficina en el regimiento Tucapel, solo organizo consejos de guerra y a buscar abogados idóneos que defendieran a los detenidos. La señora fue acusada de ser la jefa de la subjefatura de avenida Alemania del MIR en 1973, sus dichos obedecen a un resentimiento y

afán de venganza manifiesta por el hecho de haber sido condenada en un consejo de guerra. Incluso fue a Italia a declarar en su contra. Cree que su nombre fue deslizado en Italia por Víctor Maturana Burgos.

En **diligencia de careo** con Víctor Hernán Maturana Burgos del 19 de julio de 2013, de **fs. 1430 a fs. 1432 (Tomo IV)**, ratifica su declaración judicial de fs. 2751 a fs. 2759 (declaración prestada en causa diferente). La persona con la que se le carea es Víctor Maturana Burgos, sometido a consejo de guerra en 1973, siendo fiscal militar el Mayor Luis Jofré Soto. Niega que durante el consejo de guerra haya pedido la pena de muerte para él, puesto que no estaba facultado para peticiones de esa naturaleza, pues era asesor del fiscal militar, Mayor Jofré, autoridad con facultades para intervenir en esos juicios y solo dio lectura al dictamen y formulo acusación. Posterior al 11 de septiembre de 1973 organizó el funcionamiento de la fiscalía y consejos de guerra. En la fiscalía quedaron trabajando los abogados Gastón Mecklenburg y Dorian Novoa, por lo que era a estos a quien acudía Jofré para disipar dudas. Cuenta que en 1984 cuando regresó a Chile, Maturana Burgos fue condenado por tenencia de explosivos e ingreso clandestino al país. Acompaña copia de la sentencia de la causa a la que hace referencia como muestra de la personalidad que tiene Maturana. Ante la ausencia del Fiscal Militar, el Código de Justicia Militar, que el Comandante de la división es quien designa al Fiscal Ad Hoc, artículo 29. Esa designación pudo ser para conocer causas criminales o para gestiones particulares. Acompaña copia de la cita legal. Explica que cuando lo designaron Fiscal Ad hoc para ir a la corte de apelaciones de Temuco a solicitar personal para la fiscalía, fue a petición del intendente y con autorización del comandante de división, duró como dos días.

En **diligencia de careo de Sotero Javier Guevara Guevara** del 25 de julio de 2013 de **fs. 1433 (Tomo IV)**, ratifica su declaración judicial de fs. 2751 a fs. 2759 (declaración prestada en causa diferente). No reconoce a la persona que está sentada a su lado. El tribunal le da a conocer su identidad. Depone que jamás tomó declaraciones en la cárcel, solo fiscalía militar cuando fue fiscal. Agradece el

gesto del señor Guevara de haber dicho la verdad en esa declaración. Anexa que según ha sabido el Fiscal Militar de la época designo a Gastón Mecklenburg, entre otros, para que tomaran declaraciones en el CCP de Temuco. Junto con él estaba doña Victoria Gálvez, quien así lo expresó en una declaración que acompaña en este acto.-

En **declaración judicial** del 13 de agosto de 2013 de **fs. 1434 (Tomo IV)**, declara con el objeto de rectificar aquella parte de su declaración que prestó en el día de ayer en el sentido que el Secretario de la Fiscalía no letrada antes de su designación como Fiscal Letrado habría sido don Jaime García Covarrubias. No es así, pues lo confundió con el rol que él desarrolló como secretario de algunos consejos de Guerra. Una de las motivaciones que indicó a la Corte para obtener la colaboración de miembros del Poder judicial, fue que en el regimiento solamente había un dactilógrafo calificado, el señor Leonel Quilodrán, encargado de las causas del regimiento y que el Fiscal don Luis Jofré lo designaba a él como secretario, sin perjuicio de otras situaciones en que tiene que haberlo remplazado otra persona.

En **diligencia de careo** con Herman Carrasco Paul del 12 de agosto de 2013 de **fs. 1435 a fs. 1436 (Tomo IV)**, ratifica declaración judicial de fs. 2.751 a fs. 2.759 (declaración prestada en causa diferente) que en lo pertinente le ha sido leída (fs. correspondiente a causa diversa). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es don Hermán Carrasco Paúl, quien fue a declarar a Italia en su contra. Todo lo que esta persona declara es absolutamente falso, desconociendo el motivo por el cual declara en su contra. Tiene en su poder una declaración hecha por el señor Carrasco en la cual señala haberlo visto de uniforme en la Fiscalía Militar, sin que indicara que tuviera alguna otra función. El señor Carrasco Paúl en distintas ocasiones ha ido agregando hechos nuevos como es el caso de la dama que supuestamente era su amante, situación que es falsa. Igualmente, en alguna declaración extrajudicial dijo que tenía responsabilidad en los hechos ocurridos con motivo del asalto al polvorín hecho que es también falso, por cuanto estaba en

Santiago en esa fecha. No conoce al señor Carrasco desde niño. Sólo lo conoció en Italia.-

En **diligencia de careo** con Nelio Gastón Holzapfel Gross, del 12 de agosto de 2013 de **fs.1437 (Tomo IV)**, ratifica declaración judicial de fs. 2.751 a fs. 2.759 (declaración prestada en causa diferente). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es don Nelio Gastón Holzapfel Gross, a quien conoce desde hace muchos años. No recuerda el incidente a que esta persona hace referencia. En todo caso de haber ocurrido como lo expresa el señor Holzapfel, con toda seguridad debió haber consultado al Mayor Jofré, quien era la persona que resolvía las situaciones de los detenidos. De todos modos el señor Holzapfel está confundido y que Dorian Novoa conversó con el mayor Jofré y no con el deponente, porque no tenía poder de decisión.

En **diligencia de careo** con Mario Olate Melo del 13 de agosto de 2013, de **fs. 1438 (Tomo IV)**, ratifica su declaración judicial de fs. 2.751 (declaración prestada en causa diferente). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es don Mario Olate Melo, a quien conoce desde hace muchos años y que en 1973 era Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco. Se constituyó en la Corte de Apelaciones de esa ciudad mandatado por el Coronel Iturriaga y solicitó personal para trabajar en la Fiscalía Militar: Fueron designados Gastón Mecklenburg, Dorian Novoa, Héctor Toloza y Adrián González.

En **diligencia de careo** con Daniel Aguirre Mora del 13 de agosto de 2013, de **fs. 1439 (Tomo IV)**, ratifica su declaración judicial de fs. 2.751 a fs. 2.759 (declaración prestada en causa diferente). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es don Daniel Aguirre Mora, a quien ha conocido previo a entrar a esta audiencia. Sin embargo no lo conocía de antes. Respecto de los dichos del señor Aguirre musita que son absolutamente falsos. Nunca fue a la Prefectura de Investigaciones para requerir información de tipo político, quizás sólo lo hizo para requerir información de algún detenido. Jamás pidió información de tipo político. Anexa que no participó de lo que el señor Aguirre sindicó como la "Junta Chica" ni

de la reunión que sostuvo esta persona con el Coronel Iturriaga con motivo del asalto al polvorín del regimiento.

En **diligencia de careo** con José Heriberto Mansilla Gática del 12 de septiembre de 2013, de **fs. 1440 a fs. 1441 (Tomo IV)**, no es efectivo lo que él declara respecto a que interrogó a personas junto a José Heriberto Mansilla por orden del Fiscal Militar de apellido Jofré. Puntualiza que el Fiscal Militar era el Mayor Jofré y el deponente sólo era el asesor de la Fiscalía. **Jamás tomó** declaraciones siendo asesor de la Fiscalía Militar. Tampoco lo hizo Guido Sepúlveda. Ni recuerda que a su hermano le hayan tomado un fundo y menos que Mansilla Gatica haya intercedido ante él por esta persona.

En **declaración judicial** del 28 de junio de 2012, de **fs. 1443 a fs.1451 (Tomo IV)**, en septiembre de 1973, en su calidad de ex cadete militar lo llamó el comandante del regimiento Tucapel, don Pablo Iturriaga Marchesse, fallecido, quien le señaló que el país estaba viviendo un ambiente casi de guerra civil y por tanto las fuerzas armadas habían deducido tomar el control para salvar la situación. Antes del 11 de septiembre de 1973 funcionaba una fiscalía militar en tiempo de paz que estaba bajo las órdenes del Mayor Jofré, asistido por tres suboficiales de ejército cuyos apellidos eran Moreno, Schonherr y Quilodran, quienes no tenían preparación para afrontar juicios que se vendría a raíz de esos problemas. Entre el 11 y 12 de septiembre hubo alrededor de 200 detenidos a disposición de la fiscalía militar y con motivo de esa situación sugirió al fiscal militar Don Luis Jofré y al Comandante del regimiento, que solicitará al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Oscar Carrasco la designación de funcionarios judiciales en comisión de servicios en la fiscalía militar con el objeto de ayudar en la toma de declaraciones. Gracias a esa gestión designaron a Héctor Toloza Fierro, Adrián González Maldonado, el relato Gastón Mecklenburg y el secretario del juzgado de indias, Dorian Novoa. Aconsejó actuarios, quienes tenían gran experiencia, en el sentido que actuarán igual como lo hacían los tribunales ordinarios. Debe haber concurrido al regimiento Tucapel, al menos

durante el primer mes, día por medio. En aquel entonces debió atender, además a sus clientes por los temas de expropiación, ya que en el regimiento no percibía remuneración. Vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, los que eran mantenidos en el patio de la unidad. Eran más de cien personas. Especula que esos detenidos fueron puestos en libertad o derivados a la cárcel, según fuese el caso. Desconoce si hubo alguna dependencia al interior del regimiento en la que fuesen dejadas esas personas. De los consejos de guerra, comenzaron a partir del 26 o 29 de septiembre de 1973. Su tarea era asesorar al comandante para gestionar la rápida instauración del tribunal mediante la designación de los vocales integrantes del consejo de guerra. Destaca que había dos fiscalías, del Ejército y Carabineros. Esta última a cargo del Teniente Coronel Gonzalo Arias González. Hubo un abogado del servicio jurídico de Carabineros de Cautín, a saber Hernán Morales, designado fiscal ad hoc para investigar un delito de tenencia ilegal de armas y explosivos y otros, por parte de una escuela de guerrilleros que hubo en Nehuentué. El rol de esa causa era 1198-73. Espeta que Juan Michelsen Delano, era auditor de la IV división de ejército, con asiento en Valdivia. Él investigó una causa por incitación a la formación de milicias o grupos de combate. Conoce una causa contra Víctor Molfiqueo Cayuñil y otros, por ofensas públicas a las fuerzas armadas. Esta última causa llevaba rol 1076-73. No sabe cuánto tiempo estuvo en la región. No se fue con su propio equipo ni tampoco se instaló en el regimiento. Delibera que la fiscalía militar recibió la colaboración de Carabineros e Investigaciones para efectuar sus investigaciones. Esgrime que no asesoró al intendente de la época, Coronel Ramírez, quién tenía su propio asesor jurídico, quien al parecer era el abogado Francisco Contreras. La oportunidad en que le pidió constituirse en la corte de apelaciones de Temuco, para solicitar ayuda del poder judicial para efectos de echar andar la fiscalía militar. La fiscalía militar en 1973 funcionaba en la oficina del segundo comandante del regimiento, ubicado en el edificio de la comandancia. Los actuarios antiguos de la Fiscalía, es decir Moreno, Schonherr y Quilodran continuaron sus labores interrogando a los

detenidos. Ellos interrogaron poco, porque tenían otras tareas en la sección segunda, al mando del capitán Ubilla. El comandante Iturriaga le encargó al Capitán Ubilla que se investigará todo lo relativo al MIR en la región. No prestó colaboración en la investigación que realizó ese oficial, ni supo quienes trabajaron con él. Sin embargo, tuvo conocimiento de la causa en el año 1974, una vez que asumió como fiscal militar en propiedad. Respeto de Hernán Morales, no lo vio en la Fiscalía del Regimiento. No supo quién trabajo para investigar su causa. No participo en interrogatorios no lo presenció mientras colaboró con el fiscal Jofré. Nunca el Mayor Jofré le pidió consejo sobre qué hacer con un determinado detenido. Basa que no realizó visitas a la cárcel, cuando prestaba colaboración para la fiscalía militar, aunque no lo descarta. Sin embargo, a partir de su designación fiscal militar fue en varias oportunidades. Fue designado mediante decreto 59 del 14 de febrero de 1974, Mayor de justicia militar, desempeñando funciones como fiscal de ejército y carabineros de la provincia de cautín dependiente del iv juzgado militar con asiento en Valdivia. A mediados de 1974 consiguió trasladar la fiscalía militar hasta el 4° piso del edificio donde hoy funciona el banco Santander Santiago en calle Prat esquina claro solar. Detento el cargo de fiscal hasta el 16 de diciembre de 1982, fecha en la cual pide su baja voluntaria luego de que su hermano Carlos Podlech Michaud, presidente de los trigueros, fuera expulsado del país. Atina que el grupo de investigaciones que colaboró con la fiscalía militar formado por Hernán Quiroz y el chofer Luco. De Santiago Fáundez Bustos no le resulta conocido. El tribunal lee la declaración de fs. 30 correspondiente a Rosalía Bustos, empero esos dichos no son efectivos, son falsos en todas sus partes. En primer lugar no es su manera de actuar. Esta persona esta incentivada por otros para acusar perjuicio y daño al deponente. El tribunal lee la declaración de Rosa Adriana Fáundez Bustos de fs. 142 depone que es una clara muestra de la estrategia tendiente a crear un ambiente el cual sería una persona que tenía un tremendo poder en aquella época. Esta estrategia se aplicó preferentemente mientras estuvo detenido injustamente en Italia. Jamás ha

actuado imprudentemente. Cita como ejemplo el caso de una persona que durante los años 90 lo denunció públicamente por el delito de torturas sufridas durante septiembre de 1973. Se querelló por injurias y calumnias en contra de esa persona y se demostró que él jamás estuvo detenido ni había sido alcalde de Curacautin, como lo señaló. Públicamente tuvo que retractarse los hechos imputados por esa persona. De los dichos de Víctor Maturana Burgos de fs. 272, invoca que él tiene una animadversión en contra porque ha pensado que como fiscal militar habría pedido la pena de muerte para él por el delito de traición y espionaje. Eso no es efectivo, ya que el dictamen lo hace el fiscal, Sr. Jofré. Destaca que no ha interpuesto ninguna querella por injurias en contra de esa persona, ya que tiene una tremenda maquinaria dispuesta a perjudicarse. Lo anterior sería una pérdida de tiempo. El tribunal lee la declaración de Bernardita Weisser Soto de fs. 282, esta fue sometida a un consejo de guerra en 1973, quizás la haya visto en la fiscalía militar de aquella época, pero en ningún caso es cierto lo que ella firma, puesto que nunca ha tenido una colección de libros como ella afirma que se los quitó. Esa persona declaró en su contra en Italia cuando estuvo privado de libertad. El tribunal lee declaración judicial de Mario Carril Huenumán de fs. 285, fundamente que son absurdos sus dichos, porque no interrogó junto con el capitán Ubilla ni con alguien más. El señor Carril Huenumán fue interrogado por el abogado Hernán Morales en la causa de Nehuentué. Es problema que el dictamen de esa causa le haya correspondido, pero no lo recuerda. El tribunal lee declaración de Aquiles Alfonso Poblete Müller de fs. 287, no lo recuerda y no tiene idea porque lo sindicó como el responsable del destino de los detenidos en la fiscalía militar en 1973. El tribunal lee la declaración de Pedro Segundo Carrillo González de fs. 294, utiliza que no lo conoce ni rememora haber tomado declaración en la fiscalía militar de Temuco. Insiste en que jamás tomó declaración a una persona mientras no fue fiscal militar en propiedad. No sabe el motivo por el cual esta persona lo menciona. Se lee declaración de Eliana Pichón Seguel de fs. 297 cuenta que no la conoce ni la interrogó. A Gudenschwager era empresario y

tal vez reservista de la Fach, porque era piloto, empero no lo vio en el regimiento. El tribunal lee declaración de José Heriberto Mansilla Gatica a fs. 304, delibera que si recuerda su nombre, pero los dichos son falsos. Jamás pidió colaboración para interrogar a nadie, porque nunca interrogó a ninguna persona. Reitera que no tenía injerencia para ayudar detenidos. En más de una ocasión intercedió por un detenido ante el fiscal Jofré o que actuó como Fiscal judicial en propiedad, aplica apremios ilegítimos. Por el contrario, pidió ayuda a la corte de Apelaciones para precaver que hechos de esa naturaleza no ocurrieran. Asevera hubo un tiempo en ese periodo que vistió uniforme militar. El tribunal lee declaración de don Sotero Guevara Guevara a fs. 309, niega haber tomado declaración a esa persona cuando fue fiscal militar. De los dichos de Bernardino Piñera Carvallo de fs. 312, refiere que lo conoce porque siempre tuvo un trato cordial y de caballeros. Lo recibió en la fiscalía militar y debe haber recibido sus consultas acerca de detenidos. Todas esas peticiones las acogió y se las transmitió al fiscal Jofré. El comandante Iturriaga derivaba ese tipo de peticiones hacia su persona y no hacia el fiscal Jofré porque el nexo entre el mundo civil y militar, era el deponente. No le pregunto por detenidos a Ubilla o Morales, porque no tenía relación con ellos. Se da lectura a declaración de Erasmo Ricardo Villanueva Simón de fs. 314, adopta que no conoció a esa persona y todo lo que ella señala es absolutamente falso. No interrogó a nadie ni hubo una sala de interrogatorios distinta a la de la fiscalía. Tampoco le consta que haya habido torturas. De la redacción de bandos militares nunca se le consultaron ni conoce el motivo de su redacción o publicación. No recuerda a Juan Videla.

13º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, quien fue sometido a proceso de **fs. 1602 a fs. 1640 (Tomo V)** con fecha 09 de diciembre de 2022, auto de procesamiento que fue confirmado por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco a fs. **1721 (Tomo V)**. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 1771 a fs. 1809 (Tomo V)** con fecha 29 de abril de 2023, como autor del delito de apremios

ilegítimos con resultado de muerte en la persona de Victoriano Fernández Coloma, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de diciembre de 1973.

Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES.

Aparte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

1. Erasmo Ricardo Villanueva Simón. Declaración judicial del 18 de junio de 2012 de fs. 783 a fs. 786 (Tomo III), soflama en lo pertinente que en esa sala cuando entró pudo ver una mesa larga a la que estaban sentadas cinco personas entre las que puede recordar un oficial vestido con uniforme de la Fach y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado Alfonso Podlech Michaud, persona a quien ubicaba de vista con anterioridad. También vio una banca similar a las de las plazas. No recuerdo quién le preguntó el nombre, pero luego de que yo revelara mi identidad el abogado Alfonso Podlech buscó en un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel. Luego de mirarlo dio una orden señalando que yo me quedaba detenido y que al día siguiente pasaba a interrogatorio. Entonces, lo llevaron de regreso a la sala junto a la guardia. Al día siguiente apareció su actual cuñado, Óscar Inostroza Segura, junto a dos conscriptos más. Este dijo que por órdenes superiores debía llevarlo a interrogatorios. Lo sacó de la guardia y tras caminar alguno 5 pasos y ponerse detrás de la sala de guardia procedió a vendarle la vista. Sin embargo, por la orientación en la que quedó antes de ser vendado y la dirección que siguieron al caminar, intuyó que se dirigían hacia la sala donde el día anterior había sido

interrogado por Podlech. Continúa, ahí lo desvistieron y sentaron en la banca que había visto el día anterior. Le aplicaron electricidad con un magneto. Esto lo dedujo porque a su costado izquierdo sentía que una persona hacía girar una manivela tras lo cual comenzaban las descargas. Le aplicaron corriente en el pene y en diferentes partes del cuerpo, como la sien, la boca, en los pies, detrás de las orejas, etc. Además lo agredían en los pies con algo duro que aparentemente era de goma. Posteriormente, alrededor del octavo día de reclusión en el Regimiento Tucapel es llevado a la cárcel en un camión abierto junto a cuatro o cinco personas más. En ese lugar estuvo recluido hasta el 22 de diciembre de 1973. Una semana antes fue llevado al regimiento Tucapel y lo ingresaron a una dependencia ubicada hacia el fondo de la unidad militar, donde es entrevistado con el abogado Alfonso Podlech. En ese lugar esta persona dijo que por decisión del tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara.

2. Daniel Arnoldo Aguirre Mora. Declaración judicial del 01 de agosto de 2012 de fs. 787 a fs. 790 (Tomo III), Arguye en lo pertinente que Alfonso Podlech un año antes que ocurriera el golpe militar, el abogado iba al cuartel de investigaciones a requerir información de tipo político. Cuenta que se entrevistaba con el Prefecto Leonel Hormazábal y detective Quiroz. Supo que le entregaba esa información a alguien en el regimiento Tucapel, pero desconoce quién. Esa información la obtenía desde los archivos que la inteligencia de investigaciones tenía. Esa información la usaba el grupo de patria y libertad, según comentaban los funcionarios. Posterior al 11 de septiembre de 1973, Podlech siempre mantuvo muy cercano y activo dentro del regimiento Tucapel. Inclusive en una oportunidad en que el Prefecto se presentó ante la junta chica de Temuco, él estaba con ellos. Anexa que en noviembre de 1973 quedo de prefecto subrogante y se produjo una fuga de personas detenidas en el regimiento Tucapel, los que fueron dados de baja. Entonces fue al regimiento para pedir antecedentes para tenérselos al prefecto cuando regresará. Al llegar a dicho lugar se entrevistó con el comandante

Iturriaga Marchesse y Alfonso Podlech. Entonces el comandante le dijo que solo le comunicara al prefecto que los detenidos habían intentado fugarse. Entre los detenidos estaba una persona a la que le faltaba un brazo.

3. **Juvenal Lagos Osses.** Declaración extrajudicial del 10 de agosto de 2016 de fs. 968 a fs. 969 (Tomo III), en lo pertinente desarrolla que se rumoreaba que se aplicaba corriente a la gente, incluso en una oportunidad vio a una mujer. De personas fallecidas en sala de tortura no lo recuerda, empero un día que estaba de guardia, vio salir un camión tres cuarto, cuya carrocería iba tapada con un lona, recordando que el chofer hizo comentarios que debía ir a Hospital de Temuco, además de haber escuchado al interior de la compañía que una persona habría fallecido al interior del regimiento.

4. **Juan Bautista Labraña Luvecce.** Declaración extrajudicial del 13 de diciembre de 2016, de fs. 832 a fs. 833 (Tomo III), en lo pertinente blasona que en relación a los detenidos del regimiento, los que quedaban por infracción a toque de queda eran dispuestos en la guardia de la unidad y otros eran llevados al gimnasio tras ser interrogados por la sección segunda. Soflame que la Fiscalía Militar estaba a cargo de Alfonso Podlech, quien era Abogado, con quien no tuvo ningún tipo de contacto, por no cumplir labores en la comandancia.-

5. **Carlos Roberto Urquiza Iglesias.** En declaración judicial del 07 de marzo de 2019 de fs. 1112 a fs. 1113 (Tomo IV), en lo pertinente descarga que se escuchaban rumores de que había personas detenidas por motivos políticos que se encontraban detenidas en el gimnasio del Regimiento Tucapel. Vio muchas de aquellas personas en malas condiciones físicas y decaídas. Sabía que existía una sala de torturas pero nunca ingresó a ella, los oficiales principalmente ingresaban como el capitán Alvarado. Lo anterior lo supo, porque aquello era de público conocimiento al interior del Regimiento. El nombre de Santiago Faundez Bustos, Ambrosio Badilla y Victoriano Fernández los desconoce. Si, puede indicar que algunas personas fallecieron al interior del Regimiento producto de lo mismo (aplicación de corriente eléctrica).

6. Héctor Ulises González Contreras. En declaración judicial del 27 de noviembre de 2012 de fs. 296 a fs. 297 (Tomo I), en lo pertinente proclama que el Regimiento, en septiembre de 1973, pedía que se les llevaran detenidos a dirigentes sociales de la ciudad de Villarrica. Los solicitaba telefónicamente y sin órdenes escritas. Al ver esta situación, llamó al Fiscal Militar, Alfonso Podlech Michaud y coordinaron una reunión para analizar la situación en la que regularizaron la forma en que se solicitaban a los detenidos. Desde esa fecha el Fiscal Militar, Podlech, ordenó que todo se hiciera por escrito. Como detenidos políticos nombra a toda la directiva del campamento "Che Guevara". Ellos se presentaron voluntariamente en la Comisaría. Ellos manifestaron que estaban a disposición de Investigaciones. Fueron enviados detenidos a la Fiscalía Militar de Temuco.

7. José Heriberto Mansilla Gática. Depone de fs. 1462 a 1464 (Tomo V), fs. 1465 (Tomo V), fs. 1466 (Tomo V) y de fs. 1467(Tomo V). En lo pertinente cuenta que el trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto a los detenidos era de Alfonso Podlech. Se intercedía ante don Alfonso Podlech, porque él decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. El Comandante Jofré dijo personalmente, cuando estaba de guardia que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que había dos mujeres, debía tomarla Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. La oficina de la plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el comandante Jofré era el Fiscal Militar, pero todas decisiones de la fiscalía militar las tomaba Podlech. Anexa que éste tenía el poder de decidir lo que pasaba con los detenidos, por esa razón se intercedía ante él por ellos. Utiliza que fue futbolista, seleccionado de Temuco, integró el primer deportes Temuco, a don Alfonso Podlech le gustaba el futbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante él por Rolando Núñez, quien vivía en su mismo sector y en una oportunidad se tomó junto a otras personas, uno de los fundos de Alfonso Podlech. Cuando esta persona se presentó en la Fiscalía, don Alfonso dijo

que lo agradecía por haber intercedido por él, porque si no lo hubiese hecho, hace rato lo hubiera tenido apuntado. Lo dejo irse y cito personalmente a la fiscalía. Gracias a que intercedió por él, Rolando se salvó. Nunca más supo de él. Respecto de los hechos conocidos como el asalto al polvorín, supo que todo era mentira. Describe que había una sala de torturas en la primera compañía de cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su jefe Tichahuer y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos, mientras le decían perrita tu sabes de eso. Asevera que trabajo por una tarde con Alfonso Podlech. Él tomaba declaraciones y él era el dactilógrafo. Esa situación solo fue un tarde y por orden del mayor Jofré. Amplía sus dichos anteriores, el nombre de la persona que era deportista y por la cual intercedió ante don Alfonso Podlech es de apellido Núñez. Alfonso Podlech lo conocía y cuando lo vio en el Regimiento, ordenó dejarlo con arresto domiciliario y además, era su vecino y quedó a cargo de su custodia.

8. Orlando Moreno Vasquez. Declaración judicial del 28 de octubre de 2014, de fs. 372 a fs. 374 (Tomo II), En lo pertinente desarrolla que, el Regimiento Tucapel fue centro de detención, dada la gran cantidad de detenidos que llegaron al regimiento estos fueron dejados en el gimnasio donde algunos permanecieron por varios días, luego de lo cual eran dejados en libertad o trasladados a la cárcel pública por orden de la Fiscalía Militar. Este grupo de interrogadores operaba en un gimnasio que estaba ubicado a un costado del rancho de la unidad. Sus funciones en este período de convulsión se limitaron sólo a trasladar detenidos desde el Regimiento Tucapel hacia la cárcel de Temuco y viceversa. Estos detenidos eran dejados en la guardia del regimiento una vez que pasaban por Fiscalía Militar y en virtud de una orden emanada de ése tribunal hacía los traslados. Descarga que una sola vez interrogó un detenido en la Fiscalía Militar. Esta persona era el abogado Renato Maturana Burgos, quien había sido citado para declarar algo sobre el Partido Comunista. Como todos estaban ocupados, el

Fiscal le pidió que le tomara la comparecencia y para tales efectos pasó una pauta de preguntas.

9. Carlos Luco Astroza. Declaración judicial del 29 de octubre de 2014, de fs. 383 a fs. 385(Tomo II), en lo pertinente adopta que los detectives quedaron bajo las órdenes del Capitán Nelson Ubilla Toledo, empero sujetos a lo que la Fiscalía Militar dispusiera. Revela que en el regimiento Tucapel efectuó citaciones siempre con funcionarios de su institución. En un principio tuvo a cargo una camioneta marca Chevrolet, modelo C -10, de color celeste; posteriormente llegó una citroneta, modelo AK- 6, color crema. Basa que acompañó a patrullas militares hacia el sector de Cunco y Currarehue, en una citroneta acompañando algún detective. El Mayor Jofré no se metía en nada, por lo que parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar. Esta persona andaba de uniforme en el regimiento.

10. Hernán Raúl Quiroz Barra. Depone de fs. 386 a fs. 389 (Tomo II) y de fs. 1297 a fs. 1300 (Tomo IV). En lo pertinente barbulla que había más de 800 detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos 5 días allí, debiendo tomarles declaraciones y anotar sus datos. Esta tarea la realizaron escribiendo a mano, puesto que no tenían otros medios. Especula que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no lo recuerda exactamente. Sin embargo, siempre permanecieron tomando declaraciones en el patio. En esta tarea fueron ayudados por el Suboficial Schonherr de Ejército. Si participó en interrogatorios de detenidos en el Regimiento Tucapel, pero siempre en la oficina que tenían asignada en el recinto de la Comandancia. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de Carabineros, Militares o de la Fach que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaron en la oficina. Estas personas eran derivadas al Teniente Espinoza por orden del Mayor Jofré. Para esto, llamaban a la guardia para que un soldado fuera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era

sacado por algún conscripto más tarde para ser llevado a la presencia del Tenientes Espinoza. Sin embargo, desconoce hacia dónde era llevado ni quienes lo interrogaban. Respecto de las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarle el arma a los centinelas, refiere que ese tipo de noticias las recibían al llegar en la mañana a trabajar al regimiento. Sin embargo nunca tuvieron mayores antecedentes sobre cómo ocurrieron los hechos ni tampoco podían preguntar. Estos hechos ocurrían durante la noche cuando ya no estaban en la unidad.

11. Raúl Binaldo Schonherr Frías. Depone de fs. 408 a fs. 409 (Tomo II) y de fs. 621 a fs. 623 (Tomo II). En lo pertinente utiliza que la oficina de archivo, después del 11 de septiembre de 1973, operaba en el mismo edificio donde se encontraba la oficina, fue destinada para que ahí funcionara la Fiscalía Militar del regimiento la que también estaba bajo el mando del Mayor Luis Jofré Soto, quien dirigía a tres actuarios, recordando entre ellos a don Héctor Toloza. En relación, al fallecimiento de algún detenido al interior de la unidad militar en alguna sesión de interrogatorios bajo la aplicación de torturas por parte del grupo que se dedicaba a esa labor, explica que en una oportunidad los Actuarios de la Fiscalía comentaron que hubo un fallecido dentro del cuartel y se relacionaba al Teniente Espinoza con la muerte del detenido. Jamás interrogó a ningún detenido político, tarea que era exclusiva del personal que trabajaba en la Fiscalía Militar. Dice que el abogado Alfonso Podlech Michaud apareció en el regimiento inmediatamente después de ocurrido el golpe militar. Este abogado estuvo concurriendo al regimiento todos los días en la mañana y en la tarde, vestía de uniforme, quizás autorizado por el Comandante del regimiento, puesto que antes había estado en la Escuela Militar. A su pregunta, cumplía Podlech de asesoramiento al Fiscal en el regimiento, él se hizo cargo de la Fiscalía Militar de hecho, puesto que las labores de la Segunda Comandancia eran tantas que el Mayor Jofré difícilmente podría haber ejercido los dos cargos al mismo tiempo, aunque éste último firmaba todos los documentos. El deponente trabajaba en la Segunda Comandancia todo el tiempo junto con el Mayor Jofré.

12 José Raúl Inzunza Reyes. Depone de fs. 629 a fs. 631 (Tomo II), fs. 632 a fs. 635 (Tomo II), fs. 648 a fs. 649 (Tomo II) y de fs. 958 a fs. 959 (Tomo II). En lo pertinente funda que en primera instancia, recibía a las personas que llegaba a denunciar hechos o personas de izquierda, para lo que cual debía tomar declaraciones en una oficina de la compañía, ubicada en la misma dependencia donde trabajaba el capitán Ubilla. Del mismo modo, llevaban personas detenidas para tomarles declaración, para luego ser regresadas a la guardia o sencillamente pasaban a los interrogatorios. A medida que efectuaba su labor de manera eficiente, fue ganando la confianza del capitán Ubilla, quien posteriormente se incorporó de forma directa en los interrogatorios, vale decir que participaba de estos, los cuales se llevaban en una dependencia destinada al descanso, ubicado al lado de los baños. En esa dependencia el detenido era acostado sobre un mesan o camilla donde se golpeaba brutalmente, y aplicaban corriente eléctrica con una máquina, que desconoce su nombre, funcionaba girando una manilla. Depone presenciaba los interrogatorios donde debía tomar apuntes sobre lo que señalará el detenido, anexa en más de una oportunidad fue ordenado por los más antiguos, aplicar corriente a los detenidos. Otra dependencia ocupada para interrogar detenidos era el gimnasio, al interior de este existía otro mesón o camilla, ubicada cercana a las fuentes de agua, donde los detenidos eran golpeados y sometidos a la corriente eléctrica. El oficial a cargo del grupo de interrogadores era el Capitán Ubilla, seguido por el sargento Arias y Silva, dos detectives, a saber Quiroz y otro que lo describe de 1,80 aproximadamente de estatura y contextura gruesa; los soldados conscriptos Libardo Schwartenski Rubio, Juvenal Lagos Osses, José Chávez Etchepare y el deponente, además de Juan Campos Valdebenito, realizaba labores administrativas. Ese era el único grupo encargado de los interrogatorios de los detenidos, no existiendo otro que recuerde, los detectives eran quienes dirigían el interrogatorio. Aproxima que los detenidos que interrogó y tomo declaración, no recuerda sus nombres, empero en dos oportunidades retiró personas fallecidas desde el interior de las salas de

interrogatorio, las cuales habían muerto producto de las torturas. Esos cuerpos fueron subidos a un vehículo y llevados a destinos que desconoce. Detalla el procedimiento en el cual participó, y en que se detuvo a dos personas. Respecto de la víctima Victoriano Fernández Coloma, invoca que no le resulta conocido ni lo asocia a alguna de las dos personas que resultaron fallecidas en la sala de torturas. A su pregunta, existía otro lugar donde se torturaba a los detenidos y que era el gimnasio chico ubicado a un costado de los comedores de los conscriptos. En ese lugar estuvo y pudo ver en dos oportunidades cómo se torturaban personas. Siempre era el mismo grupo de interrogadores. A su pregunta, solo tomó los datos y declaración a algunas personas detenidos en la oficina del Capitán Ubilla escribiendo a mano, pues no sabía mecanografiar. A su consulta, aparte de las dos personas fallecidas en los interrogatorios no tiene conocimiento de algún otro hecho similar ocurrido en el regimiento o fuera de este.

13. Aquiles Alfonso Poblete Müller. Depone de fs. 763 a fs. 765 (Tomo III) y de fs. 766 a fs. 767 (Tomo III). En lo pertinente espeta que el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. A su pregunta, las personas que interrogaban en el gimnasio del regimiento Tucapel estaban allí en calidad de detenidos y se veían muy cansados. Por lo general, se les preguntaba acerca de la existencia de armas y por filiación política. En total debo haber interrogado a diez personas en total, pudiendo recordar a un joven que dijo ser GAP, pero que tras el interrogatorio descubrieron que no era tal. Toda la información se le entregaba Ubilla y éste, a su vez, le entregaba los antecedentes a la Fiscalía Militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que, según supo, era el Fiscal.

14. Francisco Jerónimo Matta Iturra. Declaración judicial del 31 de julio de 2012, fs. 1266 a fs. 1267 (Tomo IV), en lo pertinente explica que esta seguro que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien interrogó a su padre y a Héctor Aguayo Olavarría porque su padre se lo dijo. Además, a mediados de octubre de 1973

concurrió a conversar con Alfonso Podlech Michaud en compañía del ex diputado Hardy Momberg, quien en aquel tiempo era miembro del Partido Nacional. Se entrevistaron con él en una oficina ubicada al interior del regimiento. En esa reunión Podlech se hizo acompañar de los capitanes Nelson Ubilla y Mario Alvarado. Hardy Momberg le dijo que si expulsaba del país a su padre él también se iría. Entonces Podlech le dijo que lo iba a echar del país de todas formas porque su padre era financista de la guerrilla del MIR y del Partido Socialista. Esta conversación duró no más de tres minutos. En fecha posterior, el abogado Sergio Zapata Camus fue a conversar con Podlech en representación de su padre. Esta seguro que él era el verdadero Fiscal Militar en Temuco y utilizaba al Mayor Jofré como pantalla, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y pudo comprobar su autor dad cuando conversé con él. Respecto de Héctor Aguayo Olavarría lo conoció puesto que su padre, Francisco Aguayo, fue candidato a Regidor en 1967 junto con el deponente. Su padre le contó que Podlech junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a Aguayo y a otra persona quedarse en la Fiscalía para ser interrogados. Utiliza que Podlech ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros como Alberto Malvaldí, dueño de la Radio La Temuco; don Máximo Eitel Presidente del Banco Sur, ubicado en calle Bello con Prat.

15. Marcos Rivas Matamala. Depone de fs. 67 a fs. 69 (Tomo I) copia fs. 181 a fs. 183 (Tomo I), fs. 263 a fs. 264 (Tomo I), fs. 267 (Tomo I) y de fs. 280 a fs.281 (Tomo I). En lo pertinente colige que la Policía de investigaciones eran unos cinco más menos los que fueron trasladados a la Fiscalía Militar de Temuco. Al llegar a este lugar, el primero que llamaron a declarar fue Victoriano Fernández, no volviéndolo a ver nunca más, más después que llamaron al deponente, le vendaron la vista y lo hicieron pasar a otra sala donde le aplicaron corriente y le hicieron preguntas, acerca de si era del MAPU o a qué partido político pertenecía, les contestaba que a ninguno, que era independiente, sin embargo continuaban aplicando corriente hasta que cayó desmayado y oía a uno que decía que hicieran

lo posible por salvarlo, porque ya se les fue uno cortado, para que se iban a ir con otro, enseguida sintió que le sobaban los brazos y lo llevaron del suelo para llevarlo a otra sala, ahí sacaron la venda y se recuperó un poco, después llegó Rodolfo Ruiz, esposo de doña Edith. En un momento la señora de Victoriano, les preguntó por él, pero indicaron que no lo habían visto. Ignora los nombres de los funcionarios policiales que los trasladaron a Temuco. Precisa que en el Regimiento los vendaron y trasladaron a una dependencia donde permanecieron los cinco. Ese mismo día comenzaron los militares a sacar a uno por uno para ser interrogados, recordando que el primero que salió de la pieza fue Vasquez Montecinos, y posteriormente los demás. En su caso durante el interrogatorio es sometido a torturas y preguntaban por las armas, y que debía cooperar ya que uno de ellos ya había muerto. Después de su interrogatorio, es conducido a una celda, juntándose nuevamente con José Vasquez Montecinos, Rodolfo Ruiz y su esposa Edith Caro León, pero Victoriano Fernández Coloma no se encontraba, presumiendo que él era la persona muerta a la que se referían los militares durante el interrogatorio, no volviéndolo a ver más.

16 José Vasquez Montecinos. En declaración judicial del 25 de septiembre de 1991 de fs. 69 a fs. 70 (Tomo I), en lo pertinente soflama que una vez en Temuco, en el Regimiento los llevaron a declarar a la Fiscalía, cuando le tocó, le vendaron la vista y trasladaron a otra pieza, allá le aplicaron corriente y comenzaron hacer preguntas de armas, donde las tenían y la dejaron en el suelo por muerto, pero desmayada, así que le sacaron la venda. Al día siguiente lo soltaron en la tarde, como no andaba con un cinco, un policía del regimiento lo trajo hasta el bus para que no le cobraran el pasaje. No volvió a ver a Victoriano Fernández, aclara que estuvieron en el asentamiento donde trabajaba en comunidad, después fue dividido en parcelas, cuando la señora Fernández les pregunto por él, le dijeron lo mismo.-

17. Edith Del Carmen Caro León. Depone de fs. 90 (Tomo I), fs. 204 (Tomo I), fs. 333 a fs. 334 (Tomo I) y de fs. 650 (Tomo II). En lo pertinente ostenta que previo a

la detención fueron citados al Cuartel de La Policía de Investigaciones de Villarrica junto a su marido, Victoriano Fernández Coloma, Abelino Vasquez, Marcos Rivas y la deponente, no recordando quienes los fueron a citar, pero debían presentarse en el cuartel policial a eso de las 15:00 o 16:00 horas de ese mismo día. Al llegar a la unidad policial, fueron recibidos por un Detective relativamente joven, cuya identidad ignora, quien les comunicó que serían trasladados a la Fiscalía Militar de Temuco, no dándoles a conocer el motivo. Es así, que posteriormente los hicieron abordar una camioneta y los trasladaron hasta el Regimiento Tucapel de Temuco, donde son entregados en la guardia de esta unidad militar, quedando al interior de una sala o calabozo donde había otros detenidos. Soslaya que el militar que los custodiaba no les dio explicación, hasta que al cabo de una hora se apersonó otro militar en el calabozo y se llevó a Victoriano Fernández, posteriormente después de una hora a Abelino Vasquez, Marcos Rivas y finalmente a Rodolfo, su marido. Destaca que no la llevaron, a excepción de Fernández, el resto llegó al calabozo en muy malas condiciones físicas ya que fueron interrogados bajo la aplicación de torturas, recordando que su marido venía muy mal, su piel estaba amoratada incluyendo sus labios a su parecer le aplicaron corriente. Desconoce por qué la detuvieron y no la interrogaron como lo hicieron con su marido y el resto, solo sabe que en el regimiento estuvimos un par de horas y posteriormente a los interrogatorios a los que fueron sometidos los demás, los subieron a un bus militar dejándola en el hogar "El Buen Pastor" y el resto de los detenidos en la Cárcel Pública de Temuco. En el "Buen Pastor", estuve ocho días después de los cuales quedó en libertad, por lo que regresó inmediatamente al asentamiento donde estaban los hijos, por su parte, su marido quedó en libertad a los cinco días de mi llegada al fundo, no siendo detenidos nunca más. Sobre Victoriano Fernández Coloma, la última vez que lo vio fue en los calabozos de Regimiento Tucapel, enterándose al tiempo después que este había fallecido al interior de la unidad militar, esto lo supo por el comentario de los mismos

trabajadores del fundo, recordando que no hubo funeral porque su cuerpo no apareció.

18. José Avelino Vásquez Montecinos. Depone de fs. 250 a fs. 251 (Tomo I) y de fs. 260 a fs. 262 (Tomo I). En lo pertinente blasona que la detención se produce a partir de una citación que recibió en el fundo "Loncovacá", la cual ordenaba que junto debieran presentarse en el Cuartel de Investigaciones de Villarrica, Edith Caro León, Rodolfo Ruiz, Marcos Rivas Matamala y el deponente, concurrieron hasta ese cuartel policial, la mañana del día 12 de diciembre de 1973, quedando todos detenidos en esa unidad, debido a que se creía que tenían armas en el fundo, siendo posteriormente trasladados a Temuco en un vehículo particular, cuyo dueño era un hombre que tenía una zapatería en Villarrica. En dicho vehículo los llevaron hasta el Cuartel de Investigaciones de Temuco, donde los derivaron al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. En dicho recinto militar, ingresaron en primera instancia a un calabozo, donde permanecieron un par de horas. Posteriormente los trasladaron hasta otra dependencia con la vista vendada y torturados en base a aplicación de corriente eléctrica. Aclara que del calabozo los sacaron de uno y condujeron a la sala de tortura. En dicho lugar fue la última vez que vieron a Segundo Fernández Coloma, a quien lo sacaron para torturarlo y no regresó. Las demás personas con las que llegó al regimiento, es decir sus compañeros del asentamiento, fueron trasladados hasta la Cárcel Pública de Temuco, quedando solo en el regimiento, siendo liberado al día siguiente.

19. Pedro Juan Fernández Coloma. Depone de fs. 84 (Tomo I) copia a fs.197 (Tomo I) y de fs. 245 a fs. 246 (Tomo I). En lo pertinente suma que se enteró por intermedio de su padre, que su hermano Victoriano fue arrestado. En ese entonces su padre llegó a su domicilio en el lugar Millaray y le señaló que su esposa no tenía más información del paradero de Victoriano y que por favor intentará algo, así es que habló con la señora que en ese entonces era su patrona y se contactó con el abogado Claudio González de Temuco, fue hasta su oficina y él llamó para todos lados, hasta que le informaron desde una Comisaría de

Carabineros, al parecer, que su hermano estaba muerto a consecuencia de un ataque cardíaco mientras se encontraba en la Fiscalía y enviado al Hospital Regional de Temuco donde permaneció cinco días sin que ni un familiar lo reclamara, motivo por el cual la municipalidad se hizo cargo y dio sepultura. Informó de lo precedente a su cuñada y ella tramitó una pensión de viudez con el abogado. Narra que después supo que a su hermano lo llevaron detenido al Regimiento de Infantería N° 08 "Tucapel" de Temuco, lugar donde habría estado junto a don Minino Vasquez y Benito Salamanca, ambos residentes del Fundo Loncovaca. Su hermano habría fallecido producto de un culatazo que le había dado con un fusil un Oficial del regimiento, situación que le habría ocasionado la muerte a Segundo.

20. María Eugenia Castillo Cares. Depone de fs. 24 a fs. 26 (Tomo I), fs. 33 a fs. 34 (Tomo I), fs. 56 (Tomo I), fs. 148 (Tomo I), fs. 222 (Tomo I) y de fs. 258 (Tomo I). Funda en lo pertinente, que contrajo matrimonio con Victoriano Segundo, en diciembre de 1965, con quien tuvo cuatro hijos, a saber Mario Iván, Juan Hernán, Mireya Carmen y Segundo Antonio, todos menores de edad para 1973. Dice que el 11 de diciembre de 1973 dos carabineros de la comisaria de Villarrica, llegaron hasta su domicilio en el asentamiento para notificar a su marido, que se presentara a las 08:00 horas del 12 de diciembre, en el cuartel de Investigaciones de Villarrica. Junto a él fueron notificados Avelino Vásquez, Edith Caro, Vicente Barrera y Marcos Rivas. Continúa, el 12 de diciembre del año en comento, su marido concurrió junto a dichas personas al cuartel de Investigaciones de Villarrica, donde debía presentarse. Anexa que debido a su preocupación por ignorar el motivo de la citación, a eso de las 9:00 horas le solicitó a su hermano Bartolomé que fuera hasta el cuartel de investigaciones a interiorizarse de lo que pasaba con Victoriano, pero este regresó al poco tiempo, comentándole que vio a un vehículo llevarse a su marido junto a las otras personas en dirección a Temuco. El 13 de diciembre concurrió al cuartel de Investigaciones de Villarrica a objeto que algún funcionario le dieran una explicación respecto al paradero de su

marido. Cuenta que lo atendió un funcionario, cuyo nombre ignora, y le manifestó que a Victoriano lo entregaron a la fiscalía militar del regimiento de infantería N°8 Tucapel de Temuco. Atestigua que dos días después fue hasta el Regimiento Tucapel de Temuco en ese lugar consultó por su marido, pero un militar de quien no recuerda su identidad, le dijo que Victoriano no se encontraba detenido en el lugar. Regresó a Villarrica y nuevamente se acercó al cuartel de investigaciones a relatar lo sucedido, pero esta vez la atendió un funcionario policial quien no da mayores antecedentes, lo único que le dijo fue reiterar que Victoriano lo había entregado a los militares del Regimiento Tucapel. Refiere que un día su cuñado Pedro Fernández Coloma, la contactó y le dijo que había conversado la situación de su marido a su patrón, quien al parecer era pariente de un Mayor de Ejército y dijo que debía concurrir nuevamente a Temuco. Es así, que de forma casi inmediata viajaron a Temuco hasta la oficina de su patrón la cual se ubicaba en el centro de la ciudad. En esa dependencia, los atendió este señor cuya identidad no recuerda y les comunicó que pudo averiguar que su marido estaba muerto y su cuerpo sin vida se encontraba en la morgue del Hospital Regional de Temuco. Ante tal situación, junto a Pedro se dirigieron hasta el Hospital Regional, pero al llegar a ese lugar se les informó que el cuerpo de su marido había sido sepultado en el Cementerio General de Temuco. Verificando lo precedente. Posteriormente, ya de regreso en Villarrica se dio cuenta que las personas que habían sido detenidas junto a Victoriano habían quedado en libertad, recordando que conversó en una oportunidad con Vicente Barrera, del cual supo que junto a su marido fueron llevados hasta el Regimiento Tucapel de Temuco, haciendo mención que la última vez que lo vio con vida, fue en una oportunidad que los militares sacaron a Victoriano de la habitación en que se encontraba con la vista vendada y con sus manos amarradas, según Vicente esto fue el mismo día en que llegaron al Regimiento, es decir el 12 de diciembre de 1973. Soflana que su marido vestía una chomba roja, pantalón y zapatos negros, no recuerda muy bien si su camisa era blanca o celeste. Explica que cuando consultó por su marido en la Fiscalía

Militar de Temuco, la persona que lo atendió negó la detención de su esposo y dijo: “esos perros se queman y se botan”. A ese lugar fue en varias oportunidades hasta que el jefe de su cuñado, cuyo nombre ignora, se ofreció para averiguar lo ocurrido. Su esposo actualmente está sepultado en el cementerio municipal de Temuco, pero no tiene certeza que su cuerpo este allí. Arguye que en estos años junto a sus hijos han sufrido buscando justicia.

b. Documentos.

1. Documentos acompañados a la querrela criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney que se desglosan de la siguiente manera:

a. Certificado de defunción de Victoriano Fernández Coloma donde consta que falleció el 12 de diciembre de 1973, al interior de un recinto militar, de **fs. 9, fs.30, fs. 49, fs. 76, fs. 142, fs. 158, fs.166, fs. 169 y de fs.190 (Tomo I)**.

b. Autorización de sepultación de Victoriano Fernández Coloma de fecha 20 de diciembre de 1973, donde consta que falleció el 12 de diciembre de 1973 a causa de un shock infarto del miocardio, politraumatizado de **fs. 32 y fs. 167 (Tomo I)**.

c. Informe individual para resolución del consejo correspondiente a Victoriano Segundo Fernández Coloma de **fs. 35 a fs. 41 (Tomo I)** que en lo pertinente señala que: “Según declaración jurada prestada por su cónyuge doña María Eugenia Castillo Cares arguye que: el día 11 de diciembre de 1973, su cónyuge recibió una citación en la que se le comunicaba que debía presentarse el 12 de diciembre de 1973 a la prefectura de investigaciones de Villarrica. Ese día salió a las 08:00 horas, aproximadamente con destino a esa unidad policial, no regresando al hogar. Al día siguiente, la señora María se dirigió a la prefectura para averiguar su situación, donde se le manifestó por parte de un inspector que don victoriano había sido puesto a disposición de la Justicia Militar. La cónyuge se dirigió a la Fiscalía Militar de Temuco, donde se efectúa una revisión de los libros de detenidos y no figuraba en sus registros. Según averiguaciones practicadas por la cónyuge, este había sido citado junto con otras 4 personas de las cuales

recuerda el nombre de tres: Marcos Rivas, Abelino Vásquez y Edith Caro, quienes en su oportunidad le señalaron que tenían prohibiciones de dar información respecto de lo sucedido, pero ante su insistencia solo logro saber por medio del señor Vásquez, que lo habían sacado desde el recinto con los ojos vendados; El día 22 de diciembre de 1973 y en compañía de su cuñado Pedro Fernández, concurrió nuevamente a la Fiscalía Militar en Temuco, donde se les informó que Victoriano Fernández Coloma había muerto y que una vez fallecido había sido entregado al hospital regional: en informaciones de dicho hospital se les informó que efectivamente había fallecido y que éste se encontraba en el cementerio de Temuco. ”

d. Copia simple de causa rol 29.347 de ingreso del Juzgado del Crimen de Villarrica por el delito de secuestro y homicidio, siendo la denunciante doña María Eugenia Castillo Cares, iniciado el 13 de septiembre de 1991 de **fs. 48 a fs. 109 (Tomo I)**, que en lo pertinente se declara el sobreseimiento definitivo en la causa.-

e. Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política, de **fs. 111 a fs. 113 (Tomo I)**, que en lo pertinente narra: “Fernández Coloma, Victoriano Segundo: 28 años, casado, tractorista, muerto por torturas el 12 de diciembre de 1973 en Temuco. Victoriano Segundo Fernández Coloma murió ese día en un recinto militar de Temuco, por shock, infarto de miocardio, politraumatismo, según se consigna en el certificado de defunción. De acuerdo con declaraciones de familiares y testigos, Victoriano Fernández fue detenido el 12 de diciembre de 1973 en la Prefectura de Investigaciones de Villarrica, donde se presentó a raíz de una citación recibida el día anterior por una falsa denuncia de tenencia de armas. De allí fue conducido junto con otros detenidos a la Fiscalía Militar de Temuco. Según varios testigos presenciales, en este lugar se le sometió a golpes, torturas y aplicación de corriente, falleciendo durante uno de los interrogatorios. El protocolo de autopsia señala que su muerte se produjo por un shock determinado por traumatismos múltiples torácico abdominales y de los miembros superiores y que existían signos

de infartación reciente del miocardio. Según el mismo informe, las lesiones contusas debieron ser causadas por terceros. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que la muerte de Victoriano Fernández Coloma fue consecuencia directa de las torturas y apremios ilegítimos a que fue sometido por agentes del estado durante su periodo de detención. Por ese motivo, lo declaró la víctima de violación de derechos humanos. ”

2. De fs. 6 a fs. 7, fs. 59 a fs. 61, fs. 225 a fs. 228 (Tomo I) y de fs. 976 a fs. 977 (Tomo III), protocolo de autopsia de Victoriano Fernández Coloma N°265/73 que en lo pertinente concluye: “que la causa necesaria de la muerte de Victoriano Segundo Fernández Coloma, fue el shock determinado por traumatismos múltiples tocaco abdominales y de los miembros superiores y con signos de infartación reciente miocárdica. El control histopatológico del miocardio reveló además signos de infiltración lipoídica en algunas fibras miocárdicas y muy discreta reacción inflamatoria intersticial. Las lesiones contusas son irregulares y debieron ser causadas con algún objeto dotado de moderada fuerza impulsiva. Podría corresponder a algún arma u objeto similar de uso doméstico. En la grave repercusión orgánica de la acción traumática sufrida, pudo haber influido significativamente la circunstancia del estado de plenitud gástrica que en los instantes de su muerte presentaba el occiso.”

3. Registro de inscripción de defunción del 20 de diciembre de 1973 de Victoriano Segundo Fernández Coloma donde consta que falleció el 12 de diciembre de 1973 al interior del recinto militar a causa de un shock, infarto del miocardio, politraumatizado y será sepultado en el cementerio de Temuco de **fs. 10 y fs.77 a fs. 79 (Tomo I).**

4. Certificado médico de defunción de fs. 15 (Tomo I) de Victoriano Fernández Coloma en 1973 en la ciudad de Temuco a las 15:30 horas en un recinto militar.

5. Informe pericial documental del Laboratorio de Criminalística de la policía de Investigaciones de Chile N°584/2014, de fs. 1354 a fs. 1382 (Tomo IV) que en lo

pertinente concluye: “Los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica fiscal en la orden de “libertat” N° S/N de la fiscalía militar Cautín Temuco, de fecha 28.SEP.073 dirigida a carabineros de Chile, subcomisaria Villarrica la cual dispone la libertad de Mario Fernando Cortes Bornard y Ubildo Antonio Jiménez Varas, es genuino de Oscar Alfonso Podlech Michaud.”

6. Oficio N°1095/91 del Servicio Médico Legal del 25 de septiembre de 1991 que da cuenta que se practicaron autopsias donde la causa de muerte fue por causas similares de acuerdo a protocolos, rolante de **fs. 62 a fs. 64 (Tomo I)**.

7. Informe final “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar.” De **fs. 1482 a fs. 1601 (Tomo V)**, en lo pertinente refiere que es un análisis crítico que busca, revisar el pasado reciente y la expresión de un deber genuino que nace de los preceptos de la ordenanza general que rige a partir del siglo XXI.

8. Copia autorizada del acta del pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, del 17 de septiembre de 1973 de **fs. 1079 a fs. 1080 (Tomo III)**, que en lo pertinente suscribe que: “El señor Presidente dio cuenta de haber recibido momentos antes en audiencia al abogado don Alfonso Podlech, quien le manifestó que habría sido designado Fiscal Militar ad-hoc y que con motivo del estado de sitio en que se encuentra el país, había a disposición de la Fiscalía Militar gran cantidad de detenidos, por lo que el número de actuarios con que contaba no era suficiente para interrogar con las exigencias del caso de esas personas. Que ante la situación presentada el señor Coronel Intendente... le habría encomendado que se entrevistara con el Presidente de la Corte, a fin de pedirle una cooperación para que se pusiera a disposición de la Fiscalía...”.

9. Copia del informe del Laboratorio de Criminalística N°465 del 31 de marzo de 2017, de la Policía de Investigaciones de Chile, de **fs. 1473 a fs. 1479 (Tomo V)**, que en lo pertinente aquilata que: “La evaluación de los antecedentes examinados en esta oportunidad, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el

texto, “Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal”, en la copia de autorización fechada en Temuco el 18 DIC 973, dirigida al doctor Wolfgang Reuter B. Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín- Temuco del Ejército de Chile, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud.”

10. Diligencia de inspección personal del Tribunal al Regimiento Tucapel de Temuco, de **fs. 1195 a fs. 1198 (Tomo IV)** del 27 de noviembre de 2019, que en lo pertinente sostiene que: “El tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo que el testigo Manuel Contreras Salazar indique el lugar donde estaba ubicada la compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco para el año 1973. El tribunal y los testigos se desplazan a ese punto. En ese sentido, tanto el sr. Contreras como el sr. Aburto, coinciden en señalar que aquella dependencia era la utilizada por la Compañía de Plana Mayor y Servicios para la fecha señalada. A continuación el sr. Ministro le solicita al señor Contreras manifestar su conocimiento respecto a lo acontecido en aquella dependencia a partir del 11 de septiembre de 1973, en este sentido el señor Contreras reitera lo señalado en sus declaraciones de fs. 2.309, 2638 indicando que observo en un fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, desde el exterior de esta sala, que allí se encontraban torturando a 3 de las víctimas de esta causa, cuya fotografía le fueron exhibidas por el tribunal en sus declaraciones de la causa.”

14°) Que del conjunto de elementos probatorios antes aquilatados y relacionados generales y específicos testigos directos, indirectos, documentos y peritajes antes señalados como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 1771 a fs. 1809 (Tomo V)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero: que ha existido el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte en la persona de Victoriano Fernández Coloma, previsto y sancionado en el artículo 150 inciso 1° del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo: que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **Oscar Alfonso Podlech Michaud**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

15°) EN CUANTO A LA DEFENSA. De fs. 2.125 a fs. 2.149 (Tomo VI), el abogado Alfonso Podlech Delarze, en representación de **Oscar Alfonso Podlech Michaud** en lo principal de su escrito opone excepciones de previo y especial pronunciamiento; al primer otrosí; se tenga presente, en cuanto a los documentos justificativos de los hechos a que se refieren las excepciones opuestas; en el segundo otrosí: en subsidio de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, contesta la acusación fiscal y acusación particular en los términos que señala y plantea excepciones de fondo; al tercer otrosí: tachas a testigos, fundándolas y acreditándolas; al cuarto otrosí: medios de prueba; al quinto otrosí: lista de testigos y minuta; en el sexto otrosí: en subsidio, beneficios de la ley 18.216.-

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. La defensa interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento de conformidad al artículo 433 N°6 y 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, ya que fueron analizadas y falladas a fs. 2161 a fs.2165 (Tomo VI) con fecha 13 de julio de 2023. En segundo otrosí, y en subsidio de lo precedente, anuncia en la suma, excepciones de fondo.

B. En subsidio de lo precedente, contesta acusación judicial y particular. Que su representado no ha tenido participación en relación a los hechos establecidos como objeto de una investigación penal, solo cabe absolverlo o sobreseerlo total y definitivamente, liberándolo de toda responsabilidad legal. Que su representado limitó su actuar al campo profesional de la asesoría, esto es, a la de recomendar, sugerir, ayudar a mejor obrar conforme a su experiencia y conocimientos. Por actuar de ese modo propositivo - esencialmente patriótico y propio del mandato moral que obliga a todo Abogado de conformidad al Código de

Ética del Colegio de la Orden, aún bajo circunstancias excepcionales, se ha procurado envolverlo por consideraciones meramente políticas en hechos particulares que siempre le fueron ajenos y que también repudia. Y este mal propósito de envolver a su representado en hechos delictuosos, sobre la base de relacionar indebidamente pruebas ni lógica alguna, antecedentes de contexto con casos singulares, ha servido para que durante años se sostenga en su contra una persecución personal que nada tiene que ver con la "justicia" si no, por el contrario, con la intención de causarle daño moral, físico y patrimonial a él y toda su familia.

B.1 Acusación infundada, imprecisa y errónea. Esgrime la defensa que la acusación resulta infundada por cuanto no existe prueba idónea en contra del encausado, no existe testimonio que lo haya visto o que haya escuchado emitir alguna orden al respecto. Suma, es imprecisa o errónea porque demuestra la carencia de prueba, que no existe una noción precisa para imputarle la calidad de autor a su representado. Que a diferencia de la justicia italiana, en Chile dan valor a conjeturas o sospechas y no presunciones, sometiéndose a proceso y acusa.

B.2. Asesor jurídico y/o fiscal militar ad hoc. Se refiere a dictamen del 06 de julio de 1957 del fiscal de la Corte Suprema. Que el tribunal debiera considerar el contexto, que nada era normal. Urde que debiera desestimarse la prueba porque resulta inverosímil que los testigos a la fecha de su declaración recuerden con precisión los hechos. Que no tuvo conocimiento de los hechos para dar cuenta a la autoridad. Blasona que para ser fiscal en tiempos de guerra, como el caso sublite, debía ajustarse conforme al artículo 79 del Código de Justicia Militar, lo que sucedió con el nombramiento como Fiscalía Militar del Mayor Jofré. Pero y, aún si su representado hubiere actuado como Fiscal Militar sin serlo, lo que categóricamente descarto; aquella imposible y no verificada circunstancia carece de relevancia para esta causa, pues y además de no formularsele a él reproche alguno por aquello, tal conjeturado proceder suyo no

dice relación con los hechos de este proceso, pues no hay prueba de los delitos que se le acusa y no hay nexo o relación de causalidad entre el cargo de asesor o de fiscal de hecho que se le atribuye con los hechos investigados. Se refiere al informe policial del 02 de mayo de 2014 remitido por Investigaciones al Ministro Madrid en causa rol 2.182-98 sobre secuestro de Jaime Eltit Spielmann. Destaca que Adrián González, actuario judicial nombrado en comisión de servicios, declara que Podlech prestaba asesoría legal, no participando de los interrogatorios a los detenidos y testigos, pues esa función era de Toloza y de él. Qué asimismo, en una entrevista en la Tercera a los ministros señores Solís y Carreño, señalan claramente que Podlech no había cometido ningún delito por cuanto era Asesor, más o aún el ministro Carreño aduce que se confundía el rol de Podlech a quién se le confundía como Fiscal en algunas oportunidades. Recalca que" debe aclarar que el fiscal militar a partir del 11 de Septiembre de 1973, era el Mayor de Ejército Luis Jofré. Podlech asumió esa calidad a partir de 1974. Antes su rol era el de asesor del fiscal militar." Que lo señalado por el ministro señor Carreño explica claramente que las personas que mencionan a su representado están equivocadas, pues quién habría ejercido como Fiscal era el Mayor Jofré que habría firmado Libertades y no su representado, que desconoce totalmente estos hecho.

B.3. Falta de antecedentes y presunciones fundadas en relación con la participación, que el hecho que Victoriano Fernández se haya presentado a Investigaciones y ser trasladado al Regimiento de Tucapel, donde es visto y luego no regresa, no permite imputar su responsabilidad al representado. No se configurarían los presupuestos del artículo 488 del Código de procedimiento Penal. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema.

C. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la defensa alega la atenuante del N°6 del artículo 11 del Código Penal, como muy calificada al tenor del artículo 68 bis y media prescripción del artículo 103 del mismo cuerpo

normativo. En el caso improbable de ser condenado, también solicita beneficios de la ley 18.216, esto es remisión condicional de la pena o libertad vigilada.-

ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA

16°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA: Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallaran:

A. RESUMEN EJECUTIVO DEL AUTO ACUSATORIO.

B. ESTADO DE DERECHO.

C. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR.

D. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (DELITOS DE LESA HUMANIDAD) PRONUNCIADA POR TRIBUNALES ALEMANES.

E. CONVENIOS DE GINEBRA.

A. RESUMEN EJECUTIVO DEL AUTO ACUSATORIO. Que para un adecuado análisis de la defensa específica se hace necesario hacer un resumen del auto acusatorio de fs. 1771 a fs. 1809 (Tomo V) de fecha 29 de abril de 2023, en la parte pertinente de la descripción de los hechos.

A.1 En la letra A) se da cuenta que una vez producido el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas tomaron el control de la ciudad de Temuco, quedando como Gobernador de la ciudad el Coronel Comandante Pablo Iturriaga Marchesse.

A.2 En la letra B) se detalla que el acusado Podlech Michaud el mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen, presentándose en la Fiscalía Militar que se encontraba a cargo del segundo Comandante Mayor Luis Jofré, ya que oficial debió asumir mayor función atendido su cargo. Con posterioridad se presentaron a la Fiscalía Militar civiles, que fueron llamados a través de diferentes medios o bien, traídos en carácter de detenidos.

A.3 En la letra C) se explica que ante el alto número de detenidos y personas llevadas la Fiscalía Militar tuvo que ser reforzada por funcionarios del

Poder judicial, petición que fue solicitada a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, por el acusado Podlech Michaud actuando como fiscal ad hoc, todo lo cual consta en acta que corre de fs. **1079 a 1080 (Tomo III)**.

A.4 En la letra D) se vuelve a insistir a las mayores labores que tenía el Comandante Mayor Luis Jofré, además de la falta de conocimiento, en materias procesales y penales y su poco carácter, fue delegando funciones como Fiscal Militar al abogado asesor Oscar Podlech Michaud, quien empezó a detentar el cargo como Fiscal de hecho. Tanto es así, que los familiares de las personas aprehendidas le consultaban a él por el destino de los detenidos.

A.5. En la letra E) se especifica que los civiles que debían presentarse a la Fiscalía Militar y los detenidos eran mantenidos en una dependencia ubicadas junto a la guardia o en el gimnasio grande. Una vez interrogados, ya sea por la Fiscalía Militar, detectives agregados o por los propios oficiales que se dedicaban a ello, algunas eran dejadas en libertad, otras enviadas a la casa y otros conducidos hasta la cárcel pública.

A.6 En la letra F) se espeta que la víctima Victoriano Fernández Coloma, obrero, el día 11 de diciembre de 1973 fue notificada por funcionarios policiales que debía presentarse ante la Policía de Investigaciones de Villarrica. Al día siguiente, concurrió y quedó detenido, siendo trasladado junto a otras personas al Regimiento Tucapel de Temuco, siendo visto el día en comento al interior del Regimiento Tucapel, fue el primero llamado a declarar, según se detalla en varios antecedentes. Su cónyuge María Eugenia Castillo Cares, comenzó su búsqueda en la Policía de Investigaciones de Villarrica, donde le dijeron que había sido trasladado al Regimiento Tucapel. Pero en el Regimiento Tucapel, desconocieron tener antecedentes. A través de averiguaciones con su cuñado Pedro Fernández y un abogado de la plaza supo que su marido, Victoriano Fernández había fallecido en la Fiscalía Militar y trasladado su cuerpo a la morgue

A.7 En la letra G) se describe el protocolo de autopsia de Victoriano Fernández Coloma que en lo pertinente concluye que: la causa necesaria de la

muerte de Victoriano Segundo Fernández Coloma, fue el shock determinado por traumatismos múltiples tocado abdominales y de los miembros superiores y con signos de infartación reciente miocárdica. El control histopatológico del miocardio reveló además signos de infiltración lipoídica en algunas fibras miocárdicas y muy discreta reacción inflamatoria intersticial. Las lesiones contusas son irregulares y debieron ser causadas con algún objeto dotado de moderada fuerza impulsiva. Podría corresponder a algún arma u objeto similar de uso doméstico. En la grave repercusión orgánica de la acción traumática sufrida, pudo haber influido significativamente la circunstancia del estado de plenitud gástrica que en los instantes de su muerte presentaba el occiso.”

A.8 En la letra H) el tribunal expresa que estos hechos debieron ser conducidos por el abogado Podlech Michaud, toda vez que desde el 11 de septiembre de 1973, era abogado asesor y Fiscal Militar ad hoc, entrevistando detenidos y decidiendo el destino de las personas privados de libertad. Las facultades decisorias y de orden que tenía el acusado aparecen descritas por ejemplo en Aquiles Poblete, Juan Bautista Labraña, Heriberto Mansilla. De la misma forma, aparecen los informes periciales de fs. 1354 a 1382 (Tomo IV) y de fs. 1473 a 1479 (Tomo V), los concluyen que la firma estampada en esos documentos es genuina de Oscar Podlech Michaud.

A.9. Como se aprecia no se trató de actuaciones al azar, sino que de la lectura de los hechos del auto acusatorio y de los hechos establecidos en este fallo se desprende una actividad realizada, desde el Regimiento Tucapel, así detención en Villarrica, traslado al Regimiento Tucapel, interrogatorio, detención con otras personas en dicho Regimiento, lo que demuestra un espacio y tiempo para realizar dichas actividades en dependencias del Regimiento Tucapel.

B. Estado De Derecho.

B.1. Estado Autoritario: “Un Estado autoritario, es aquel donde el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que

tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella.” (Roberto Ruiz Díaz Labrano: “El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia”, p.3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc.) (...) “La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario”. (Oscar Vilhena Vieira (2007): “La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho”. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). (...) “En esa línea el concepto de **Estado de Derecho es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno”. (Dante Jaime Haro Reyes: “Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia”. www.juridicas.unam.mx. p. 123). (...) “Puede sostenerse entonces, que su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política”. (Pablo Marshall Barberán (2010): “El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política”. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

B.2. Origen: “El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un

orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos.” (**Luis Villar Borda** (2007): “Estado de Derecho y Estado Social de Derecho”. Revista de Derecho del Estado N° 20, **p. 74**). (...) “En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento”. (**Haro, p. 118**).

B.3. Fundamento: “El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder”. (**Marshall, pp. 187-188**).

B.4. Concepto: “El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre.” (**Haro, p. 124**). (...) “Del mismo modo, como expresa **Guastini** en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está

limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (**Haro, p.123**). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos”. (**Haro, p. 126**).

B.5.Elementos: Marshall siguiendo **Böckenförde**, expresa que las características originales del Estado de Derecho son las siguientes: “**a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones” (**Marshall, p.191**). En esa línea **Benda** considera que el Estado de Derecho involucra: “**a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica.” (**Marshall, p.191**). Sobre lo anterior **Villar Borda (pp. 74-81)** realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá **Böckenförde**. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de muchas fuentes y distintas épocas, así: “**a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el

derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional”.

B.6 Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** “La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática”. (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): “La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano”. Ediciones LOM. **pp. 114- 130**). Además de la lectura de la **Constitución de 1925** esta consagra, además, el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo. Así es

verificable en sus **artículos 1 al 4** que consagra el gobierno republicano y democrático **(1)** la soberanía reside en la nación **(2)**. Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes **(4)**. Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la **Constitución de 1980** (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su **artículo 4** que Chile es una República democrática. En su **artículo 5** que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall (pp.199-202)** expresa que (...) “los **artículos 5 a 7 de la Carta Fundamental** se desprenden algunos **principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política**: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. **(i)** El enunciado del **artículo 5 inciso 2º** como consagración del principio de distribución. La afirmación de que el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (**art. 6 inc. 1º**), legalidad en sentido amplio (**arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º**), garantía del orden institucional (**art. 6 inc. 1º**), fuerza normativa de la Constitución (**art. 6 inc. 2º**); responsabilidad (**art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º**), distribución de competencias- separación de poderes- (**art. 7 inc. 1º y 2º**), legalidad en sentido estricto (**art. 7º inc. 1º**). Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de

continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar.” (Marshall, pp. 191-192). (...) “En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera uno de los pilares principales de un régimen democrático. Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso”. (Vilhena, p.30). Luego se dan todos los elementos del **Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad** para formularle al acusado el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad, hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el **11 de septiembre de 1973**, tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un **quiebre constitucional** significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces, la víctima fue llevada a un lugar de detención improvisado, estando en una alta indefensión. El delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte (como indica el mérito del proceso) de Victoriano Fernández Coloma, fue al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de la defensa.

C. Obligación de investigar.

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

C.1. “Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en Derechos Humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al **artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución** que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales.” (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, **pp. 27 - 53**). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

C.2. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en

los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C.3. “Que esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”.(García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

C.4. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**- ya citada- en especial los **artículos 1.1 y 2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

C.5. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los Derechos Humanos (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

C.6. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...) “el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”. Por su lado en el **177** acota que (...) “la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación,

aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del (...) “artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos”.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que (...) “esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su **párrafo 42** anexa que (...) “La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria” (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) “el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder

a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado”.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003.

En el **párrafo 115** explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso”.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana”.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención”.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) “está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus **párrafos 137, 233 y 299**. Afirma en el **137** (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso”. **233** (...) “Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales”; **299** (...)“Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas,

investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán”.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo 143 afianza que (...) “en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que 117 (...) “además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber

jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”. **129** (...) “una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables”. **130** (...) “por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido”.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) “los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”. Párrafo **114** (...) “por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden

sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares”.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”.**156** (...) “el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de

derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos”. **171** (...) “este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.”

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007.

Párrafo 106 indica que (...) “una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio”.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. **Párrafo 131** manifiesta que (...) “el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) “que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”. **112** (...) “la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional”. **115** (...) “para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una

denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas”.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo 142 narra que (...) “la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos”.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) “en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar

de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo 283 añade “que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su **párrafo 298** apunta que (...) “la obligación general de garantizar los Derechos Humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al

Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condiciona condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) “este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y

científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación”.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) “en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación”.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) “la Corte considera pertinente

reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales”.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011.

Párrafo 194 asevera que (...) “la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.

Sentencia caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador del 23 de mayo de 2023. Párrafo 81 asevera que, (...) “de forma reiterada en su jurisprudencia, la Corte ha establecido que la desaparición forzada es una violación compleja y múltiple, que pone a la víctima en un estado de completa indefensión y atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. En particular, esta conducta genera la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, respectivamente Asimismo, la Corte ha señalado que, si un Estado práctica, tolera o permite un acto de desaparición forzada, incumple las obligaciones previstas en el artículo I a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe tales conductas”. Continúa, el **párrafo 83** musita que, asimismo, (...) “la Corte ha afirmado que la desaparición forzada es “un acto continuado o permanente, que permanece mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y mientras no se determine con certeza la identidad de los mismos”. Este acto se configura cuando se presentan en forma concurrente los siguientes elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o de personas que actúen con

autorización, apoyo o aquiescencia de estos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”. Que el **párrafo 106** asienta que, “Los Estados tienen el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, en su caso de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En particular, cuando se trata de la investigación de violaciones en perjuicio de personas que se encontraban bajo custodia del Estado, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, es decir, con la debida diligencia, sustanciada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Tales características del deber de investigar son aplicables, con mayor razón, en casos de posible desaparición forzada de una persona. Por último, el **párrafo 107** refiere, (...)”frente a esta violación en particular, además del deber de investigar y sancionar a los responsables, la Corte ha subrayado la existencia de una obligación autónoma de buscar y localizar a las personas desaparecidas, derivada de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, del artículo X de la CIDFP y de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Este deber también ha sido desarrollado por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos últimos indican que las autoridades encargadas deben iniciar la búsqueda de oficio, incluso si no se ha presentado una denuncia o una solicitud formal y agregan que “[l]a búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente”, toda vez que “[e]l proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal.”

C.7. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un **estándar** en relación a **la obligación de investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en **Eduardo Ferrer Mac-Gregor**. (“Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal”. Revista IIDH v. 59 **pp.45-48**). El autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

C.7.1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

C.7.2. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

C.7.3. El **deber de investigar** es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que

dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

C.7.4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

C.7.5. La Corte IDH ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

C.7.6. Para cumplir la **obligación de investigar** y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

C.7.7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

C.7.8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la **impunidad**, que la Corte IDH ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

C.7.9. Esta **obligación de debida diligencia**, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

C.7.10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

C.7.11. La Corte IDH reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

C.7.12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos,

que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

C.7.13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

C.7.14. La Corte IDH ha establecido ciertos **Principios Rectores**, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación efectiva de Ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas, para las **investigaciones** cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

C.8. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia** y que la defensa nada expresa. Así del estudio de sus alegaciones, no hay un análisis adecuado de todos los testigos, documentos y peritajes, sino que se refieren a eventos

parciales de su propio interés. Ocurre que la defensa debe situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

D. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por los Tribunales Alemanes.

D.1. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisaría, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos, casas, subterráneos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) **y Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad, respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis de las reflexiones en lo pertinente de los artículos de **Gerhard Werle** y **Boris Burghardt** (Universidad Humboldt- Berlín, sobre el caso Demjanjuk); y de **Claus Roxin** sobre el caso Oskar Gröning. Estos casos además han sido llevados a formato audiovisual en diferentes documentales, tales como: “El nazi Iván el terrible” Netflix y “El contador de Auschwitz” de la plataforma Prime Video.

D.2. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el **caso Demjanjuk** en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). (**Gerhard Werle y Boris Burghardt** (Universidad Humboldt- Berlín. “Revista Penal México”. N°9

septiembre 2015- febrero 2016, **pp.181-193**). Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como cómplice de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos

deportados. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

D.3. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente

considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos—tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y —siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos— en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

D.4. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue

creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht, incluso para Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo”. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

D.5. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, (...) todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias.

Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que (...)se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado (...) ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

D.6. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo. La declaración principal podía resumirse diciendo que allí no había actividades neutrales. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración

por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

D.7. Que el segundo artículo versa sobre la sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz. Sentencia del BGH y comentario de **Claus Roxin** ("Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano". CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado **Oskar Gröning** en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

D.8. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en calidad de cómplice de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las

SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-WirtschaftsVerwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e

indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

D.9. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del artículo 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro - como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

D.10. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que el acusado (Gröning) tuvo participación en esta facilitación de los hechos. Era parte del aparato de

personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

D.11. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

D.12. Que por ello **Claus Roxin** considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

D.13. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20 de febrero de 1969**, a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió...”. En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

D.14. Que precisa **Roxin** que, no existen causales de exculpación. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]”. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o

por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

D.15. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

D.15.1. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

D.15.2. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789; Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los **artículos N°2 y N°16** de la citada declaración del Hombre y del Ciudadano. “Artículo 2: La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. “Artículo 16: Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

D.15.3. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el Congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los Derechos Fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia, el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor. En segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las personas se debía tener una necesaria proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

D.15.4. En este caso entonces, la persona detenida y llevada a su lugar de detención (como es el Regimiento Tucapel) estaba en una alta indefensión, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de la declaración indagatoria antes detallada.

E. Convenios de Ginebra.

Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra, la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa **rol 2182-98** del ingreso de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, **caso Luis Almonacid Dúmenez** de fecha 29 de octubre de 2013, en su **considerando dieciocho, párrafo 6**, señala que: (...) "los Convenios de Ginebra consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter

internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *Ius Cogens*". En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido". Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (**Rol N°2664-04**), en cuanto expresa en su **considerando décimo séptimo**: (...) "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de *Ius Cogens* o Principios Generales de Derecho Internacional".

17°) EN CUANTO A LA DEFENSA: Que haciéndonos cargo de la **defensa de fs. 2125 a fs. 2149 (Tomo VI)** del abogado Alfonso Podlech Delarze, en representación del acusado **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**. El Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de la declaración indagatoria del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba, en especial lo que antes se detalló, y además lo ponderado con precisión en el título de consideraciones generales para la defensa. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. La defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que fueron falladas a fs. 2151 a fs. 2166 (Tomo VI).

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos. La defensa realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, respecto a lo que cual se reflexionó en los considerandos precedentes. No objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo. En la suma de su presentación en el segundo otrosí, plantea que interpondrá excepciones de fondo. Analizado el segundo otrosí, en todos sus extremos y en su petición concreta, solo tiene por contestada acusación fiscal y acusaciones de los querellantes, pidiendo sin más que se dicte sentencia absolutoria. En consecuencia, no habiendo interpuesto las excepciones de fondo que anuncio y además no habiendo desarrollado ninguna excepción de fondo, el Tribunal nada tiene que analizar ni ponderar y se estará a lo antes razonado.

D. Contestación de la acusación fiscal y acusaciones particulares. El tribunal estará a lo razonado precedentemente, puntualizando lo siguiente:

D.1. En primer lugar, para derribar el auto acusatorio, la ponderación y valoración de las pruebas de este proceso la defensa debe hacer un estudio pormenorizado relacionando las pruebas en conformidad al mérito del proceso y no una puesta parcial y particular como lo hace esta defensa. Además de la

lectura del escrito del abogado defensor lo que se aprecia son reproducciones del auto acusatorio, declaraciones de testigos, de jurisprudencia parcial y no sostenida en el tiempo, y de normas jurídicas.

D.2. Del estudio de la contestación del abogado Alfonso Eduardo Podlech Delarze, podemos indicar que realiza una serie de afirmaciones generales que le restan consistencia, coherencia y profundidad a su escrito. Afirmaciones generales además que no tienen un estudio analítico, en relación con toda la prueba ponderada por el Tribunal y además con las consideraciones generales antes indicadas y los estándares normativos e interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en efecto: a) “A la persona procesada injustificadamente y luego acusada del mismo modo, nunca le correspondió participación alguna.” (fs. 2.134 y fs. 2135); b) “No haberle correspondido al distinguido Abogado Oscar Ernesto Alfonso Podlech Michaud, directa ni indirectamente, ninguna clase de participación en los hechos” (fs. 2135); c) “Nunca debió siquiera ser sometido a procesamiento” (fs. 2.135); d) “El abogado Podlech no solo fue ajeno a tales hechos, sino con actitud y conducta propia de persona de derecho, hizo cuanto pudo” (fs. 2135); e) “Y este mal propósito de envolver a mi representado en hechos delictuosos, sobre la base de relacionar indebidamente sin prueba ni lógica alguna” (fs. 2136); f) “Empero ni aun aquello bastó como expresión de la persecución política que se ha sometido al señor Podlech, sin descanso, porque, de regreso a Chile nuevas acciones- cuyos propósitos y antecedentes son los mismos del primer juicio en Italia- se dejaron caer sobre él. Con unos mismos argumentos falsos, unas mismas clases de prueba y supuestas presunciones. ” (fs. 2137); g) “La acusación resulta, por una parte, ser infunda, y además imprecisa o errónea” (fs. 2138); h) “Resulta ser infundada porque no existe prueba idónea en contra de mi representación” (fs. 2138); i) “La única razón por la que se acusa a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud de este hecho delictivo, con el que no tiene ninguna relación, respondería a que los verdaderos responsables están todos muertos.” (fs. 2138); j) “Las acusaciones de autos infructuosamente

conjeturan que el rol desempeñado por don Alfonso Podlech excedió su calidad de asesor, pues en sus actuaciones actuaba como si fuese el fiscal militar, lo que no es efectivo en los hechos ni el derecho” (fs. 2141); k) “Tal conjeturado proceder suyo no dice relación con los hechos de este proceso, pues no hay prueba de los que delitos que se le acusa y no hay nexo o relación de causalidad entre el cargo de asesor o fiscal de hecho que se le atribuye con los hechos investigados” (fs. 2143); l) “No existe ningún antecedente que permita establecer algún grado de participación de Podlech” (fs.2143).

D.3. Solicitud de absolución. En conformidad al mérito del proceso y de las pruebas antes ponderadas y relacionadas respecto a la solicitud de absolución, el Tribunal razona de la siguiente manera:

D.3.1. Se debe tener presente a diferencia de lo que expone la defensa, los estándares normativos e interpretativos de la obligación de investigar que se han señalado en las consideraciones generales y que en síntesis son: a) Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida; b) si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho; c) el deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un

deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos; d) cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida; e) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención; f) Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: 1) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; 2) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y 3) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia; g) La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales; h) El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”; i) esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias

para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos; j) El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo; k) La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación; l) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación; m) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en

su caso sanción de los responsables; n) la Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben n.1) Identificar a la víctima; n.2) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; n.3) Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; n.4) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y n.5) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. Lo que implica que en estas investigaciones y fallos se deba hacer, no solo una investigación exhaustiva, sino con una ponderación integral relacionando todos los medios de prueba en conformidad al tipo de delitos, delitos de lesa humanidad y al contexto de la época que es lo que se ha realizado en esta investigación, en el auto acusatorio y en este fallo.

D.3.2 Puntualizar a la defensa, las explicaciones y comentarios sobre la jurisprudencia alemana sobre delitos de lesa humanidad de los autores xxxxx. En efecto, en la sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Go-merski y Johann Klier se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”.

Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias.

D.3.3. Un tema importante en las investigaciones de violación a los derechos humanos es el compromiso que tienen los participantes en estos hechos. No hay que olvidar que se estaba ante un quiebre institucional, luego hubo un régimen militar de 17 años y los hechos además suceden en un recinto de poder político militar, como es el regimiento Tucapel. Los múltiples testimonios dan cuenta de la cantidad de detenidos que pasaron por el regimiento Tucapel, que fueron interrogados, apremiados y muchos de ellos ejecutados. Y como quedó

demostrado en el análisis de la declaración indagatoria del acusado Podlech Michaud, analizadas precedentemente, él decidía el destino de muchas personas detenidas.-

D.3.4. En cuanto a la explicación previa al contestar la acusación, sobre esta materia la defensa realiza reflexiones generales, en cuanto a la no participación en los hechos del acusado Podlech Michaud. Reiterando que este hizo cuanto pudo dentro de lo poco que podía hacer, para que el desborde del Estado de Derecho tuviere las menores consecuencias negativas. Insistiendo además que el acusado no era Fiscal Militar a la época de los hechos. En este punto como se trata de reflexiones generales el Tribunal, estará a lo ya aquilatado precedentemente y a lo que se expondrá a continuación, que es diferente a las reflexiones que hace la defensa sobre la participación del acusado Podlech Michaud. En este punto que relata la defensa, no es así puesto que si un letrado realmente, es tributario de los principios y elementos del Estado de Derecho que se han caracterizado precedentemente, no colabora ni se relaciona con aquellos que han depuesto el poder político elegido democráticamente. Más aún, el delito determinado en esta sentencia de Victoriano Fernández Coloma ocurre en diciembre de 1973, si se analizan (que es de dominio público y puede ser consultado en internet) las sentencias que se han dictado en relación al Regimiento Tucapel sobre hechos ocurridos antes de diciembre de 1973, dan cuenta que muchos civiles fueron apremiados y ejecutados, y que obviamente pasaron por este Regimiento, Fiscalía Militar y estuvieron en sus dependencias. A modo de ejemplo, causas roles 113.089 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 113.950 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 113.961 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, entre otras.

D.4 Acusación infunda, imprecisa o errónea. Lo primero que cabe decir sobre esta materia (ejercicio de argumentación que no hace la defensa), es que la

redacción, relación de la prueba, los hechos y la tipificación que se hace en el auto acusatorio de fs. 1771 a fs. 1809 (Tomo V) de fecha 29 de abril de 2023, no es infundada, imprecisa ni errónea. Como primer argumento, hacer notar que en la práctica y dictación de resoluciones tanto, autos de procesamiento o autos acusatorios reúnen todos los requisitos que exige el Código de Procedimiento Penal y tienen un estándar similar o más alto, respecto a su fundamentación y detalle del que hacían los Tribunales cuando conocían hechos por el Código de Procedimiento Penal. Como segunda idea, en las consideraciones generales para el análisis de la defensa se hace un resumen del auto acusatorio, de las letras A) hasta la H), de donde se observa una construcción, desde hechos generales ha hechos concretos y particulares. Se describe lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973, que autoridades militares tomaron el mando en la ciudad de Temuco, labor del Abogado Asesor Oscar Podlech, las personas que debían presentarse en el Regimiento Tucapel, cómo fue llamado a presentarse Victoriano Fernández Coloma, relatos de diferentes testigos que vieron a Victoriano Fernández Coloma en el Regimiento Tucapel, las personas que conversaron con el encausado Podlech Michaud, integrantes del Ejército o detectives que trabajaron con el abogado Podlech Michaud tomando declaraciones, informes periciales que dan cuenta que el acusado Podlech Michaud firmaba como fiscal, sea otorgando la libertad o ya pidiendo diferentes diligencias a peritos. Como se desprende de su lectura, no tiene nada de infundado, impreciso ni erróneo, termina el auto acusatorio con la calificación de los hechos y la imputación al acusado.

D.4.1. Toda la referencia a la jurisdicción italiana es improcedente porque se trata de otro país, otro Tribunal, otra jurisdicción, otras disposiciones legales para juzgar los hechos, por lo que su mención en relación a los hechos investigados, no resulta atendible.

D.4.2. Siguiendo la teoría de la defensa desde un punto de vista, estrictamente de lógica y argumentativo, no resulta atendible atendido la prueba

ponderada en este fallo, que el imputado Podlech Michaud, sea presentado como un simple abogado asesor, simple funcionario que ayudaba en la Fiscalía Militar. Lo anterior lo desmienten todos los medios probatorios que se han valorado en este fallo.

D.5 Asesor jurídico y/o Fiscal Militar Ad Hoc. En cuanto a esta materia podemos razonar lo siguiente:

D.5.1. La calidad de fiscal ad hoc es real, lo que se demuestra el acta del pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, del 17 de septiembre de 1973 de **fs. 1079 a fs. 1080 (Tomo III)**, donde el encausado concurrió a la Corte de Apelaciones de Temuco, para solicitar actuarios, esto es indesmentible. Siguiendo con esa misma argumentación, entre otras pruebas están los informes periciales de **fs. 1473 a fs. 1479 (Tomo V)** y **fs. 1354 a fs.1382 (Tomo IV)** que concluyen que la firma es genuina de Oscar Podlech Michaud. A lo anterior hay que agregarle, por ejemplo la declaración de José Heriberto Mansilla quien declara fs. 1462 a fs. 1464 (Tomo V), fs. 1465 (Tomo V), fs. 1466 (Tomo V) y de fs. 1467(Tomo V).Del mismo modo, expresa la defensa que hay que considerar el contexto de la época y que han pasado 50 años. Pues bien, sobre esta materia la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos con su jurisprudencia ha manifestado que los Estados deben investigar estos hechos, establecer la verdad, determinar a los presuntos responsables y aplicar las penas, establece una serie de estándares, ya señalados precedentemente. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben realizar lo enumerado precedentemente. Además sobre esta materia, indicar a la defensa que el recordar un hecho de 50 años no resulta complejo, principalmente cuando ha sido traumático para la familia, por ejemplo un accidente, una enfermedad y en este caso, el delito apremios ilegítimos con resultado de muerte de Victoriano Fernández Coloma. Aquí no se trata de dar un salto en el vacío, es decir los hechos ocurrieron en diciembre de 1973 y luego la familia y los testigos olvidan los hechos y los vuelve

a rememorar 50 años después. Lo cierto que esto no es así, porque este delito se immortaliza permanentemente en las reuniones sociales, en las agrupaciones de Derechos Humanos, de la misma forma en los informes de la Comisión Retting, entre otros. En cuanto a calidad del Teniente de Reserva, es una referencia a la historia del acusado que no tiene ninguna relevancia principal para efectos de determinar su participación.

D.5.2. En cuanto a que no denunció ni informó a la autoridad militar, el Tribunal reitera los argumentos dados con anterioridad respecto a las múltiples pruebas ya aquilatadas en este fallo, toda vez que de la ponderación de ellas no resulta atendible que la defensa presente al acusado Podlech Michaud, como un simple abogado que asesoró a la Fiscalía Militar y no tuvo conocimiento de este hecho y muchos otros durante el régimen militar. Él no fue un abogado pasivo, sino que fue protagonista respecto a las personas que se presentaban al Regimiento Tucapel o bien llevadas detenidas, como ha quedado demostrado en esta causa.

D.5.3. En cuanto a las declaraciones de algunos funcionarios civiles que trabajaban en la Fiscalía Militar como Adrián González no resulta coherente ni lógico con las múltiples pruebas que existen en este fallo y que han sido ponderados. En cuanto al carácter de Luis Jofré Soto, sobre esta materia no es algo azaroso ni subjetivo, son varios soldados, entre ellos Raúl Binaldo Schonherr Frías, José Raúl Inzunza Reyes, José Heriberto Mansilla Gática, que dan cuenta del poco carácter de Jofré Soto. A mayor abundamiento, y atendido a que la defensa se refiere a la causa rol 2182-1998 episodio "Eltit Spielman", señalar que en cuanto a la sentencia de segunda instancia, el acusado fue condenado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago como coautor del delito de secuestro calificado en la persona de Jaime Eltit Spielman, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, expresando, entre otras cosas, en su considerando duodécimo: "Que, la indicada petición de absolución será desestimada, atento que

está suficientemente acreditada la participación del sentenciado Podlech Michaud, en calidad de autor, en el delito de secuestro calificado de Jaime Eltit Spielmann, tal como se expresó en el fallo recurrido, ya que se reunieron suficientes antecedentes probatorios que dan cuenta que el sentenciado fue designado el 11 de septiembre de 1973, para hacer las veces de asesor jurídico de la Fiscalía Militar en Tiempo de Guerra, cuestión refrendada por el mismo imputado y constatada por otros medios probatorios y, de acuerdo a las probanzas agregadas al proceso, se tuvo por demostrado, que éste en los hechos, asumió el cargo de asesor jurídico, desempeñando de facto funciones propias de la investidura de Fiscal Militar, tal como se expresa en el motivo 37° del fallo en alzada y, que se confirma con los dichos de Víctor Maturana Burgos de fojas 32, 82, 119, 470, 827, y careo con el sentenciado de foja 44; de Alfredo García Díaz de fojas 39 y 1022; de Herman Carrasco Paul de fojas 128 y 1152; de Raúl Schonherr Frías de fojas 209 y 867; de Orlando Moreno Vásquez de fojas 256 y 883; de Gonzalo Arias González de foja 301, Óscar Seguel Jofré de foja 825; de Andrés Pacheco Cárdenas de foja 1070". En tanto tras revisión del recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema rol N° 154.811-20, en sentencia del 06 de marzo de 2023, se rechazó el recurso de casación en el fondo esgrimido por el encausado y se tuvo por desistido del recurso de casación en la forma. En cuanto a que el acusado fue designado fiscal militar el 14 de febrero de 1974, no tiene relevancia porque los hechos que se investigan sucedieron en diciembre de 1973 y él estaba actuando en su calidad de Fiscal Ad hoc o de hecho, como se ha demostrado en esta causa.-

D.5.4. En lo posterior de la contestación de la acusación, insiste la defensa del acusado Podlech Michaud que éste no ha tenido ningún grado de participación, que no fue fiscal de hecho, más aun otros Ministros investigadores han manifestado que no cometió ningún delito. Sobre lo anterior, acotar a la defensa que realizando el ejercicio intelectual de relación de las pruebas, ponderación y las múltiples conexiones entre ellas, permiten acreditar no solo el

hecho del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte en contra de Victoriano Fernández Coloma, sino la participación del acusado Podlech Michaud. Para mayor ilustración, si la defensa ha hecho las mismas alegaciones que en esta contestación y estimó que no hay pruebas suficientes o no hay pruebas para determinar el acaecimiento del delito y la participación de su acusado, tenía a su disposición todos los recursos que le otorga el ordenamiento jurídico chileno y sucede presentó apelación a fs. 1677 (Tomo VII) en contra del auto de procesamiento de fs. 1602 a fs. 1640 (Tomo V) del 9 de diciembre de 2022, resolución confirmada a fs. 1721 (Tomo V) por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Es decir, desde que se dictó el auto de procesamiento de fs. 1602 a 1640 (Tomo V) del 9 de diciembre de 2022 hasta el cierre de sumario a fs. 1769 (Tomo V) del 30 de marzo de 2023 tuvo tiempo para haber refutado o rebatido antes los Tribunales superiores dicha resolución.

D.5.5. En cuanto a la participación, el Tribunal estará a lo antes razonado en este fallo y en esta materia nuevamente cabe recordar lo que se dijo precedentemente en relación a los estándares normativos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre cómo se deben investigar estas causas, estándares normativos que este Tribunal ha cumplido en este proceso. En esa línea, toda la ponderación de la prueba, las actividades que se describen en el auto acusatorio de fs. 1771 a fs. 1809 (Tomo V), permiten a este Ministro como se ha aquilatado a través de presunciones judiciales, como lo prescribe el artículo 488 Código de Procedimiento Penal, determinar la existencia del delito investigado y la participación del acusado antes citado. Respecto a la participación en todo caso, la defensa hace afirmaciones generales y abstractas, entre que los hechos no están probados, que carecen de idoneidad, nada de eso aparece en un análisis analítico de la prueba desarrollado. Afirmaciones que se han detallado precedentemente.

D.6. En cuanto a la alegación efectuada por la defensa, respecto a la precisión en la fecha, esto no es relevante. En todo caso, esto ya fue aclarado en los considerados precedentes. Ahora bien, lo importante es que la acusación final dice expresamente el mes de diciembre, y ello es así porque la leyenda, las declaraciones de testigos y fecha de autopsia de la víctima, permiten verificar la fecha del deceso de la víctima, sin perjuicio de la prueba reunida a lo largo del proceso. En efecto los testigos que fueron detenidos junto a la víctima, según deponen de fs. 69 a fs. 70 (Tomo I), fs. 90 (Tomo I), fs. 204 (Tomo I), fs. 250 a fs. 251 (Tomo I), fs. 333 a fs. 334 (Tomo I) y de fs. 650 (Tomo II); y arguyen que fue en diciembre, así también la autopsia de Victoriano Fernández Coloma, de fecha 15 de diciembre de 1973, entre otros antecedentes. En consecuencia solo se ha incurrido en un error de transcripción, verificable con la prueba rendida en el proceso de autos, en consecuencia el Tribunal se ha hecho cargo de la contestación del abogado Alfonso Podlech Delarze.

E. Solicitud de sobreseimiento total y definitivo. La defensa solicita luego de exponer los argumentos el sobreseimiento total y definitivo de su representado. Sobre lo anterior, no es posible dar lugar a esta petición, toda vez que, como se ha razonado precedentemente en un análisis integral de toda la prueba acompañada al proceso y de las declaraciones indagatorias del acusado, el resultado apunta a que existió el delito de apremios ilegítimos en contra de Victoriano Fernández Coloma y en ese delito le ha correspondido participación en calidad de autor al acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud.

F. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. El Tribunal lo razonará en los considerando posteriores.

G. Prueba del plenario. Que a fs. 2201 a fs. 2202 (Tomo VI) la defensa presentó al testigo Archivaldo Humberto Loyola López, quien debidamente juramentado expone que conoce al señor Podlech desde el año 72 cuando llegó a Temuco, como relator de la Corte de Apelaciones de Temuco. Por esta razón tiene

absoluto conocimiento de la petición efectuada por Oscar Podlech del 17 de septiembre de 1973 a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Atina que no conoció al Mayor Luis Jofré Soto, quién era Fiscal Militar de Cautín en 1973. Destaca que el encausado trabajaba en la Fiscalía, contratado por el Ejército y él personalmente hizo la presentación a la Corte. Urde que en cualquier momento ocurrido el 11, el señor Podlech participaba como Fiscal y todos lo conocieron así. No tuvo conocimiento de los consejos de guerra efectuados a partir de octubre de 1973. No tuvo conocimiento de ningún reclamo, recurso o queja por las actuaciones como asesor jurídico de la fiscalía Militar de Cautín, del Abogado Alfonso Podlech, salvo lo relacionado con Podlech a la Corte fue la presentación que hizo, personalmente llevó a la Corte la solicitud de personal para interrogar a los numerosos detenidos. Especula que no recuerda la calidad en que el señor Podlech hizo la presentación a la Corte, pero entiende que de fiscal.

G.1 Del análisis de este testimonio, no resulta nada nuevo que permita destruir el auto acusatorio, los hechos determinados y la calificación tanto del delito como la participación del acusado Podlech Michaud en los hechos establecidos en este fallo. En todo caso, lo que confirma dicha declaración, es que efectivamente el encausado fue en calidad de Fiscal Ad Hoc a la Corte de Apelaciones de Temuco. Desde una mirada argumentativa y de lógica, tampoco es atendible que un testigo de esta naturaleza pueda destruir toda la ponderación y relación de la prueba que se ha dicho en esta.

G.2 Para mayor ilustración en relación a la prueba y su ponderación cabe mencionar lo siguiente, en términos de doctrina y autores contemporáneos es conveniente citar lo siguiente es necesario indicar que el principio central de la tradición racionalista es el objetivo primario del derecho procesal que consiste en lograr la rectitud de la decisión, esto es, la aplicación correcta del derecho a los hechos probados como verdaderos y este principio tienen tres corolarios: el primero es que el principio asume que la realización de ese objetivo involucra la búsqueda de la verdad a través de medios racionales. El segundo, la tradición

racionalista refleja un reconocimiento persistente de que la búsqueda de la verdad tiene una elevada, aunque no insuperable, prioridad como un medio para asegurar la justicia en el derecho. Tercero, el modelo de adjudicación es instrumentalista, en tanto que la búsqueda de la verdad a través de la razón es solo un medio para lograr el fin de la justicia, propiamente tal considerada como la implementación del derecho sustantivo. Así, tenemos que las teorías racionalistas de la prueba y los medios de prueba tienen algunos presupuestos comunes, por ejemplo 1) el conocimiento sobre ciertos eventos pasados, es posible. 2) Establecer la verdad sobre ciertos eventos pasados, en un caso, hechos controvertidos, es una condición necesaria para alcanzar la justicia en la adjudicación. 3) A las nociones de prueba y los medios de prueba en la adjudicación tienen relación con los métodos racionales para determinar las cuestiones de hecho, manteniendo las distinciones entre las cosas que son cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Cuestiones de hecho y cuestiones de valor, cuestiones de hecho y cuestiones de opinión. 4) El establecimiento de los hechos controvertidos en la adjudicación es normalmente un asunto de probabilidades que no alcanza la certeza absoluta. 5) Los juicios acerca de las probabilidades de las alegaciones sobre eventos pasados particulares, pueden y deben ser alcanzados razonando desde la prueba relevante presentada al juez. El modo característico de razonamiento apropiado para razonar sobre las probabilidades es la inducción. 6) Los juicios sobre las probabilidades tienen que basarse en términos generales en el stock de conocimiento disponible sobre el curso normal de los eventos, esto es en gran medida un asunto de sentido común, complementado con conocimiento científico experto especializado cuando esté disponible. 7) la búsqueda de la verdad (busca maximizar la exactitud en la determinación de los hechos) tiene una elevada, aunque no necesariamente insuperable prioridad en relación con otros valores, seguridad del Estado, la protección de las relaciones de familia o evitar los métodos coactivos de interrogación. 8) El rol primario de la psicología forense aplicada y de la esencia forense es entregar una guía sobre la fiabilidad de

diferentes tipos de prueba y desarrollar métodos y mecanismos para aumentar tal fiabilidad. (Terence Anderson, David Schum, William Twining (2015): Análisis de la Prueba. Madrid. Marcial Pons. pp. 116-118). Este mismo ejercicio probatorio y tradición racionalista ha hecho este tribunal en las 90 sentencias que ha dictado sobre violación a los derechos humanos en el régimen militar y en esta causa. Además sobre la construcción de las sentencias basta que la defensa lea los últimos 100 años de jurisprudencia en materia procesal penal, (puede leer la obra sobre la materia de Alfredo Etcheberry) construida a partir del Código de Procedimiento Penal y las coteje con las sentencias dictadas por este tribunal y por otros ministros visitadores y en un fácil ejercicio podrá darse cuenta que el estándar de fundamentación es el adecuado y plausible. De todas maneras más allá o superior a lo que el pretende desacreditar la defensa.

G.3 Que finalmente aplicando el aludido rigor científico, si hacemos un ejercicio de supresión mental hipotética, es decir, leemos todo el mérito del proceso y expresamos que en realidad no hay ningún elemento probatorio para determinar los hechos, calificar el tipo penal y la participación del acusado. Lo cierto es que con la jurisprudencia citada, los autores citados, los razonamientos hechos, en un estricto rigor científico, no resulta atendible lo que pretende la defensa, ni menos que no existan elementos probatorios y que no se pueda llegar a la convicción legal sobre la condena del acusado. Basta leer las más de 500 sentencias, en materia de violación de Derechos humanos, que ha conocido la Excma. Corte Suprema para verificar que el estándar probatorio aplicado en esta causa, es igual o superior a las otras sentencias condenatorias. En todo caso si la defensa quiere volver a otro estadio procesal en el tiempo, como es la justicia militar y los sobreseimientos que se practicaron (sobre esta materia nada dice), ya la Excma. Corte Suprema ha hecho un reproche sobre ello y en el mismo fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile, ya citado, en el párrafo 131 se indica: “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a

la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que “cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. En consecuencia no cabe más que rechazar todas las argumentaciones dadas por la defensa en esta materia, sin perjuicio de lo que se resuelva con posterioridad sobre la calificación de los hechos.

H. Calificación final: Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **AUTOR** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte de Victoriano Fernández Coloma, en su carácter de lesa humanidad.-

G. ACUSACIÓN PARTICULAR.

18°) La abogada Carolina Contreras Rivera en representación de la **Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos** de fs. **1.881 a fs. 1890 (Tomo VI)**, formula acusación particular en contra de Oscar Alfonso Podlech Michaud **como** autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, en carácter de lesa humanidad, condenándolo en definitiva e imponiendo las penas de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más las sanciones accesorias legales, con costas, solicitando se reconozca la circunstancia agravante contemplada en el N°8 del artículo 12 del Código Penal. Además fundamenta que no es posible dar lugar a la atenuante contemplada en el N°6 del artículo 11 del mismo cuerpo normativo.

19°) A fs. **1827 a fs. 1850 (Tomo VI)**, el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, por la parte querellante y demandante civil, en lo principal de su presentación

formula acusación particular en contra de Alfonso Podlech Michaud como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte en contra de Victoriano Fernández Coloma, condenándolo en definitiva e imponiendo la pena que señala, más las sanciones accesorias legales con costas.

Fundando su presentación en los siguientes antecedentes, los cuales para un mejor entendimiento se estructuran de la siguiente forma:

A. Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular. Comparte en su integridad y reproduce los hechos que se tienen por establecidos en la acusación de oficio, la calificación jurídica y la participación de los acusados.

B. Calificación jurídica del ilícito. Esta parte considera que con lo razonado por el Tribunal, se desprenden cargos fundados para estimar que a **Oscar Podlech Michaud** le ha cabido participación en calidad de **AUTOR**, en virtud del artículo 15 N°1 del Código Penal, del delito de **apremios ilegítimos con resultado de muerte en contra de Victoriano Fernández Coloma**, en su carácter de lesa humanidad.

C. Circunstancias que deben influir en la aplicación de las penas: solicitando se reconozcan las circunstancias agravantes contempladas en el N°8 y 11 del artículo 12 del Código Penal

D. Quantum de la Pena. Solicita al tribunal que se le aplique la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, solicitando considerar los factores que enumera.

20°) Análisis de acusación particular, que, haciéndonos cargo de las acusaciones particulares de **fs. 1.881 a fs. 1890 (Tomo VI)**, presentada por la abogada Carolina Contreras Rivera y rolante de **fs. 1827 a fs. 1850 (Tomo VI)**, presentada por el abogado Sebastián Saavedra, ambos coinciden con el tribunal respecto de la acusación en cuanto a los hechos y la calificación jurídica. Lo que agregan y piden al tribunal es, la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y considerar las circunstancias agravantes contempladas en el N° 8

el artículo 12 del Código Penal, sin perjuicio que el abogado Sebastián Saavedra Cea, igualmente solicita la agravante N° 11 del artículo 12 del cuerpo normativo citado. En el caso del abogado Carolina Contreras Rivera, solicita además que no se considere la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior contemplada en el artículo 11 numeral 6 del Código Penal, por no configurarse dicha circunstancia. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal serán analizadas con posterioridad. En consecuencia el tribunal en este aspecto nada más tiene que analizar.

REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

21°) Para mayor ilustración y atendido además que se ha alegado la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, que se analizará más adelante, es necesario reflexionar sobre el delito de lesa humanidad.

Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el

artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso *Prosecutor v. Dusko Tadic*, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excm. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **homicidio calificado**, es un delito de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile,

tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Que a mayor ilustración, este Tribunal reiteradamente se ha pronunciado en las siguientes causas sobre el delito de lesa humanidad: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

C. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

D. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, “**Almonacid Arellano y otros versus Chile**”, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso “**Barrios Altos versus Perú**” de 14 de marzo de 2001, en cuanto

la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones

sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

E. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean

imprescriptibles, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso *Gelman Vs. Uruguay* determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención

Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

F. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

F.1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.

F.2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

F.3. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

F.4. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

F.5. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

F.6. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

F.7. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

G. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

H. Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte

Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delito que es imprescriptible.**

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

22°) ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL: Que a **fs. 2125 a fs. 2149 (Tomo VI)** el abogado Alfonso Podlech Delarze, en representación de Oscar Podlech Michaud, alega la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N°6 y 103 del Código Penal.

23°) ANÁLISIS DE TRIBUNAL: En relación a la atenuante del **artículo 11 N°6** del texto antes citado: Examinada la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, solicitada por la defensa se reflexiona lo siguiente: **Se da lugar a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**, ya que al acusado le favorece esta minorante, toda vez que de su extracto de filiación y antecedente citado al inicio de este fallo, se puede observar que no tenía antecedentes penales pretéritos, todos a la época de los hechos. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia. En todo caso, no hay ningún antecedente sobresaliente o excepcional que permita al tribunal calificar esta atenuante. Así actuar correctamente en la vida, cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias son parte de las condiciones básicas que se pide a toda persona al convivir en sociedad.

24°) INSTITUCIÓN DE LA MEDIA PRESCRIPCIÓN O PRESCRIPCIÓN GRADUAL:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

A. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito

de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como

la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karinna Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Recientemente la ltma. Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: "Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Del mismo modo, Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidios calificados en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: "**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al

hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. Ratificando lo expuesto, con fecha reciente la Excelentísima Corte Suprema en roles N°5780-2023 denominado “Caso Caravana de la muerte episodio La Serena” de fecha 28 de diciembre de 2023 y en causa N°22.276-2022 denominado “Caso quemados” de fecha 05 de enero de 2024, ha rechazado la institución de la media prescripción. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza** la petición realizada por la defensa del encausado Alfonso Podlech Michaud.-

25°) Agravantes de responsabilidad penal.

A. Que a **fs. 1881 a fs. 1890 (Tomo VI)** la abogada Carolina Contreras Rivera, en representación de **la Unidad de Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos**, alega la agravante de responsabilidad penal para los acusados la del artículo 12 N°8 del Código Penal.

B. Que a **fs. 1827 a fs. 1850 (Tomo VI)** el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de los querellantes y demandantes civiles, alega la agravante de responsabilidad penal para el acusado las del artículo 12 N° 8 y 11 del Código Penal.-

26°) ANÁLISIS DE TRIBUNAL:

A. QUE EN RELACIÓN A LA AGRAVANTE DEL ARTÍCULO 12 N°8 DEL CÓDIGO PENAL: solicitada por la abogada **Carolina Contreras Rivera** de **fs. 1881 a fs. 1890 (Tomo VI)** y **Sebastián Saavedra Cea** de **fs. 1827 a fs. 1850 (Tomo VI)**, tal como este Tribunal lo ha dicho en las **causas: rol 114.000** seguida por el homicidio simple de Waldo Rivera Concha; y en causa **rol 44.305**, seguida

por los homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos. Con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas, este Tribunal acoge la agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo para el acusado para el delito de secuestro calificado. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad, también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo en la causa rol N°2.182-98 “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habría tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hizo, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionarios públicos no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 del Código Penal no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, de la institución de Carabineros de Chile, podría no haberse aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de la calidad de funcionario público. El delito de homicidio calificado no tiene en el tipo el factor funcionario público, como otros delitos que tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. **Por ello es que**

debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal para el acusado.

B. En relación a la agravante del **artículo 12 N°11**, por el abogado Sebastián Saavedra Cea, no se acogerá esta agravante. En primer lugar porque ya se acogió la agravante anterior, a fin de no incurrir en doble incriminación. En segundo lugar, porque la parte querellante no desarrolla adecuadamente la forma en que podrían reunirse los requisitos para que ella sea aplicable.

27°) DETERMINACIÓN DE LA PENA. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida la gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la extensión de la pena, obtengan algún beneficios de la **Ley 18.216** atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente).

Que de igual forma se ha razonado, debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.

28°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de: apremios ilegítimos con resultado de muerte perpetrado en contra de Victoriano Fernández Coloma en la ciudad de Temuco. Delito previsto y sancionado en el **artículo 150 N°1 del Código Penal**, en su carácter de **lesa humanidad**, vigente a la época de los hechos, que tiene una pena de **PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**.

29°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 1771 a fs. 1809 (Tomo V)**, fecha 29 de abril de 2023, y la calificación final que se ha hecho en esta sentencia al encartado Alfonso Podlech Michaud, le cabe responsabilidad como autor. En este caso a todos le beneficia la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal la que como se señaló es en carácter de simple y le perjudica la agravante contemplada en el artículo 12 N° 8 del mismo cuerpo normativa, según se ha razonado. En consecuencia, de conformidad al artículo 68 del Código Penal, se debe hacer la compensación racional de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. En este caso, el acusado queda sin atenuantes ni agravantes, pudiendo en conformidad al artículo citado, recorrer el tribunal toda la extensión de la pena al momento de aplicarla. Al tratarse de apremios ilegítimos con resultado de muerte se aplicará la pena de **PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, más las accesorias legales.

BENEFICIOS DE LA LEY 18.216 Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.

30°) Atendida las razones que se van a exponer a continuación, no procede ningún beneficio de la ley N°18.216 aplicable al acusado Oscar Podlech Michaud

en virtud a la solicitud de la defensa de fs. 2125 a fs. 2149 (tomo VI). Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente el acusado tuviera una pena inferior de igual forma no puede acceder a cumplir la pena en libertad. En efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de Derechos Humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en las **causas: rol 2-2013** ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia; **rol 45.361** ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; **rol 114.051** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 45.357** ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; **rol 114.103** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 45.367** ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; **rol 114.017** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 2-2012** ingreso del Juzgado de Letras de Pucón; **rol 114.034** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 10.914-P** del Juzgado del Crimen de Puerto Montt; y **rol 113.969** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco.

31°) Que continuando con el razonamiento anterior, podemos indicar un **estándar en Derechos Humanos** corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al **artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución** que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, **pp. 27 - 53**). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de fecha 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: *“La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.*

C. Esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos **tanto en sede contenciosa como consultiva** para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte IDH (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.)

“La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia, **pp.356-357**).

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos en especial los artículos N°1.1 y N°2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo en materia de Derechos Humanos**. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia. Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

E.1. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el **párrafo 41**, expuso que: *“Considera inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los*

responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

E.2. Caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, **párrafos 111 a 114**; la Corte IDH ha señalado: (...) “*Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes*”. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la **impunidad**, que la Corte IDH ha definido como: “*la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana*”. Asimismo, la Corte IDH ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el **Caso Barrios Altos** que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de

derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte IDH estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

E.3. Caso la Masacre de la Rochela versus Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, **párrafo N° 191**, señaló de manera expresa: (...) *“que en la investigación de graves violaciones a los Derechos Humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia”*.

E.4. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú, de 10 de julio de 2007, en su **párrafo 190**, puntualiza: *“La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz.”* En particular, la Corte IDH recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

E.5. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el **párrafo 129**, señala que ante esta situación: *“la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la*

*prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad". "En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]*En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber".

E.6. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha Do Araguaia") versus Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el **párrafo 155**, indica: (...) "adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones." Entre ellas, destaca [...] "el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la

concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares”.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia, ha sostenido este **estándar en materia de Derechos Humanos** en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los **beneficios** que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común), el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley N°18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33 de la ley antes mencionada**, permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el **artículo 1 y siguientes de la citada ley**. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe: *“No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los*

delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la **Ley N°18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común**. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **apremios ilegítimos con resultado de muerte**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira-, (...) *“debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos N°1, N°2 y N°29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además los artículos N°26, N°31.1 y N°27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969”*. (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

32°) En consecuencia, aplicando el **control de convencionalidad**, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio). No es posible (además de lo antes razonado y de los estándares normativos) otorgarle algún beneficio de la ley N° 18.216 al acusado Pablo Arnaldo Barría Leal en esta causa y así se dirá en lo resolutive. De esta forma el

control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. **(Núñez, Constanza (2017):"El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Argentina, ARA, Editores. p. 36).** Lo anterior ha sido además ratificado por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 4 de marzo de 2020, en causa **rol N°1.052-2019** (en relación a causa **rol 113.999** de este Tribunal); en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a Derechos Humanos (lesa humanidad). **En consecuencia, no es posible otorgarle al acusado Oscar Podlech Michaud ningún beneficio y deberá cumplir la pena efectiva impuesta como se dirá en lo resolutivo.**

33°) Que en cuanto al informe solicitado al Centro de Reinserción Social el Tribunal lo solicito a fs. 1770 (Tomo VII), sin perjuicio que a fs. 2248 (Tomo VII) se pide cuenta a dicho centro del oficio; no obstante ello no es óbice para que el Tribunal en virtud de la ley 18.216 pueda dictar el fallo.

34°) Que en esta causa se acompañó copia autorizada del peritaje del Servicio Médico Legal, que rola de fs. 2220 a fs. 2230 (Tomo VII), emitido por la médico general Varinia Frau Alveal, en esa línea existe una certificación de fs.

2251 a fs. 2253 (Tomo VII). Que a fs.2233 (Tomo VII) se solicitó un nuevo informe pericial al Servicio Médico Legal, que informe respecto a las facultades mentales del encausado Podlech Michaud. Es decir, ese informe como se ha razonado según consta en esa certificación no fue emitido por un perito especializado esto es, un médico psiquiatra si no que fue emitido para los efectos oficiales en Chile, por un médico general. En consecuencia por ahora, sin perjuicio de lo que se resuelva más adelante en las instancias superiores, el tribunal al ponderarlo no reviste la condición de un peritaje oficial en virtud del cual el Tribunal pueda tenerlo en consideración para los efectos de calificar las condiciones de salud mental del acusado. En todo caso, se está a la espera de otro peritaje, que sea realizado por un médico psiquiatra. De esta forma y a fin de no incurrir en contradicciones entre las diferentes causas, se mantiene la coherencia y consistencia sobre lo que ya ha resuelto este tribunal.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

35°) Que a fs. 1827 a fs. 1850(Tomo VI), en el primer otrosí de su presentación, el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de 1) María Eugenia Castillo Cares, 2) Juan Hernán Fernández Castillo, 3) Segundo Antonio Fernández Castillo, 4) Mireya Carmen Fernández Castillo y 5) Mario Iván Fernández Castillo, deducen demanda de indemnizaciones de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, este a su vez representado por Álvaro Sáez Willer, solicitando en definitiva condenar al Fisco de Chile a al pago de \$ 1.000.000.000 (mil millones de pesos), los que se desglosan en \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, por concepto de daño moral; o la suma que el Tribunal determine en justicia, más reajustes de acuerdo al IPC e intereses desde la fecha de notificación de la demanda y las costas del juicio. Los demandantes se fundan en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. LOS HECHOS. Reproduce los mismos hechos ya referidos en el auto acusatorio de fs. 1.771 y siguientes (Tomo V) de fecha 29 de abril de 2023. Comenta que por el periodo en que se cometió este delito constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad por lo que no puede ser objeto de amnistía o prescripción. En ese sentido, este delito constituye un crimen contra la humanidad. Transgrediendo los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es por ello que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad y que las consecuencias prácticas de tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción. Cita parágrafo 105 y 114 de Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros v/s Estado de Chile.

B. El reconocimiento del estado de Chile de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra: El 3 de diciembre de 1973 Chile concurre con su voto a aprobar la Resolución 3.074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada "Principios de Cooperación Internacional para la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad", citando en su párrafo dispositivo 1° y el numerando 8°. Los fundamentos y criterios señalados por la Resolución ya referida se encuentran contenidos también en otras de la misma índole, pronunciadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Chile como país concurrente, citando jurisprudencia al respecto. En consecuencia, el Estado de Chile se encuentra sujeto a obligaciones internacionales que le son exigibles directamente y ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus agentes, enjuiciar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas o a sus familiares cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Así resulta obvio, público y notorio que el delito cometido en perjuicio de Victoriano Fernández Coloma, es delito de carácter

estatal, que en consecuencia genera responsabilidad y como tal deben considerarse para los efectos de las acciones de reparación, que mediante esta demanda se reclaman.

C. El derecho: Expresa el demandante que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son consecuencia de ese ilícito. Para esta parte, esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado y con ocasión de sus funciones, los que infringieron el daño cuya reparación se solicita. Se trata de una nomenclatura nueva, que proviene del derecho de los derechos humanos, la cual tiene al Estado como responsable directo de las violaciones de los derechos esenciales inferidas por sus agentes, que actúan en cuanto Estado, bajo el mandato, orientación, planificación, anuencia y consentimiento de las autoridades estatales. Así entre otros instrumentos internacionales, lo establece el artículo 63 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en estrecha relación con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Estos agentes actúan en el marco de funciones estatales, con potestades, recursos materiales y humanos que esa misma organización jurídica pone a su disposición para el cumplimiento de sus tareas.

D. La competencia de este Tribunal para conocer y fallar la demanda civil que se interpone en juicio criminal: Una de las tesis sostenidas por el Fisco de Chile para eximirse del pago de las reparaciones en este tipo de juicios, alude a una interpretación errónea del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que el Juez del Crimen, sería incompetente para conocer de estas demandas de reparación. Lo cierto es que el texto actual del artículo citado, modificado por la Ley 18.857, de 6 de diciembre de 1.989, permite en términos amplios la interposición ante el juez que conozca del proceso penal las acciones

civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal. En tal sentido, la excepción de incompetencia absoluta intentada por el Fisco de Chile ha sido mayoritariamente rechazada por los jueces llamados a resolver el conflicto, citando jurisprudencia de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

E. Fallos de la Excma. Corte Suprema que rechazan la tesis de la incompetencia del Tribunal en materia civil: Cita al efecto la sentencia de casación rol Rol 6308-07, de fecha 8 de septiembre del 2008, sentencia de casación rol 10.666-2011 de fecha 04 de junio de 2012, entre otros fallos. Indica que los actos y hechos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, son imputables directamente al órgano al cual pertenecen. Esta es la llamada "Teoría del Órgano". De ahí que la responsabilidad extracontractual del Estado se caracterice por ser una responsabilidad "orgánica", de lo cual deriva otra característica, el de ser una responsabilidad DIRECTA.

F. Lo que ha fallado la Excma. Corte Suprema, en forma unánime, sobre la responsabilidad del Estado: Al respecto cita cuatro sentencias: de fecha 26 de Enero del 2005 "Bustos con Fisco", Rol 3354-03 ; otra de 19 de Octubre del 2005- "Caro con Fisco", Rol 4.004-03 ; otra de 13 de Diciembre del 2005, "Albornoz con Fisco", Rol 4006-03 ; y otra de fecha 20 de Enero del 2006, "Vargas con García y Fisco", Rol 5.489-03, fallos unánimes de la Cuarta Sala del máximo Tribunal, que hace claridad acerca de la responsabilidad el Estado. Asimismo, cita a don Enrique Silva Cimma. Afirma que es importante el reconocimiento de que la responsabilidad extracontractual del Estado se trata de una responsabilidad regida por las normas del derecho público, y que ella emana de la propia naturaleza del Estado, como persona jurídica compleja que debe

desarrollar su actividad teniendo presente los principios rectores de las Bases de la Institucionalidad, contenidas en el artículo 1° de la Carta fundamental. Luego, cita el Artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, cuyo precepto consagra que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. A su turno, cita el artículo 1 y 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado, así como el artículo 6 y el inciso 2 del artículo 38 de nuestra carta fundamental, entre otras normas, argumentando al respecto. Finalmente indica que las normas citadas encuentran su complemento en diversas disposiciones de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, ya sea entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, esa responsabilidad del Estado está consagrada y reconocida en ese Derecho Internacional Convencional, aún más, lo está también en el Derecho de Gentes o Derecho Internacional Consuetudinario, aplicable en Chile y en todo el mundo, que bajo la fórmula de Principios Generales del Derecho Internacional ha elevado el Derecho a la Reparación de las víctimas como una norma de **IUS COGENS**, esto es, principios obligatorios, inderogables, imprescriptibles y con efecto erga omnes. Que en ese sentido es bueno dirigir la mirada hacia la profusa y rica jurisprudencia internacional emanada de órganos regionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos a los que el Estado de Chile les ha reconocido competencia, siendo sus resoluciones vinculantes para todos los Estados suscriptores del Pacto de San José de Costa Rica.

G. Referencias jurisprudenciales de nuestros Tribunales sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en materias de reparación: La forma en que incide el derecho Internacional en esta temática de derechos humanos, queda refrendada en: sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 18 de Enero del 2006, Recurso de apelación

ingreso 37483-2004, por el Homicidio de Gabriel Marfull; fallo de la 5ta. Sala de la I. Corte de Apelaciones de fecha 10 de Julio del 2006, en causa ingreso 65-2001, "Causa Martínez con Fisco"; fallo de Primera instancia pronunciado por el Ministro del Fuero de la I. Corte de Apelaciones, Sr. Jorge Zepeda, en el denominado caso Silberman, Rol 2182-98, del 27 de Septiembre del 2005; en el mismo sentido un fallo de la I. Corte de Apelaciones de fecha 23 de marzo de 2007, especialmente en su considerando 6°; A todo lo anterior debe agregarse lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, con fecha 23 de marzo del 2007, en casación 1325-04 por el Homicidio de Manuel Rojas Fuentes.

H. Lo que ha aprobado Chile recientemente en el seno de las naciones unidas sobre la reparación en materia de derechos humanos: Con fecha 21 de marzo del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 60-147, denominada "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". El Estado de Chile concurrió a la suscripción de esa Resolución, unánimemente aprobada, citando los numerales 13, 15, 18, 19, 20 y 23; además del numeral IV, que hace alusión a la institución de la Prescripción.

I. El daño provocado y el monto de la indemnización demandada: El Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a los demandantes de autos. La lógica pura nos dice que ese Estado no podía investigarse a sí mismo, puesto que quedaría en evidencia su compromiso directo con los crímenes. De esa manera el Estado aseguró a sus agentes la impunidad necesaria. Esa es otra dimensión del daño ocasionado, impedir que los familiares de las víctimas supieran qué pasó con sus seres queridos. Con todo derecho pueden sus representados reclamar al Estado la reparación del inconmensurable daño que les ocasionó, por una acción

intrínsecamente antijurídica. Se trata de un tipo de daño que es imposible soslayar, de aquellos que no se borran y que son manifiestos para cualquier persona que sufre esa circunstancia traumática. **Victoriano Fernández Coloma**, como toda persona cualquiera fuese su condición social, tenían derecho a su dignidad y al goce y disfrute de derechos esenciales por su condición de ser humano y persona. Su desaparición forzada, dejó a su familia en la más completa orfandad e inseguridad. Expresa que ese daño que sufrió y padece hasta hoy sus representados, es lo que constituye el daño moral que se demanda. El daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Todos lo sienten por igual, precisamente por nuestra misma naturaleza humana. Finalmente, define lo que es el daño moral de conformidad a la doctrina, citando además jurisprudencia al efecto. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba, citando jurisprudencia al respecto, con la cual coinciden plenamente y finaliza indicando que las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

36°) Que de **fs. 1916 a fs. 1949 (Tomo VI)**, contesta la demanda civil el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, respecto demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea de fs. 1827 a fs. 1850 (Tomo VI) en la cual se solicita condena al fisco por indemnización de perjuicios por la suma total de \$1.000.000.000 (mil millones de pesos), que se desglosa a \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, con reajustes de acuerdo al IPC, desde la fecha de notificación de la demanda, más intereses legales y costas del juicio. Esta parte

solicita que la mencionada demanda sea íntegramente rechazada, por los siguientes fundamentos:

REPARACIÓN SATISFACTIVA. IMPROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR HABER SIDO YA INDEMNIZADOS LOS DEMANDANTES EN CONFORMIDAD A LAS LEYES DE REPARACIÓN:

Respecto de la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea de fs. 1827 a 1850 (Tomo VI), en representación de 1) María Eugenia Castillo Cares, 2) Juan Hernán Fernández Castillo, 3) Segundo Antonio Fernández Castillo, 4) Mireya Carmen Fernández Castillo y 5) Mario Iván Fernández Castillo, en cuanto invocan la calidad de **cónyuge e hijos** de la víctima. Las indemnizaciones solicitadas en autos se desenvuelven en el marco de infracciones a los derechos humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional. Sin embargo, no es extraño que en muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estimen más lejanos; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño. En esas circunstancias, la Ley N°19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero. En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre del año 2019, las siguientes sumas: **a) Pensiones:** la suma de \$ 247.751.547.837 como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$ 648.871.782.936, como parte de las pensiones asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech). **b) Bonos:** la suma de \$41.910.643.367 asignadas por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737 por la referida Ley 19.992. **c) Desahucio (bono compensatorio):** la suma de \$1.464.702.888 asignadas por medio de la Ley 19.123. En consecuencia, a diciembre de 2019, **el Fisco ha**

destinado la suma total de \$992.084.910.400 al pago efectuado a las víctimas, por concepto de reparación del daño moral ocasionado.

Como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos. Ahora bien, para que ello fuera viable, **se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano**; esto es, padres, hijos y cónyuge. En nuestro Derecho se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el **artículo 43 de la Ley N°16.744. Sin perjuicio de lo anterior, los demandantes han obtenido reparación satisfactiva**: El hecho de que los demandantes no haya tenido derecho a un pago en dinero no significa que no ha obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de esta. Tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como acontece en el caso de autos, y que vienen a satisfacer al daño moral sufrido. Así, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: **a)** La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993. **b)** El establecimiento mediante el Decreto N°121 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del 10 de octubre de 2006, del día Nacional del Detenido Desaparecidos (se elige el día 30 de agosto de cada año). **c)** La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. **d)** El establecimiento mediante Ley N°20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos. **e)** La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DDHH. Además, los actores de autos son titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). En suma, y como conclusión, el cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue en el presente juicio. De esta forma, los ya referidos

mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, **no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.**

B. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

- a. Normas de prescripción aplicables:** Oponen la excepción de prescripción extintiva de las acciones de indemnización de perjuicios deducidas por los mencionados actores con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; solicitando que, por encontrarse ellas prescritas, se rechace la demanda de autos en todas sus partes.

Según lo expuesto en las mencionadas demandas los delitos de autos fueron cometidos en el mes de **septiembre del año 1973**. Pero es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 04 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, **12 de junio de 2023**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil

En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

- b. Generalidades sobre la prescripción:** Aduce que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Por ende,

la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, citando jurisprudencia nacional al efecto. Advierte que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1° del Código Civil). Adopta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

c. Fundamento de la prescripción: La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Los planteamientos doctrinarios permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Afirma que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. En la especie, el ejercicio de las acciones civiles ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

d. Jurisprudencia sobre la materia:

- i. **Cita la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013:** En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando: **1°)** Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por

analogía o interpretación extensiva. **2°)** Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal. **3°)** Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. **4°)** Que, no obstante, la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los Tribunales de justicia. **5°)** Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde este momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la persona desaparecida.

- ii. **Otros fallos de la Excma. Corte Suprema en la materia:** Agrega que debe tenerse especialmente en cuenta que existen numerosos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en los cuales se ha reconocido expresamente el carácter prescriptible de las acciones indemnizatorias en casos de violación a los derechos humanos.

e. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un

carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción, citando doctrina fiscal al efecto.

f. Normas contenidas en el Derecho Internacional: Al respecto, se hace cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. En consecuencia, se refiere a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución N°60/147 de 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo modo, el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile" y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, **el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la Ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil.**

C. EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIÓN RECLAMADAS: En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, la defensa fiscal opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos:

- a. **Fijación de la indemnización por daño moral:** Alega que éste consiste en “*la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales*”. Tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extrapatrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél, citando la definición que ha realizado la Excm. Corte Suprema al respecto. Anexa que habrá de estarse entonces al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño. En tal sentido, las cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan absolutamente excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros Tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.
- b. **En subsidio de las alegaciones precedentes de reparación satisfactiva y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos efectuados por el Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales:** Lo anterior, de conformidad a las leyes de reparación (19.123 y 19.980, entre otras) y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. Además, es pertinente hacer presente que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los Tribunales en esta materia.

D. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REAJUSTES E INTERESES CON ANTERIORIDAD A QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUEDE

EJECUTORIADA: Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. A la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Por consiguiente, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y se condene a su representado al pago de indemnizaciones de perjuicios, tales reajustes sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada, fundamentándose en lo dispuesto en el artículo 1.551 del Código Civil y la jurisprudencia de nuestros Tribunales superiores.

37°) Que haciéndonos cargo de la **contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

- A.** Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación.-
- B.** Excepción de prescripción extintiva.
- C.** En cuanto al daño e indemnización reclamadas.

A. REPARACIÓN SATISFACTIVA. IMPROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR HABER SIDO YA INDEMNIZADOS LOS DEMANDANTES EN CONFORMIDAD A LAS LEYES DE REPARACIÓN:

Respecto de: **a)** La demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el **abogado Sebastián Saavedra Cea de fs. 1827 a fs. 1850 (Tomo VI)**, en representación de **1) María Eugenia Castillo Cares, 2) Juan Hernán Fernández Castillo, 3) Segundo Antonio Fernández Castillo, 4) Mireya Carmen Fernández Castillo y 5) Mario Iván Fernández Castillo**, en cuanto invocan la **calidad de cónyuge e hijos** de la víctima. Será rechazada por este

tribunal y así se estará en lo resolutivo, en especial por los siguientes fundamentos ya ponderados en siguientes causas:

a. **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

b. **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

c. **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

d. **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

e. **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

f. **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

g. **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

h. **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

i. **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016,

j. **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

k. **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufoquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

m. **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

n. **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

ñ. **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

o. **Causa rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

p. **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

q. **Causa rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

r. **Causa rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

s. **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

u. **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

v. **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017;

w. **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017,

x. **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018;

y. **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020;

z. **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

a.1. **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

a.2- **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

a.3- **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018;

a.4. **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018;

a.5- **Causa rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

a.6 **Causa rol 113.996**, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

a.7 **Causa rol 29.979** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

a.8 **Causa rol 45.365**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

a.9 **Causa rol 45.367** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

a.10 **Causa rol 44.305** del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

a.11 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

a.12 Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chenqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

a.13 Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.

a.14. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.

a.15. Causa rol 5-2013 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera.

a. 16. Causa rol 63.551 de ingreso del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Patricio Rivas Sepúlveda.

a.17. Causa rol 113.969 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el FISCO de Chile.

En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado, el oficio **de fs. 2172 (tomo VI)** por parte del Instituto de Previsión social, en DSGT N° 4792-15003 del 14 de julio de 2023.-

B. QUE EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL ARTÍCULO 2.332 EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 2.497 DEL CÓDIGO CIVIL: También **será rechazada**. Este Tribunal, en igual sentido, estará

a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo rol 1424-2013 de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el **caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile”** de fecha 29 de noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la

aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnización reclamada: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma , lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I , artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de

1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals**: Atisbos de Suprlegalidad en el ordenamiento positivo. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

C.1. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un

marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls**. *Una Teoría de la Justicia*. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

C.2. Que en la misma línea, el autor citado en su obra *Liberalismo Político*, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

C.3. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo *La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile*, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La*

Experiencia Chilena” (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos,

aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

C.4. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia se **procede a rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.**

C.5. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

C.5.a. Causa rol N°5572-2019, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

C.5.b. Causa rol N° 82-2021 caratulados “Luchsinger Mackay con FISCO de Chile del 05 de agosto de 2021, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:...” “Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “**falta de servicio**”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive

“se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

D. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REAJUSTES E INTERESES CON ANTERIORIDAD A QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUEDE EJECUTORIADA: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a la actora una indemnización determinada, **este pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado (Fisco de Chile) se encuentre en mora.**

E. RESPECTO DE LAS COSTAS DE LA CAUSA: En relación al argumentos dado por el FISCO de Chile, este debe ser rechazado, puesto que no obstante el fallo de la Corte IDH caso “**Órdenes Guerra y otros versus Chile**” de fecha 29 de Noviembre de 2018. Este demandado sigue insistiendo repetidamente que deben rechazar estas acciones, que no se debe pagar a las víctimas, invocando además la prescripción; no obstante los últimos fallos que rechazan la prescripción de la Excma. Corte Suprema. Luego si ha sido vencido en el juicio, debe pagar las costas.

38°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte en contra de Victoriano Segundo Fernández Coloma, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Testimonios sin tachas y legalmente examinados de Víctor Hernán Maturana Burgos de fs. 2195 a fs. 2196 (Tomo VI), Marcela Alejandra Vega

Rodríguez de fs. 2197 a fs. 2198 (Tomo VI) y Daniel Octavio González Vega de fs. 2199 a fs. 2200 (Tomo VI) quienes, en síntesis, declaran conocer desde hace años a los demandantes civiles, en el caso la primera por ser la dirigente de un organismo de Derechos Humanos de Temuco, el segundo por ser hijo de un amigo de la víctima y el tercero por ser su vecino. Declaran que conocen y les consta lo vivido por doña María Castillo Cares y sus hijos, y siempre la han visto triste, angustiada, viviendo en precarias condiciones, cuando sus hijos eran pequeños, quienes pudieron tener educación básica. Agregan que esta pena y daño psicológico aún está presente, para a los hijos les hizo mucha falta su padre.-

B. Informe de la Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, **de fs. 1953 a fs. 2123 (Tomo VI)** en virtud del cual se adjunta fotocopia los siguientes documentos de trabajo internos elaborados por la Vicaría de la Solidaridad: **a)** Algunos factores de daño a la salud mental. Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Programa de Salud Mental. s.f., 17 p. (Documento de trabajo interno); **b)** Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Victoria Baeza Fernández y otras. Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Asistentes Sociales Departamento Jurídico, abril 1987, s.p. (Documento de trabajo interno); **c)** Situación Emocional de menores, hijos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. (Capítulo IV, Documento sin título, Santiago de Chile, junio 1980; **d)** "Salud Mental y Violaciones a los derechos Humanos". Equipo de Salud de la Vicaría de la Solidaridad, integrado por DR. Andrés Donoso; Dr. Guillermo Hernández; Ps. Sergio Lucero, Autor Responsable: Ps. Sergio Lucero Conus, Junio 1989; **e)** Los ejecutados de Calama: Una experiencia de trabajo social con sus familiares a 14 años de sus ejecuciones. Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Ángela Cofré Guerra, Asistente social departamento jurídico Vicaría de la Solidaridad, Diciembre 1987, s.p. (documento de trabajo interno); **f)** Algunos Problemas de Salud Mental detectados por Equipo Psicológico Psiquiátrico. Julio 1978, 5.p.+ anexo. (Documento de trabajo interno).-

C. Informe del ILAS del 31 de enero de 2023, de **fs. 1899 a fs. 1907 (Tomo VI)**, que contiene documentación sobre los efectos físicos y psíquicos en los familiares de víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Éste informe a modo de conclusión manifiesta que “no obstante las manifestaciones y consecuencias psicopatológicas descritas, no se trata únicamente de cuadros o síndromes psicopatológicos, sino al mismo tiempo de expresiones concretas del conflicto social y político desarrollado en una sociedad determinada, que se manifiesta tanto en el psiquismo individual, como en la subjetividad social. Se puede apreciar que frente a diversas situaciones traumáticas, la sintomatología y la desestructuración que se observan pueden manifestarse de manera similar. Es preciso enfatizar, que la especificidad radicada en la situación traumática, que en Chile se definió a través de la represión política. Esta transforma el contexto social haciendo amenazador y traumatizante y con un gran potencial destructivo. Incidiendo en las condiciones materiales de la vida concreta, en la sobrevivencia psíquica, y en los significados y valores que constituyen el sentido de la vida de los sujetos”.

D. Documentos acompañados a la demanda civil presentada por el Abogado Sebastián Saavedra Cea que se desglosan de la siguiente manera:

D.1. Texto de la resolución 60-147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.” De **fs. 1851 a fs. 1860 (Tomo VI)**.

D.2. Texto de la comisión de derechos humanos del consejo económico y social de las naciones unidas, relativo a la promoción y protección de los derechos humanos aprobado con fecha 8 de febrero de 2005 de **fs. 1861 a fs. 1879 (Tomo VI)**.

E. De fs. 2238 (Tomo VII), certificado de nacimiento de Juan Hernán Fernández Castillo, donde consta que su padre es Victoriano Fernández Coloma y su madre María Eugenia Castillo Cares.

F. De fs. 2239 (Tomo VII), certificado de nacimiento de Segundo Antonio Fernández Castillo, donde consta que su padre es Victoriano Fernández Coloma y su madre María Eugenia Castillo Cares.

G. De fs. 2240 (Tomo VII), certificado de nacimiento de Mario Iván Fernández Castillo, donde consta que su padre es Victoriano Fernández Coloma y su madre María Eugenia Castillo Cares.

H. De fs. 2241 (Tomo VII), certificado de nacimiento de Mireya del Carmen Fernández Castillo, donde consta que su padre es Victoriano Fernández Coloma y su madre María Eugenia Castillo Cares.

I. Certificado de matrimonio de fs. 2242 (Tomo VII) de María Eugenia Castillo Cares y Victoriano Fernández Coloma, que consta contrajeron matrimonio el 29 de diciembre de 1965.-

39°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocados por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte de Victoriano Fernández Coloma, **está plenamente acreditado**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes las indemnizaciones que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por la actora y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como

indemnización para los actores, por el ilícito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, **cometido por los Agentes del Estado, esto es: 1.000.000.000 (mil millones de pesos), lo que se desglosan en \$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles.**

40°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N° 6, 12 N°8 y 11, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 56, 61, 68, 69, 103 y 150 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 460, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

I. NO HA LUGAR A LAS TACHAS interpuesta a. fs. 2.125 a fs. 2149 (Tomo VI) por el abogado Alfonso Podlech Delarze, en representación del acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

EN CUANTO A LA ACCION PENAL:

II. QUE NO HA LUGAR, a las excepciones de fondo enunciadas en el segundo otrosí de fs. 2.125 (Tomo VI) por el abogado Alfonso Podlech Delarze en representación de Oscar Podlech Michaud.

III. QUE NO HA LUGAR al sobreseimiento definitivo solicitado por el abogado por Alfonso Podlech Delarze en representación de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud a fs. 2125 a fs. 2149 (Tomo VI).

IV. QUE SE CONDENA con costas a OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, R.U.N 3.085.228-1 ya individualizado en calidad de **autor**, del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de muerte de Victoriano Segundo Fernández Coloma, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 150 N°1 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, perpetrado en la ciudad de Temuco en diciembre de 1973, a la pena de **CINCO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MAXIMO** y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

V. Que respecto al acusado OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el **27 de diciembre de 2022**, como consta a fs. 1 677(Tomo VI), cuando es notificado del auto de procesamiento de **fs. 1602 a fs. 1640 (Tomo VI)**, en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total, hasta el **10 de enero de 2023**, cuándo según consta de **fs. 1687 (Tomo VI)** la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida cautelar por libertad provisional bajo fianza.

VI. La pena impuesta al condenado comenzará a regir desde que **se presente o sea habido en la presente causa.**

VII. Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto la medida cautelar personal impuesta al acusado, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

VIII.- Que **NO HA LUGAR** a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en su presentación de fs. 1.916 a fs. 1949 (Tomo VI) esto es:

A. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación (*respecto de la demanda civil interpuesta por el abogado Sebastián Saavedra Cea*).

B. Excepción de Prescripción extintiva. Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

IX.- Que **HA LUGAR** a la Demanda Civil interpuesta por el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de **1) María Eugenia Castillo Cares, 2) Juan Hernán Fernández Castillo, 3) Segundo Antonio Fernández Castillo, 4) Mireya Carmen Fernández Castillo y 5) Mario Iván Fernández Castillo**, de fs. 1.827 a fs. 1850 (Tomo VI), en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte en la persona de **Victoriano Segundo Fernández Coloma**, la suma de **\$1.000.000.000 (mil millones de pesos)**, lo que se desglosa en **\$200.000.000 (doscientos millones de pesos)** para cada uno de los demandantes civiles.-

X.- La suma anterior deberá ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la

sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

XI.- Que se condena en costas al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente al sentenciado, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere, facultándose al Tribunal para que cite al sentenciado personalmente, bajo apercibimiento de arresto o se constituyan en su domicilio si fuera necesario, realizando todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia, pronunciándose sobre las peticiones que hiciera el sentenciado en el acto de la notificación, en especial si presentaran verbalmente recurso de apelación.

Considerando la pena decretada en contra del sentenciado y teniendo presente las medidas cautelares vigentes, **fórmese** cuaderno separado **“cuaderno de medidas cautelares”** en este proceso. Incorporándose a este lo referente a revisión de medidas cautelares; tales como prisión preventiva, arresto domiciliario total, arresto domiciliario parcial, obligación de firma mensual y arraigos nacionales según corresponda.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al FISCO de Chile; a través de Receptor de turno del presente mes.

En el caso del **querellante Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia y DD.HH**; notifíquese personalmente en Secretaría del Tribunal, a cualquiera de los abogados que tenga su representación.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo **509 bis del Código de Procedimiento Penal**, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarle sobre las decisiones del presente fallo y en su oportunidad, archívese.

Consúltase si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 114.011

Dictada por don **ÁLVARO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Felipe Carrasco Veliz, Secretario Ad Hoc de la Itma. Corte de Apelaciones de Temuco.

En Temuco, a veinticinco de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (FRF).